

Resumen

En el caso Ringeisen contra Austria el TEDH considera que se produjo una excesiva duración de la detención preventiva desde la declaración de la quiebra.

NORMATIVA ESTUDIADA

Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales art.5.3.4 , art.6.1 , art.26

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

AGOTAMIENTO RECURSOS INTERNOS

DERECHO A UN PROCESO JUSTO

APLICABILIDAD DEL ART. 6,1

DURACIÓN DEL PROCESO

DETENCIÓN PREVENTIVA

RECURSOS SOBRE SU LEGALIDAD

DURACIÓN

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Procedimiento ante el TEDH

Legislación

Aplica art.5.3.4, art.6.1, art.26 de Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

Sinópsis *Relación de hechos: El Sr. Ringeisen, ciudadano austriaco y agente de seguros, se dedicaba también a transacciones inmobiliarias. Tras realizar varios negocios inmobiliarios, el mencionado individuo interpuso varios recursos contra las resoluciones administrativas que denegaron la aprobación de una mutación de propiedad, de modo que recurrió dos veces ante el Tribunal Constitucional. Posteriormente, fue acusado de estafa y de quiebra fraudulenta. Durante ambos procesos, sufrió unos plazos de detención provisional que oscilaron, en el primero período, del 5 de agosto de 1963 al 23 de diciembre del mismo año, y en el segundo, del 15 de marzo de 1965 al 20 de marzo de 1967. Ambas decisiones de prolongar la detención provisional se basaron en los peligros de fuga y repetición. Las peticiones de puesta en libertad, por parte del Sr. Ringeisen, fueron desestimadas, así como los recursos interpuestos contra estas denegaciones.*

El Sr. Ringeisen acudió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, alegando la violación de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del primer Protocolo Adicional por parte del Gobierno austriaco. La Comisión Europea admitió solamente la alegación de los artículos 5 párrafo 3, referido al plazo razonable de detención provisional y el artículo 6 párrafo 1, en cuanto a la duración de los procedimientos penales. La Comisión Europea estableció, en su informe, que hubo violación del artículo 5 párrafo 3, pero no del artículo 6 párrafo 1.

Sobre el art. 6, 1 Convenio: La Comisión Europea trasladó el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, previamente, admitió su competencia y señaló que el agotamiento de los recursos internos del artículo 26 del Convenio Europeo es una regla sometida a una interpretación flexible. Además, el Tribunal Europeo consideró que la decisión de no aprobar un contrato de venta de Ringeisen era una decisión sujeta a normas administrativas pero en conexión con relaciones de tipo civil, por lo que resultaba de aplicación el artículo 6.1 del Convenio Europeo. El Tribunal Europeo estimó que, respecto a la violación posible del artículo 6 párrafo 1, suscitada por el cambio de propiedad en los terrenos agrícolas, no se dió dicha infracción, ya que el proceso fue equitativo, independiente e imparcial.

Sobre el art. 5,3 Convenio: En lo relativo a la posible violación del artículo 5.3 del Convenio Europeo, el Tribunal Europeo estudió los dos períodos de detención. En cuanto al primero, el Tribunal Europeo estimó que no era una cuestión a analizar por él, puesto que precedía en más de seis meses a la interposición de la demanda ante la Comisión Europea. En cuanto al segundo período, el Tribunal Europeo consideró que, desde el momento en que el Sr. Ringeisen fue declarado en quiebra, la detención sobrepasó el plazo razonable. El Gobierno austriaco estimaba que la detención tras la condena por estafa había dejado de ser preventiva. Mas el Tribunal Europeo no lo entendió así, sino que, para él, continuaba siendo preventiva, existiendo una interrelación entre las dos detenciones.

Respecto a la infracción del artículo 6.1 del Convenio Europeo por la duración excesiva de los procedimientos penales, el Tribunal Europeo, al igual que la Comisión Europea, consideró que no hubo violación de dicho artículo, dada la complejidad del asunto y el hecho de que la dilación fue propiciada por el Sr. Ringeisen.

En el fallo existió unanimidad en cuanto a la consideración de que no hubo violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo. Tampoco existió vulneración de dicho artículo en el cambio de propiedad en terrenos agrícolas, ni en la duración de los procedimientos penales. Más problemático fue el tema del plazo de la detención provisional del artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Votos particulares: En los votos particulares, y en lo relativo a la duración de la detención provisional, los jueces World y Sigurjónsson no estuvieron de acuerdo en la competencia del Tribunal Europeo, y se refirieron a la sentencia De Wilde, Ooms y Versyp. Por su parte, el juez H"mlmb"ck estimó que no se dió una infracción del artículo 5.3 del Convenio, puesto que el Gobierno austriaco contaba con motivos suficientes para denegar la puesta en libertad del demandante. El juez Verdross apuntó a que la detención tras la condena por estafa se regía por el artículo 5.1. a) y no 5.1.c) del Convenio Europeo. El juez Zekia entendió que no existió infracción del artículo 5.3 del Convenio Europeo en lo referente al segundo período de detención, puesto que la detención previa a la condena no podía asimilarse a la posterior, en la cual la presunción de inocencia había dejado de tener sentido, a pesar de que la condena no fuera firme. Esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue seguida de una posterior de 1972, en la que se reconoció a Ringeisen el derecho a una reparación de 20.000 marcos alemanes por parte del Gobierno austriaco. Otra sentencia de junio de 1973 estableció que el pago había de hacerse en marcos alemanes, teniendo en cuenta el domicilio actual del demandante en ese país.

VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

SENTENCIA

En l'affaire Ringeisen,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:

H. ROLIN, Président Å. HOLMBZCK A. VERDROSS T. WOLD M. ZEKIA A. FAVRE S. SIGURJONSSON

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, Greffier adjoint,

Rend l'arrêt suivant:

PROCEDURE

1. L'affaire Ringeisen a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre la République d'Autriche et dont un ressortissant autrichien, Michael Ringeisen, avait saisi la Commission le 3 juillet 1965, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention.

2. La demande de la Commission, qui s'accompagnait du rapport prévu à l'article 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au Greffe de la Cour le 24 juillet 1970, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle la République d'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République d'Autriche, un manquement aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.

3. Le 22 août 1970, le Président de la Cour a procédé, en présence du Greffier, au tirage au sort des noms de six des sept Juges appelés à former la Chambre, M. Alfred Verdross, Juge élu de nationalité autrichienne, siégeant d'office aux termes de l'article 43 (art. 43) de la Convention; le Président a également tiré au sort les noms de trois Juges suppléants.

4. Après avoir recueilli l'opinion de l'agent du Gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), ainsi que des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre (article 35 par. 1 du Règlement) et après avoir pris note de leur accord, le Président de la Chambre a décidé, le 2 octobre 1970, qu'il n'y avait pas lieu en l'état de prévoir la présentation de mémoires.

Sur les instructions du Président, le Greffier a invité l'agent du Gouvernement, le 30 octobre 1970, à produire certaines pièces qui sont parvenues au Greffe le 3 décembre.

5. Les 23 et 24 novembre 1970, la Cour a tenu à Strasbourg une réunion préparatoire à l'issue de laquelle une demande de renseignements et documents complémentaires a été adressée au Gouvernement et à la Commission. La réponse de la Commission est arrivée le 5 décembre 1970; le Gouvernement a déposé la sienne et d'autres documents les 10 et 17 février et les 4 et 6 mars 1971.

6. Par une ordonnance du 17 décembre 1970, le Président de la Chambre a fixé au 8 mars 1971 la date d'ouverture des audiences, après avoir consulté à ce sujet l'agent du Gouvernement et les délégués de la Commission par l'intermédiaire du Greffier.

7. La Cour a autorisé les agent et conseils du Gouvernement à s'exprimer en allemand lors des débats oraux, à charge pour lui d'assurer notamment l'interprétation en français ou en anglais de leurs plaidoiries et déclarations (article 27 par. 2 du Règlement).

8. Les audiences se sont déroulées en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, les 8, 9 et 10 mars 1971.

Ont comparu devant la Cour:

- pour la Commission:

M. J.E.S. FAWCETT, délégué principal,

MM. F. ERMACORA et G. SPERDUTI, délégués;

- pour le Gouvernement:

M. E. NETTEL, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, agent,

M. W. PAHR, Chef du département international du service constitutionnel de la Chancellerie fédérale, et

M. C. MAYERHOFER, Ministerialsekretär au Ministère fédéral de la Justice, conseils.

La Cour a entendu les comparants en leurs déclarations et conclusions ainsi qu'en leurs réponses à diverses questions qui leur ont été posées. En outre, le Gouvernement a produit devant elle quelques pièces supplémentaires.

La clôture provisoire des débats a été prononcée le 10 mars 1971.

9. La Commission a déposé le 22 mars 1971 deux autres documents; le 16 avril, le Greffe a reçu du Gouvernement des observations les concernant.

10. Après avoir prononcé la clôture définitive des débats et délibéré en chambre du conseil, la Cour rend le présent arrêt.

FAITS

11. Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent du rapport de la Commission, des documents produits et des déclarations orales des comparants, peuvent se résumer ainsi:

I. Les transactions de Ringeisen

12. M. Michael Ringeisen est un citoyen autrichien né en Hongrie en 1921. De 1958 à 1963, il exerçait la profession d'agent d'assurances à Linz (Autriche); il s'occupait aussi de négociations de prêts et d'opérations immobilières.

13. En 1958, un marchand de Linz, M. Franz Widmann, a répondu à une annonce de journal qui sollicitait un prêt de cent mille schillings. Il a pris contact de cette manière avec Ringeisen à qui il a avancé, en novembre 1958 et janvier 1959, cent cinquante mille schillings en plusieurs versements. Lors de cette transaction, Ringeisen a signalé à Widmann qu'il avait besoin de cet argent pour un certain M. Wenger, mais Widmann n'a pas rencontré ce dernier. En 1959 a été conclu, à l'instigation de Ringeisen, un contrat désignant les époux Widmann comme créanciers et les époux Wenger, parmi d'autres, comme débiteurs. Par la suite, Ringeisen a remboursé soixante-douze mille schillings à Widmann. Toujours en 1959 et en 1960, Ringeisen a négocié au nom de Mme Gertrud Wenger un prêt de onze mille schillings consenti à celle-ci par M. Rudolf Schamberger.

14. Les 9 mai et 6 novembre 1961, Ringeisen a obtenu des époux Roth, avec lesquels il avait eu des relations d'affaires, des procurations de caractère général. Délivrées en considération d'un prêt qu'il avait accordé à M. et Mme Roth, elles avaient pour effet de l'habiliter à agir pour le compte de ceux-ci en morcelant, vendant, louant et grevant de sûretés des terrains dont ils étaient propriétaires à Alkoven et qui se trouvaient inscrits au livre foncier d'Annaberg (Haute-Autriche). En même temps, Ringeisen se voyait attribuer une option d'achat sur ces terrains; les époux Roth s'engageaient en outre à ne les céder à personne d'autre, à s'abstenir de se comporter en propriétaires et à lui octroyer un droit d'occupation exclusive s'il levait ladite option mais que l'autorité administrative compétente refusât d'approuver le transfert de propriété (lettres des 3, 14 et 16 novembre 1961).

15. Le 6 février 1962, Ringeisen a passé avec M. et Mme Roth un contrat d'achat des terrains; le prix convenu se montait à quatre cent mille schillings. Le contrat a été soumis pour approbation, le 30 mars 1962, à la Commission des transactions immobilières du district d'Eferding (Bezirksgrundverkehrskommission, "la Commission de district").

D'après la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières (Grundverkehrsgesetz):

"Article 1 - (1) Tout transfert de propriété ou constitution d'usufruit par acte juridique entre vifs requiert une approbation conforme aux exigences de la présente loi lorsqu'il porte sur une terre vouée, en tout ou partie, à l'agriculture ou à la sylviculture.

(...)

(2) Le refus d'approbation entraîne la nullité de l'acte.

(...)

Article 4 - (1) Les actes juridiques doivent correspondre aux intérêts publics qui s'attachent à la création et au maintien d'aires utilisées pour l'agriculture ou la sylviculture et au maintien et renforcement d'une paysannerie productive ou au maintien et à la création de petites et moyennes propriétés agricoles économiquement saines.

(...)

(5) Ne peuvent être approuvés les actes juridiques qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 ou 3.

(...)

Article 6 - Spécialement, les conditions d'approbation d'un acte juridique (article 4) ne se trouvent pas remplies quand il y a lieu de craindre

a) que l'acquéreur n'ait pour but de revendre la terre avec profit en bloc ou en la morcelant;

b) que l'acquisition des terres de paysans, d'exploitations agricoles modestes ou de parties économiquement importantes de telles exploitations, ne serve à former ou agrandir de grosses propriétés;

(...)

d) que des terres ne soient détournées (...) de leur utilisation agricole ou sylvicole sans motif suffisant;

e) que seul un investissement de caractère spéculatif ne soit envisagé;

(...)

Article 7 - Si un acte juridique requiert l'approbation prévue par la présente loi, les contractants doivent, dans les quatre semaines de sa conclusion, la demander à la Commission de district."

16. Le 28 septembre 1962, la Commission de district a refusé d'approuver le contrat. Elle a relevé que la propriété pouvait assurer la subsistance d'une famille de paysans, et que Ringeisen n'était pas agriculteur mais agent d'assurances. Se référant à des demandes par lesquelles Ringeisen avait sollicité en vain l'approbation d'autres achats de terres convenus entre les époux Roth et lui, elle a estimé que le

dossier révélait clairement un plan de pure spéculation foncière. La Commission a souligné en outre qu'il avait déjà délimité trente-quatre lots destinés à la construction. En conclusion, elle a noté que si la crainte de certaines intentions de la part d'un acquéreur suffisait, aux termes de l'article 6 de la loi, à entraîner un refus d'approbation, il devait a fortiori en aller de même en l'espèce car l'existence de telles intentions se trouvait établie sans conteste.

17. En janvier 1962, Ringeisen avait commencé à vendre une partie des terrains sous la forme de lots à bâtir; il a continué à le faire tout au long de 1962 et jusqu'en avril 1963. Après s'être procuré auprès de l'office provincial de planification (Landesplanungsstelle) un rapport d'expertise sur la base duquel il avait fait arpenter et délimiter les terrains, il a obtenu de l'administration du district d'Eferding (Bezirkshauptmannschaft), le 17 novembre 1962, l'autorisation d'y bâtir. Ces deux services fonctionnent indépendamment de la Commission de district; leurs avis ou permissions n'ont aucune incidence sur sa décision: bien au contraire, ils la réservent expressément.

18. Il appert que Ringeisen avait négligé d'aviser les acheteurs éventuels qu'il agissait en vertu d'une procuration délivrée par M. et Mme Roth; quand l'un d'eux remarquait que Ringeisen n'était pas lui-même le vendeur, on lui expliquait que cette manière de procéder répondait à des fins d'ordre fiscal. A l'époque, Ringeisen signalait aux acheteurs qu'il avait obtenu l'autorisation de construire et affirmait que les travaux pouvaient donc débiter aussitôt. Les contrats rédigés par son avocat comprenaient une clause selon laquelle leur mise en vigueur dépendait de l'approbation de la Commission des transactions immobilières, mais Ringeisen avait certifié aux acheteurs que c'était là une pure formalité. Les derniers contrats, au nombre d'une vingtaine, n'ont pas été conclus par le ministère du même avocat et la clause mentionnée plus haut n'y figurait point. Le prix fixé était payable immédiatement.

En juin 1962, les époux Roth ont prétendu révoquer les procurations. Ringeisen s'y étant opposé, une décision définitive lui enjoignant de consigner lesdites procurations en justice a été rendue le 13 septembre 1963.

19. Ringeisen a attaqué devant la Commission régionale des transactions immobilières (Landesgrundverkehrskommission, "la Commission régionale") la décision par laquelle la Commission de district avait refusé d'approuver le contrat de vente passé par lui avec M. et Mme Roth.

Voici les dispositions pertinentes de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières:

"Article 18

(...)

(2) Il est créé auprès du gouvernement provincial une commission régionale statuant en dernier ressort. Dans l'exercice de leurs fonctions, ses membres ne sont liés par aucune instruction et leurs décisions échappent à toute annulation ou modification par la voie administrative.

(...)

(4) La Commission régionale compte huit membres, à savoir

a) un juge désigné par le gouvernement provincial et qui la préside;

b) un membre désigné par le chef du gouvernement provincial en sa qualité de président de la chambre régionale d'agriculture (Landesagrarsenat);

c) deux membres désignés par le gouvernement provincial parmi les représentants des intérêts des habitants des villes et des lotissements;

d) un membre désigné par le gouvernement provincial dans les milieux économiques;

e) un spécialiste de l'agriculture, désigné par le gouvernement provincial;

f) deux membres désignés par la chambre d'agriculture (Landwirtschaftskammer) de Haute-Autriche.

(...)

(8) Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans (...)

(...)

Article 20

(...)

(2) Contre la décision de la Commission de district, il peut être interjeté appel auprès de la Commission régionale.

(...)

Article 21

(...)

(2) Les commissions des transactions immobilières statuent à la majorité des voix et en audience non publique (...). Il est interdit de divulguer le contenu d'une délibération et en particulier le vote.

(...)"

20. La Commission régionale a siégé le 12 février 1963. Elle a décidé une descente sur les lieux à laquelle elle a procédé le 2 avril; à cette date, des débats oraux se sont également déroulés devant elle. Le 13 mai 1963, elle a débouté Ringeisen: il avait fourni, a-t-elle constaté, des indications contradictoires sur la manière dont il comptait se servir du domaine; il avait morcelé une propriété agricole de qualité et vendu au total une cinquantaine de lots à bâtir. Pour cette raison et plusieurs autres, il fallait craindre d'après elle qu'il ne détournât des terres de leur destination sur une large échelle et sans raison suffisante, et qu'il n'eût pour but de réaliser un investissement de caractère spéculatif (article 6, alinéas d) et e), de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières).

21. Le 5 juillet 1963, Ringeisen a saisi la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) d'un pourvoi (Verfassungsbeschwerde) dirigé contre la décision de la Commission régionale. Il invoquait le droit à l'égalité des citoyens devant la loi et le droit à un procès devant le juge compétent d'après la loi (gesetzlicher Richter - articles 7 par. 1 et 83 par. 2 de la Constitution). Il alléguait notamment que deux membres de ladite commission avaient participé à la délibération et au vote du 13 mai 1963 sans avoir assisté à chacune des deux réunions antérieures consacrées à son appel.

La Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt le 20 juin 1964. Se référant à sa jurisprudence relative à la régularité de la composition d'un organe collégial (Kollegialbehörde), au sens de l'article 133 par. 4 de la Constitution, elle a estimé que les circonstances dont le requérant se plaignait avaient entraîné une violation du droit à un procès devant le juge compétent d'après la loi. En conséquence, elle a cassé la décision de la Commission régionale.

22. A la suite de cet arrêt, la Commission régionale a dû statuer à nouveau sur l'appel de Ringeisen contre la décision rendue par la Commission de district le 28 septembre 1962.

A l'ouverture de cette nouvelle procédure, Ringeisen a récusé pour cause de partialité plusieurs membres de la Commission régionale: le président de celle-ci, soulignait-il, l'avait représentée en 1964 devant la Cour constitutionnelle; deux membres avaient comparu comme témoins devant celle-ci et l'un d'entre eux, M. T., aurait déclaré qu'un autre contrat avait déjà été approuvé au sujet du même terrain; un troisième, désigné par la chambre d'agriculture de Haute-Autriche, se serait prononcé antérieurement contre l'approbation du contrat du 6 février 1962; enfin, un quatrième et un cinquième avaient pris part à la décision du 13 mai 1963, que la Cour constitutionnelle avait annulée le 20 juin 1964. A l'appui de sa demande, Ringeisen invoquait l'article 7 de la loi générale de 1950 sur la procédure administrative (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz), aux termes du paragraphe 1 duquel

"(1) Les fonctionnaires publics (Verwaltungsorgane) s'abstiennent d'exercer leurs fonctions et se font remplacer:

(...)

(iii) dans les affaires dans lesquelles ils ont été ou sont désignés comme agents d'une partie;

(iv) lorsqu'il existe d'autres raisons importantes de douter de leur complète impartialité;

(...)."

La Commission régionale a statué le 3 février 1965.

Elle a relevé d'abord que si Ringeisen ne jouissait d'aucun droit subjectif de récusation d'après la loi mentionnée plus haut, il n'en fallait pas moins examiner d'office ses accusations de partialité. Elle a pourtant estimé que celles-ci se révélaient mal fondées. Dans sa décision, longuement motivée, elle a constaté notamment que l'approbation dont avait parlé M. T. concernait en réalité la vente d'autres propriétés des époux Roth.

La Commission a également débouté Ringeisen de son appel. A la lumière d'enquêtes qu'elle avait ordonnées, elle a constaté qu'au total deux cent neuf lots à bâtir avaient été délimités sur le domaine litigieux; que Ringeisen avait déjà conclu des contrats de vente pour soixante-dix-huit parcelles et que les autorités compétentes en matière de transactions immobilières avaient définitivement refusé d'approuver trente-trois d'entre eux; que Ringeisen avait grevé les différentes propriétés de sûretés portant sur de fortes sommes et que ses diverses demandes d'approbation renfermaient des allégations contradictoires. La Commission a tenu les projets de l'intéressé pour incompatibles avec les principes énoncés à l'article 4 par. 1 de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières, car il y avait lieu de redouter de voir vendre à des fins de construction plus de la moitié des propriétés en question. Aussi a-t-elle considéré que le contrat du 6 février 1962 conduirait à la destruction et au morcellement d'une exploitation jusque-là viable, à l'abandon de bâtiments agricoles et à la revente lucrative de terres de valeur (article 6 de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières).

23. Le 2 avril 1965, Ringeisen a attaqué cette décision devant la Cour constitutionnelle. Entre autres griefs, il réitérait ses accusations de partialité contre six membres, dont le président, de la Commission régionale (paragraphe 22 ci-dessus).

La Cour constitutionnelle a repoussé le moyen le 27 septembre 1965:

"Dans la mesure où le requérant s'efforce de montrer que les membres récusés de la Commission étaient de parti pris, au sens de l'article 7 de la loi générale sur la procédure administrative, et auraient donc dû s'abstenir d'exercer leurs fonctions, la Cour n'a pas eu besoin de s'occuper de ses arguments: même s'ils étaient exacts sur ce point, le requérant n'aurait subi du fait du rejet de ses demandes aucune violation de son droit à un procès devant le juge compétent d'après la loi. En effet, une partie n'a nullement le droit de récuser pour cause de partialité un organe qui décide ou concourt à la décision. Une autorité collégiale ne devient pas incompétente parce qu'un membre partial contribue à son activité. Sauf si une loi spéciale statue autrement en termes exprès, la participation d'un membre partial n'affecte pas davantage la régularité de la composition d'une autorité collégiale, pas plus que la compétence ou la régularité de la composition d'une autorité non collégiale (monokratische Behörde) ne se trouvent mises en question par la partialité du membre unique (Organwarter) légalement désigné. Dès lors, il n'a pas été nécessaire de rechercher si la partialité alléguée a réellement existé (en ce sens, cf. les arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle des 9 octobre 1958, Slg. n° 3408, 6 octobre 1959, Slg. n° 3588, et 19 novembre 1960, Slg. n° 3829)."

Quant aux autres griefs de Ringeisen, le même arrêt les a eux aussi écartés.

II. Les poursuites intentées contre Ringeisen

A. L'affaire d'escroquerie (19 Vr. 394/63)

24. A des dates que les pièces fournies à la Cour européenne ne permettent pas de déterminer, F. Widmann et R. Schamberger ont porté plainte contre Ringeisen pour escroquerie.

25. Le 13 février 1963, M. et Mme Roth ont de leur côté porté plainte contre Ringeisen auprès du parquet de Linz, l'accusant d'avoir abusé de la procuration qu'ils lui avaient délivrée et d'avoir illégalement grevé de sûretés et vendu leur propriété. Le 21 février, le parquet a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire (Vorerhebungen) contre Ringeisen.

Le 28 février, ce dernier a comparu pour la première fois devant le magistrat instructeur qui l'a interrogé.

26. En mars, juin et juillet 1963, les époux Roth ont saisi le ministère public de nouvelles plaintes reprochant à Ringeisen de continuer d'abuser des pouvoirs qu'ils lui avaient délégués. A la lumière de la décision rendue par la Commission régionale le 13 mai 1963 (paragraphe 20 ci-dessus), le parquet de Linz a invité le Tribunal régional (Landesgericht) de Linz, le 16 juillet 1963, à entamer une instruction préparatoire (Voruntersuchung) contre Ringeisen pour infraction aux articles 197 et 205 c) du Code pénal. Il a demandé en outre, le 19 juillet, que les pièces habilitant Ringeisen à agir au nom de M. et Mme Roth lui fussent retirées pour être mises en lieu sûr ou, en cas d'impossibilité, qu'il fût placé en détention préventive en raison du danger de répétition (paragraphe 57 ci-dessous). Le 25 juillet, les autorités ont été informées que les époux Roth avaient obtenu d'un tribunal civil une décision enjoignant à Ringeisen de restituer lesdites pièces.

27. Le lendemain, un avocat représentant dix acheteurs de lots, Me Kehrer, a signalé au parquet que le requérant avait détourné à son profit les sommes qu'ils lui avaient versées, sans être en mesure de leur transférer un titre de propriété.

Sur la base de cette indication, le parquet a demandé que l'on élargît l'objet de l'instruction. Le 6 août 1963, soit un jour après son arrestation (paragraphe 57 ci-dessous), Ringeisen a comparu devant le magistrat instructeur qui l'a entendu au sujet des plaintes portées contre lui. Le 16 août, M. et Mme Roth ont déclaré que les investissements que Ringeisen prétendait avoir réalisés sur leur propriété n'en avaient pas accru la valeur; ils alléguaient aussi qu'il avait récolté et vendu les fruits et produits pour son propre compte.

28. Le 27 août 1963, Me Kehrer a porté plainte au nom de neuf autres personnes. Il affirmait que Ringeisen avait publié derechef, le 20 juillet, une offre de vente de lots; l'un des plaignants annonçait qu'il produirait une copie, établie par Ringeisen, de la procuration des époux Roth. La police a dressé un rapport qui a été soumis au Tribunal régional de Linz le 30 août. Ringeisen a recouvré sa liberté le 23 décembre 1963 (paragraphe 58 ci-dessous).

29. Du 18 septembre 1963 au 6 avril 1964, d'autres acheteurs de lots à bâtir et les époux Roth ont à vingt-huit reprises déposé des plaintes nouvelles et des renseignements complémentaires. Pendant la même période, le magistrat instructeur a entendu vingt-trois fois Ringeisen ou des témoins, ordonné des enquêtes approfondies et décidé d'étendre l'instruction aux nouveaux griefs. Il a clôturé celle-ci le 8 avril 1964.

30. Le 5 mai 1964, Ringeisen a introduit auprès du ministère fédéral de la justice un recours hiérarchique (Aufsichtsbeschwerde) contre les autorités et juridictions de Linz qui s'occupaient de l'affaire. Sur sa demande, le dossier a été communiqué à son avocat du 6 au 12 mai. Il n'a pas non plus été disponible du 25 juin au 6 juillet 1964, en raison d'actions en instance devant une chambre civile du Tribunal régional de Linz.

31. Le magistrat compétent du parquet a pris son congé annuel du 27 juillet au 24 août 1964. Le 1er août, Ringeisen a saisi le parquet d'une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction et de récusation (Delegierungs- und Ablehnungsantrag). Le 25 août, le parquet a transmis cette demande au tribunal avec un avis défavorable.

Le 1er septembre 1964, le dossier a été communiqué à la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof) pour qu'elle statuât sur ladite demande, qu'elle a repoussée le 16 septembre.

Dans l'intervalle, un juge d'instruction du Tribunal régional de Linz avait ordonné, le 31 août 1964, que les poursuites pour escroquerie (19 Vr. 394/63) se dérouleraient indépendamment de l'examen de plaintes portées le 24 août 1964 pour banqueroute frauduleuse (19 Vr. 1566/64, paragraphe 49 ci-dessous).

32. Conformément à l'article 112 du Code de procédure pénale, le dossier a été transmis au parquet le 12 octobre 1964. D'après ce texte, le parquet doit, dans un délai de deux semaines, déposer l'acte d'accusation ou aviser le magistrat instructeur qu'il n'a pas l'intention de prolonger les poursuites; il peut aussi requérir un complément d'instruction. Le 4 janvier 1965, le parquet a demandé que l'instruction englobât une plainte nouvelle introduite le 31 décembre 1964 par Me Kehrer au nom d'un autre acheteur. Le même jour, le dossier a été envoyé au Tribunal de district (Bezirksgericht) de Vienne puis, le 19 janvier, au Tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Wels, dans le cadre de procédures différentes; il a été retourné à Linz le 3 février. Deux jours plus tard, le magistrat instructeur a entendu six témoins.

33. Cité à comparaître devant ledit magistrat le 8 février 1965, Ringeisen est arrivé en retard et a présenté des excuses; il a ensuite été interrogé le 16 février.

Le 18 février, il a été autorisé à consulter le dossier et à établir des photocopies.

34. Le 20 février 1965, Me Kehrer a porté une nouvelle plainte pour laquelle le parquet a requis, le 25 février, un complément d'instruction. Le magistrat instructeur a décidé, le 2 mars 1965, d'étendre l'instruction aux diverses plaintes déposées depuis le 31 décembre 1964.

35. Le 15 mars 1965, Ringeisen a consigné auprès du Tribunal régional de Linz une décision rendue le 23 février par le Tribunal de district de la même ville et relative à l'inscription d'une sûreté sur l'un de ses biens (paragraphe 60 ci-dessous); à cette occasion, il a cependant été arrêté au titre des poursuites pour banqueroute frauduleuse (n° 19 Vr. 1566/64 - paragraphe 61 ci-dessous).

36. L'acte d'accusation (Anklageschrift) a été déposé auprès du Tribunal régional de Linz le 27 avril 1965. Notifié le 30 à Ringeisen, il lui reprochait des actes d'escroquerie qualifiée (Betrug, articles 197, 200, 201 alinéa d) et 203 du Code pénal) et de "gestion infidèle" qualifiée (Untreue, article 205 c) du même code).

Le requérant se voyait accusé:

I. de s'être faussement présenté entre le 3 novembre 1958 et le 5 avril 1963, comme un honnête vendeur, emprunteur et courtier en biens immobiliers dans le dessein d'induire:

A. 78 personnes à agir contre leur intérêt en versant quelque 1.400.000 schillings: Ringeisen leur aurait caché que les contrats de vente par lui conclus avec elles ne pouvaient prendre effet sans l'accord de la Commission des transactions immobilières; il aurait attendu un an pour soumettre à ladite commission treize de ces contrats, et davantage encore pour lui en communiquer vingt et un autres; à la fin, les contrats n'auraient plus mentionné la nécessité de pareille approbation; en outre, il aurait encaissé, à la faveur d'un "dépeçage" professionnel de biens-fonds (gewerbsmässige Güterschlachtere), 1.359.000 schillings qu'il refuserait de restituer;

B. Deux autres personnes, (1) Franz Widmann et (2) Rudolf Schamberger, à consentir des prêts dont une grande partie ne leur aurait pas été remboursée (paragraphe 13 ci-dessus);

II. d'avoir abusé à des fins lucratives de la procuration que les époux Roth lui avaient délivrée le 9 mai 1961, et qu'ils avaient retirée dès le 22 août 1962, en grevant après cette dernière date leurs terres d'Alkoven de diverses sûretés et charges.

37. Le 3 mai 1965, Ringeisen a attaqué (Einspruch) l'acte d'accusation auprès de la Cour d'appel (Oberlandesgericht). Il alléguait notamment qu'il n'avait pas eu l'intention de léser les acheteurs de lots et qu'il avait investi dans la propriété plus de deux millions de schillings. Dans le même document, il réclamait aussi le renvoi de toutes ses affaires civiles et pénales à des juridictions situées en dehors du ressort de la Cour d'appel de Linz: à l'en croire, il était absolument impossible de trouver sur place un juge vraiment impartial et objectif, qui ne fût pas prévenu contre lui soit pour avoir participé aux travaux des commissions des transactions immobilières, soit pour avoir connu des litiges nés de ses opérations relatives au domaine.

Le parquet a combattu ces demandes le lendemain.

38. Le 19 mai 1965, la Cour d'appel de Linz a rejeté le recours de Ringeisen contre l'acte d'accusation; d'après elle, les résultats de l'instruction suffisaient à justifier le soupçon qu'il avait accompli les infractions dont il avait à répondre.

Le dossier a été expédié, le 25 mai, au Tribunal régional de Linz. Le 8 juin, Ringeisen a comparu devant le tribunal qui l'a entendu; il a renoncé à diverses plaintes qu'il avait formulées et n'a maintenu que sa demande de renvoi. En conséquence, le dossier a été communiqué le 11 juin à la Cour Suprême qui a repoussé ladite demande le 8 juillet.

39. Le 3 août 1965, Ringeisen a récusé auprès de la Cour d'appel tous les juges du Tribunal régional de Linz. La Cour lui a enjoint de spécifier ses motifs, mais il s'est désisté de sa demande le 6 septembre, sauf pour le juge d'instruction qui avait ordonné, le 15 mars 1965, son arrestation dans l'affaire de banqueroute frauduleuse. Il a formé en outre une nouvelle demande générale de renvoi. Le Président du Tribunal régional de Linz a écarté la demande de récusation le 13 septembre et la Cour d'appel a constaté, le 27, qu'il n'existait pas de juridiction de recours en la matière.

Quant à la demande de renvoi, elle a été transmise le 24 septembre à la Cour Suprême qui l'a rejetée le 27 octobre.

40. Le 3 novembre 1965, Ringeisen a été avisé que le procès s'ouvrirait le 13 décembre. Le 4 décembre, il a présenté diverses demandes de renvoi et d'annulation du procès. Le 6 décembre, le président de la chambre compétente du Tribunal régional de Linz l'a informé que comme la Cour Suprême avait déjà repoussé deux demandes de renvoi, ses nouvelles demandes du 4 ne seraient pas examinées et qu'il n'y avait aucune raison de différer le procès.

Ce dernier a débuté le 13 décembre; le 16, il a été ajourné au 13 janvier 1966 pour complément d'instruction, à la requête tant du parquet que de la défense. Le 20 décembre, le tribunal a désigné deux experts chargés d'évaluer les sommes que Ringeisen avait investies dans la propriété.

Le 7 janvier 1966, Ringeisen a demandé que le Procureur général (Generalprokurator) introduisît en son nom un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes). Le président de la chambre compétente l'a informé toutefois, le 10 janvier, que le dossier ne pourrait être communiqué au Procureur général qu'après les débats qui s'ouvriraient le 13; de même, de nouvelles demandes de renvoi que le requérant avait eu l'intention de présenter ne pouvaient, pour le moment, être soumises à qui de droit car cela ralentirait la procédure.

41. Le procès a recommencé le 13 janvier 1966 pour s'achever le lendemain.

Reconnu coupable d'escroquerie qualifiée au détriment des 78 acheteurs et de F. Widmann (section I-A et I-B-1 de l'acte d'accusation) et acquitté pour le surplus (section I-B-2, R. Schamberger, et II, époux Roth), Ringeisen a été condamné à trois ans de réclusion "rigoureuse" (schwerer Kerker) et aux sanctions complémentaires du jeûne et de la "couche dure" (hartes Lager) tous les trois mois. En déterminant le taux de la peine, le Tribunal régional a tenu compte de circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes: d'un côté, les acheteurs de lots étaient de pauvres gens qui pour payer Ringeisen avaient perdu leurs économies ou emprunté, Ringeisen avait déployé ses activités criminelles pendant une longue période et le tort causé excédait très largement le montant de 15.000 schillings défini à l'article 203 du Code pénal; d'un autre côté, Ringeisen avait un passé sans tache, quelques acheteurs n'avaient pas subi de préjudice et le dommage serait réparé en partie grâce au produit de la faillite des époux Roth. Le Tribunal a usé en faveur de Ringeisen du droit d'"atténuation extraordinaire" (ausserordentliches Milderungsrecht) prévu à l'article 265 a) du Code de procédure pénale. Conformément à l'article 55 a) du Code pénal, il a imputé sur la peine la durée de la détention préventive de l'intéressé (du 5.8.1963 au 23.12.1963 et du 15.3.1965 au 14.1.1966, paragraphes 59 et 77 ci-dessous).

Aussitôt après le prononcé du jugement, Ringeisen a déclaré qu'il comptait se pourvoir en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) et interjeter appel (Berufung), le ministère public qu'il exercerait un pourvoi en cassation contre l'acquiescement et un appel a minima.

42. Les recours ainsi annoncés par le parquet ont été déposés le 25 février 1966; quant aux siens, Ringeisen les a présentés le 3 mars.

Le 9 mars, le dossier a été transmis à la Cour Suprême qui a fixé les débats au 14 juillet 1966. Le 27 juin 1966, ladite Cour a rejeté une demande de Ringeisen tendant à l'audition de témoins et à sa comparution personnelle.

43. Les débats relatifs aux appels et aux pourvois ont eu lieu le 14 juillet 1966 devant la Cour Suprême qui a statué le 27.

La Cour a cassé le jugement du 14 janvier 1966, et renvoyé l'affaire au Tribunal régional, quant au verdict de culpabilité du chef d'escroquerie I-B-1 (F. Widmann), à l'acquittement du chef de gestion infidèle II (époux Roth) et à la peine prononcée. Elle a confirmé en revanche le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie I-A (78 acheteurs) et l'acquittement du chef d'escroquerie I-B-2 (R. Schamberger).

Une fois rédigé, l'arrêt a été communiqué le 29 août 1966 au Tribunal régional de Linz; le 2 septembre, l'examen de l'affaire a été confié à une autre chambre de ce tribunal.

44. Le 9 septembre 1966, le parquet a fait savoir qu'il retirait, en vertu de l'article 34 par. 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les accusations des chefs d'escroquerie I-B-1 (F. Widmann) et de gestion infidèle II (époux Roth); le 14 septembre, le Tribunal régional de Linz a prononcé la clôture des poursuites y relatives. Il ne restait donc plus qu'à fixer la peine à infliger au titre du chef d'escroquerie I-A (78 acheteurs). Ringeisen a été informé que le procès reprendrait devant le Tribunal régional le 18 octobre.

45. Le 29 septembre 1966 et les jours suivants, Ringeisen a présenté de nombreuses demandes de renvoi, de jonction, de révision (Wiederaufnahme des Strafverfahrens), etc., que le Tribunal régional et la Cour d'appel ont toutes repoussées les 12 octobre et 16 novembre.

46. Le procès a recommencé devant le Tribunal régional de Linz le 18 octobre 1966.

Dans son jugement du même jour, le tribunal a relevé d'abord que la prohibition d'une peine plus sévère (*reformatio in pejus*) ne jouait pas en l'espèce car le parquet avait exercé un appel à minima contre la sentence du 14 janvier 1966.

Le tribunal a pris en considération certaines circonstances atténuantes: Ringeisen n'avait subi jusque-là aucune condamnation, avait effacé - à la vérité dans une très faible mesure - le préjudice causé et se déclarait prêt à en réparer le restant, encore que le tribunal ait exprimé une réserve au sujet de son "serment de manifestation" (*Offenbarungseid*). D'un autre côté, le tribunal a souligné qu'il existait des circonstances aggravantes: les victimes étaient de condition modeste, ce qui avait entraîné pour elles des épreuves particulières, les infractions s'étaient échelonnées sur une longue période et le dommage atteignait un montant exceptionnel. Appréciant le poids respectif des circonstances atténuantes et aggravantes, le tribunal a estimé impossible de dire que les premières prédominaient au sens de l'article 265 a) du Code de procédure pénale, de sorte que la peine devait se situer dans les limites définies à l'article 203 du Code pénal (cinq à dix ans de réclusion rigoureuse), bien qu'on pût appliquer le taux minimal.

Le jugement a infligé en conséquence à Ringeisen cinq ans de réclusion rigoureuse, avec les sanctions complémentaires du jeûne et de la couche dure une fois par trimestre. Il a imputé sur la peine la durée de la détention préventive de l'intéressé (du 5.8.63 au 23.12.63 et du 15.3.65 au 18.10.66). Ringeisen a annoncé qu'il introduirait un pourvoi en cassation et un appel; il a aussi présenté une demande de renvoi.

Ringeisen a déposé son appel et son pourvoi le 3 novembre 1966. Le dossier a été envoyé à la Cour Suprême le 24 novembre, puis retourné à Linz du 21 février au 23 mars 1967 pour l'examen d'une demande d'élargissement du requérant (paragraphe 76 ci-dessous).

47. Par la suite, Ringeisen a porté plainte contre un président de chambre à la Cour Suprême, pour abus de pouvoir (*Missbrauch der Amtsgewalt*). Le 26 juin 1967, le parquet de Vienne a informé la Cour Suprême que la question ne serait pas traitée pour le moment; le 30 juin, la Cour a fixé au 5 octobre 1967 les débats relatifs à l'appel et au pourvoi.

Le 29 septembre 1967, Ringeisen a saisi la Cour Suprême d'une demande de récusation visant le président et les membres de la chambre qui devait se prononcer sur ces deux recours; il soutenait qu'une instruction préparatoire avait été engagée contre ledit président devant le Tribunal régional de Vienne pour abus de pouvoir. Le 3 octobre 1967, la Cour Suprême a annulé l'audience prévue pour le 5 et a transmis la demande de récusation à la chambre compétente. Avant que celle-ci eût pu rendre une décision, le Tribunal régional de Vienne a réclamé le dossier le 20 octobre, afin de statuer sur une demande de Ringeisen tendant à l'ouverture d'une instruction contre le président de la chambre de la Cour Suprême saisie de l'affaire.

Le 4 décembre 1967, le dossier a été retourné à la Cour Suprême qui a repoussé la demande de récusation le 19. Par la suite, l'audience a été fixée au 15 février 1968.

Le 8 février 1968, Ringeisen a une fois de plus déclaré récuser les juges à la Cour Suprême, pour la raison qu'une action en dommages-intérêts, portant sur environ cinquante millions de schillings, se trouvait pendante contre le président de la chambre compétente devant le Tribunal régional de Vienne. La Cour Suprême a rejeté la demande le 13 février.

48. Le 15 février 1968, la Cour Suprême a écarté une requête par laquelle Ringeisen, invoquant la nécessité de consulter certains dossiers, sollicitait l'ajournement de l'audience. Par un arrêt définitif du même jour, la Cour a rejeté le pourvoi mais adouci la peine. En fixant le taux de celle-ci, elle a considéré que les circonstances atténuantes prévalaient par leur poids sinon par leur nombre; que l'on pouvait dès lors appliquer l'article 265 a) du Code de procédure pénale; que la sentence initiale de janvier 1966 était adaptée au verdict de culpabilité prononcé à l'époque, mais qu'il fallait tenir compte de l'abandon ultérieur des poursuites pour escroquerie au détriment de F. Widmann. Aussi la peine a-t-elle été réduite à deux ans et neuf mois de réclusion rigoureuse, avec les sanctions complémentaires ordonnées en première instance.

Le 24 avril 1968, en outre, le Tribunal régional a décidé d'imputer sur la peine la durée totale de la détention préventive de Ringeisen.

B. L'affaire de banqueroute frauduleuse (19 Vr. 1566/64)

49. En août 1964, des créanciers ont porté plainte contre Ringeisen; ils lui reprochaient d'essayer illégalement de les empêcher d'obtenir l'exécution de jugements rendus à leur demande quand la vente des lots se révéla impossible (paragraphe 16 et 20 ci-dessus),

et qui le condamnaient à leur rembourser le prix d'achat. A la requête du parquet de Linz, le magistrat instructeur a décidé le 31 août d'entamer une instruction préparatoire, à mener indépendamment de celle - momentanément close en vertu de l'article 112 du Code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus) - qui avait trait aux actes d'escroquerie (19 Vr. 394/63).

Ringeisen a été interrogé le 3 septembre puis, le 20 octobre, par le magistrat instructeur qui, par la suite, a étendu l'instruction à de nouvelles plaintes semblables, déposées vers la fin de 1964 et au début de 1965.

50. Le 16 mars 1965, soit le lendemain de son arrestation dans le cadre de cette affaire (paragraphe 61 ci-dessous), Ringeisen a comparu devant le magistrat instructeur; il a récusé ce dernier et tous les autres juges du ressort de la Cour d'appel de Linz. Le dossier a été communiqué à la Cour Suprême qui a rejeté les demandes de récusation le 1er avril 1965. De nouvelles demandes analogues ont subi le même sort en mai 1965.

51. A la demande de deux créanciers, le Tribunal de district de Linz a placé sous le contrôle d'un administrateur (Zwangsverwalter), le 23 mars 1965, une propriété de Ringeisen sise à Linz.

52. Le 14 mai 1965, le Tribunal régional de Linz a ouvert contre Ringeisen une procédure de faillite (Eröffnung des Konkurses). Les principaux effets d'une telle décision ressortent de l'article 1, paras. 1 et 2, de la loi sur la faillite (Konkursordnung):

"1. Par l'ouverture de la faillite se trouvent soustraits à la libre disposition du failli l'ensemble des biens soumis à exécution et qui lui appartiennent à ce moment ou qu'il acquiert pendant la procédure (masse de faillite) (...)

2. La masse de faillite est conservée et gérée conformément à la présente loi; elle sert à satisfaire en bloc les créanciers personnels qui ont envers le failli des droits patrimoniaux au moment de l'ouverture de la faillite (créanciers de la faillite).

(...)."

Conformément aux articles 75 à 77 de la même loi, ladite décision a été portée à la connaissance d'une série d'autorités de Linz dont différentes juridictions, l'administration fiscale, la caisse de sécurité sociale, la gare centrale, la gare des marchandises, la compagnie danubienne de navigation, la direction des postes et télécommunications, l'ordre des avocats, la chambre de commerce etc. Un avis a été inséré dans le bulletin officiel local (Amtliche Linzer-Zeitung). La nomination du syndic a eu lieu le jour même.

53. L'acte d'accusation a été communiqué au Tribunal régional de Linz le 24 mars 1966 et notifié le lendemain à Ringeisen. Il accusait celui-ci de banqueroute frauduleuse au sens de l'article 205 a) du Code pénal, qui frappe

"quiconque à dessein empêche, totalement ou en partie, ses créanciers ou certains d'entre eux d'obtenir satisfaction, en dissimulant, déplaçant, aliénant ou endommageant un élément de son patrimoine, en alléguant ou reconnaissant une obligation fictive, ou en réduisant sa fortune de toute autre manière (...)".

On reprochait à Ringeisen d'avoir conclu en avril 1964 un emprunt fictif de 200.000 schillings auprès d'une compagnie d'assurances pour laquelle il travaillait en qualité d'agent, puis d'avoir consenti en faveur de cette société à une transaction judiciaire portant sur le même montant, et ce afin de déjouer l'exécution de jugements rendus contre lui. On alléguait en outre qu'également avant sa mise en faillite, il avait utilisé 60.000 schillings pour rembourser sept créanciers qui avaient obtenu des ordonnances de saisie et qu'il avait gardé pour lui les 140.000 schillings restants.

54. Ringeisen a comparu à sa demande devant le Tribunal régional de Linz le 4 avril 1966. Il a attaqué l'acte d'accusation et demandé que la Cour Suprême ou la Cour d'appel de Vienne statuât sur ce recours par le motif que les juridictions de Linz étaient prévenues contre lui. Dans un document daté du 22 avril, il a complété les moyens avancés à l'appui de son recours.

Le 27 juin 1966, la Cour Suprême a décliné sa compétence pour connaître du recours exercé contre l'acte d'accusation, et a écarté la demande de renvoi pour défaut de fondement. La Cour d'appel de Linz a repoussé ledit recours le 6 juillet, estimant que les résultats de l'instruction permettaient de soupçonner Ringeisen d'avoir commis l'infraction dont il avait à répondre.

55. Les 15 août 1966 et 8 février 1967, le Tribunal régional de Linz a jugé irrecevables deux demandes de Ringeisen en révision du procès. De son côté, la Cour Suprême a rejeté le 4 février 1967 une nouvelle demande de renvoi.

56. Le 17 septembre 1968, le parquet a fait savoir qu'il retirait les accusations de banqueroute frauduleuse en vertu de l'article 34 par. 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, eu égard à la condamnation définitive infligée à Ringeisen le 15 février 1968 pour escroquerie. Le Tribunal régional de Linz a prononcé la clôture des poursuites pour banqueroute frauduleuse et Ringeisen en a été informé le 27 septembre 1968.

III. La détention provisoire de Ringeisen

A. La première période de détention (5 août 1963 - 23 décembre 1963)

57. Le 30 juillet 1963, le magistrat de Linz chargé d'instruire l'affaire d'escroquerie (paragraphe 24 et s. ci-dessus) a lancé contre Ringeisen un mandat d'arrêt fondé sur le danger de répétition des infractions (Wiederholungsgefahr), au sens de l'article 175 par. 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale; il a relevé que l'intéressé, tout en connaissant le refus de la Commission régionale d'approuver le contrat d'achat qu'il avait conclu avec les époux Roth, continuait à commettre des actes punissables en faisant insérer dans les journaux de nouvelles offres de vente de lots. Arrêté le 5 août 1963, Ringeisen a comparu le lendemain devant le juge d'instruction qui l'a placé en détention provisoire en raison du danger de répétition.

Ringeisen a réclamé son élargissement en août et septembre 1963. La Chambre du conseil (Ratskammer) du Tribunal régional de Linz a rejeté la demande le 4 septembre 1963: elle a estimé qu'il y avait à la fois danger de répétition et danger d'"obscurcissement des preuves" (Verdunkelungsgefahr - article 175 par. 1, alinéa 3, du Code de procédure pénale). Le 23 septembre 1963, la Cour d'appel de Linz a écarté un recours de Ringeisen, par les motifs que la conduite de celui-ci permettait de s'attendre à de nouvelles infractions de sa part et qu'il existait un danger d'obscurcissement des preuves.

58. Le 28 octobre 1963, Ringeisen a présenté une autre demande de libération que le magistrat instructeur puis, sur recours, la chambre du conseil ont repoussée les 7 et 19 novembre 1963 pour ces deux mêmes raisons.

Saisie d'un recours ultérieur, la Cour d'appel de Linz a fait droit à ladite demande le 19 décembre 1963, pourvu que Ringeisen prit un engagement solennel (Gelöbnis) conforme à l'article 191 du Code de procédure pénale. Elle a souligné notamment ce qui suit:

"(...)

Les ordonnances de référé (Beschlüsse auf Erlassung von einstweiligen Verfügungen) du Tribunal régional de Linz (...) sont maintenant définitives; elles ont enjoint à l'inculpé de déposer en justice les procurations que lui ont délivrées les époux Roth, et lui ont défendu de vendre ou grever de sûretés les terrains (...) d'Annaberg. Si l'on considère en outre que les transactions de l'inculpé sur ces terrains, ainsi que les plaintes pénales et actions civiles y relatives, ont reçu une très large publicité, on ne saurait croire qu'il puisse chercher et trouver de nouveaux acheteurs de lots à bâtir. De plus, l'instruction n'a fourni jusqu'ici aucun indice permettant de conclure qu'il puisse commettre des infractions d'une autre manière, d'autant que les plaintes ont trait pour l'essentiel à la conduite adoptée par lui quant à l'achat et à la revente de la propriété des époux Roth. Du reste, toutes les autres craintes de voir l'inculpé empêcher la sauvegarde des droits des acheteurs de lots ont pu être dissipées grâce à son offre de déposer en justice la décision rendue le 2 octobre 1963 par le Tribunal de district de Linz (...) au sujet d'une inscription de rang de l'hypothèque qu'il songe à constituer (Anmerkung der Rangordnung über die beabsichtigte Verpfändung) sur sa propriété de Linz, en garantie d'une créance de deux millions de schillings. Il n'existe donc pas de raisons spéciales de redouter que l'inculpé répète les infractions dont on le soupçonne. Le motif de détention défini à l'article 175 par. 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale de 1960 fait par conséquent défaut.

Du même coup cessent aussi d'être remplies les conditions requises pour maintenir la détention en vertu des articles 175 par. 1, alinéa 3, et 180 par. 1 du Code de procédure pénale de 1960. D'après l'article 190 par. 2 de ce code, la détention provisoire d'un inculpé ne peut durer plus de deux mois - ou plus de trois mois, si la Cour d'appel autorise pareille prolongation - quand elle se fonde sur le seul motif énoncé à l'article 175 par. 1, alinéa 3. Or, ces délais ont déjà expiré. Sans doute plusieurs plaintes nouvelles ont-elles été portées contre l'inculpé, mais elles concernent principalement le même ensemble de faits, à savoir les agissements liés à l'achat de la propriété des époux Roth et à la revente de parcelles. Au demeurant, le juge d'instruction a déjà entendu pour l'essentiel les personnes nommées dans ces plaintes nouvelles (...), de sorte que pour cette raison également il n'y a plus de danger de collusion ni de danger d'obscurcissement des preuves (Verabredungs- und Verdunkelungsgefahr).

(...)

En ce qui concerne le dépôt, offert par l'inculpé, de la décision relative à l'inscription de rang, ou le renouvellement de cette décision à l'expiration du délai, le magistrat instructeur devra ordonner les mesures nécessaires, d'autant que l'inculpé a expressément offert de déposer ladite décision si on le relâchait."

L'offre ainsi accueillie par la Cour d'appel avait été présentée par Ringeisen dans sa demande d'élargissement du 28 octobre 1963; la Chambre du conseil du Tribunal régional l'avait rejetée le 19 novembre, l'estimant inapte à conjurer le danger de répétition.

59. Ringeisen a recouvré alors sa liberté le 23 décembre 1963 après avoir pris l'engagement solennel et consigné en justice la décision relative à l'inscription de rang d'une hypothèque éventuelle. Sa première détention avait duré quatre mois et dix-huit jours.

60. Convoqué par le magistrat instructeur, Ringeisen lui a déclaré le 30 septembre 1964 qu'il désirait consulter un avocat au sujet d'une seconde inscription de rang (la première devait expirer le lendemain). Ledit juge lui a imparti, pour le dépôt d'une telle garantie, un délai s'étendant jusqu'au 7 octobre. Dans une lettre qu'il lui a envoyée le 17 octobre, Ringeisen a offert une inscription de rang portant sur le produit de la vente éventuelle (Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Veräußerung) de sa propriété de Linz, à concurrence d'un million et demi de schillings. Il a réitéré son offre quand il a comparu, le 16 février 1965, devant le magistrat instructeur; ce dernier a donné son accord, tout en soulignant que l'inscription offerte ne pouvait passer pour un équivalent (Ersatz) de l'ancienne. Le 23 février, Ringeisen a obtenu du Tribunal de district de Linz une décision relative à l'inscription, jusqu'au 22 février 1966, de la nouvelle sûreté annoncée; il l'a déposée auprès du juge d'instruction le 15 mars 1965.

B. La seconde période de détention (15 mars 1965 - 20 mars 1967)

61. Dans l'affaire de banqueroute frauduleuse (19 Vr. 1566/64), le parquet a invité le magistrat instructeur, le 15 mars 1965, à ordonner notamment l'arrestation et la détention provisoire de Ringeisen en vertu des alinéas 3 (danger de collusion) et 4 (danger de répétition) de l'article 175 par. 1 du Code de procédure pénale.

Ledit magistrat a fait droit à la demande. Ringeisen, qui se trouvait au tribunal à propos de l'autre procédure pénale, a été arrêté aussitôt et informé des motifs de sa mise en détention.

Rappelant les infractions dont on soupçonnait Ringeisen dans les deux procédures, le mandat d'arrêt concluait en ces termes:

"En pleine connaissance des très lourdes charges financières qui résultent pour lui de ses spéculations foncières malheureuses, l'inculpé a (...) amputé son patrimoine, destiné à satisfaire les titulaires de droits à réparation, en contractant un gros emprunt, acceptant le paiement anticipé de loyers, réalisant des transferts de propriété, etc.; il a lésé des créanciers non privilégiés et déjoué l'exécution de jugements.

Pour conjurer tant le danger de collusion entre l'inculpé et ses cocontractants que le danger de répétition d'actes de nature à amputer son patrimoine et à déjouer l'exécution de jugements, il y a lieu de délivrer le présent mandat conformément aux réquisitions du parquet."

62. Le lendemain 16 mars 1965, Ringeisen a comparu devant le magistrat instructeur; à cette occasion, il a déclaré recourir contre la décision ordonnant son arrestation et sa détention provisoire.

Le 26 mars 1965, Ringeisen a réclamé par écrit son élargissement; il a repris de manière assez détaillée les diverses considérations énoncées dans le mandat. Il a souligné qu'il lui était absolument impossible de léser ses créanciers, car il avait prêté le 15 décembre 1964 un "serment de manifestation" et ses biens et créances se trouvaient frappés de saisie. Il a ajouté qu'il lui fallait travailler à la campagne en cette saison. A l'appui de ses dires, il a déposé quelques pièces dont la décision d'un tribunal civil lui refusant, le 5 mars 1965, l'assistance judiciaire par le motif qu'il demeurerait propriétaire de biens évalués par un expert à quatre millions de schillings.

Par un mémoire complémentaire du 17 mai 1965, Ringeisen a produit un relevé montrant qu'il avait réclamé aux époux Roth plus de deux millions de schillings dans la procédure de faillite intentée contre eux. Il a prétendu que le maintien de sa détention en avril et mai allait lui faire perdre, en juillet et en août, environ cent mille schillings de revenus agricoles. Il a demandé aussi qu'on le relâchât pour lui permettre de s'occuper de son fils.

La Chambre du conseil du Tribunal régional de Linz a repoussé le recours le 26 mai 1965. Elle a estimé que si le motif tiré du danger de collusion avait cessé de jouer à la suite de l'écoulement du délai légal (article 190 par. 2 du Code de procédure pénale), le danger de répétition rendait nécessaire et opportun le maintien de la détention de Ringeisen

"en raison des données de fait et de droit décrites en détail dans le mandat du 15 mars 1965, ainsi que de l'attitude de l'inculpé qui (s'obstinait) à nier toute culpabilité (...) malgré les résultats partiels de l'instruction, manifestement accablants pour lui: la mentalité de l'inculpé, déjà connue du tribunal, (permettait) de craindre qu'il ne (profitât) de sa liberté pour se livrer derechef aux activités punissables incriminées".

Dans un recours ultérieur, Ringeisen a signalé qu'une procédure de faillite s'était ouverte contre lui le 14 mai; la Cour d'appel de Linz a cependant confirmé, le 16 juin 1965, la décision de la Chambre du conseil en se référant aux attendus de celle-ci.

63. A l'occasion du dépôt de l'acte d'accusation concernant l'affaire d'escroquerie (27 avril 1965), le parquet avait entre-temps invité le Tribunal régional de Linz à placer Ringeisen en détention provisoire dans cette affaire aussi; il invoquait les dangers de fuite (Fluchtgefahr, article 175 par. 1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) et de répétition. La demande relevait que la décision relative à l'inscription de rang d'une hypothèque éventuelle, que Ringeisen avait consignée en justice le 23 décembre 1963, était arrivée à expiration le 1er octobre 1964 et n'avait pas été renouvelée; que les "actions abusives et vouées à l'échec" de Ringeisen avaient empêché ses créanciers d'utiliser cette garantie quand elle restait valable; que des enquêtes avaient révélé que Ringeisen dissimulait des sommes considérables dont il pourrait se servir pour s'enfuir au vu de l'acte d'accusation; qu'en outre, le préjudice causé risquait de devenir irréparable, et que l'obstination particulière de Ringeisen montrait qu'il y avait danger de répétition.

Le 12 mai 1965, le Tribunal régional de Linz a ordonné la remise en détention de Ringeisen dans l'affaire d'escroquerie. Il a commencé par rappeler que si la première détention avait pris fin en décembre 1963, c'était

"(...) surtout parce qu'en offrant de déposer la décision rendue le 2 octobre 1963 par le Tribunal de district de Linz (...) au sujet de l'inscription de rang d'une hypothèque envisagée en couverture d'une créance de deux millions de schillings, l'inculpé (avait) réussi à dissiper le soupçon qu'il pût contrecarrer la sauvegarde des droits des acheteurs de lots à bâtir".

Le Tribunal a ajouté:

"Ringeisen, qui s'était déclaré prêt à procurer aux acheteurs, une fois expirée l'inscription de rang, une nouvelle garantie analogue, n'a pu après cette expiration (1er octobre 1964) que déposer, le 15 mars 1965, une décision prononcée le 23 février 1965 par le Tribunal de district de Linz (...) au sujet de l'enregistrement, dans le livre foncier de St. Peter, d'une inscription de rang pour la vente envisagée du lot n° 238. Avant le 1er octobre 1964, les acheteurs n'avaient pu tirer parti de l'inscription de rang car Michael Ringeisen avait empêché, par des procès incessants, ses créanciers d'obtenir des titres exécutoires. La réparation du dommage apparaît ainsi non seulement douteuse, mais hors de question pour beaucoup de créanciers en raison de lourdes hypothèques qui grevaient déjà la maison sise au n° 217 de la Wiener Reichstrasse (...).

On ne saurait penser que l'inculpé ait vraiment investi en entier, dans le chantier inachevé de la propriété d'Alkoven, le million et demi de schillings versé par les acheteurs; en outre, les enquêtes menées auprès de tous les instituts financiers de Linz ont révélé qu'il n'y a pas déposé d'argent. Il est assez naturel d'en conclure que l'inculpé dissimule des montants dont, sous l'effet de l'accusation à présent portée contre lui, il pourrait se servir pour s'enfuir (...). Au surplus, ses biens-fonds sont si lourdement grevés qu'il ne perdrait pas grand-chose à les abandonner s'il s'enfuyait.

Dans son arrêt [du 19 décembre 1963], la Cour d'appel de Linz a déjà relevé que les nombreuses ventes réalisées encore près d'un an après la décision négative de la Commission de district des transactions immobilières révélaient, dans le chef de l'inculpé, un comportement dénotant une obstination particulière à se procurer de l'argent par la vente de lots à bâtir. Certes, l'inculpé se trouve déjà en détention provisoire dans le cadre des poursuites séparées engagées devant ce tribunal pour entrave à l'exécution de jugements (19 Vr. 1566/64), mais le motif de détention défini à l'article 175 par. 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'en existe pas moins: il y a lieu de craindre que l'accusé, si on l'élargit dans l'autre affaire, ne rende irrémédiable le tort causé aux acheteurs ou, eu égard à la multiplicité des faits antérieurs, ne puisse commettre de nouvelles infractions semblables."

Sur recours, la Cour d'appel de Linz a confirmé cette décision le 19 mai 1965 en raison des dangers de fuite et de répétition. Dans les derniers jours de mai ou au début de juin 1965, Ringeisen a essayé de former un recours ultérieur mais il l'a retiré quand il a comparu en justice le 8 juin (paragraphe 38 ci-dessus).

64. Dans les deux affaires pénales, Ringeisen a introduit d'autres demandes de libération les 12 juillet, 29 juillet, 30 août et 20 septembre 1965. Les magistrats instructeurs les ont repoussées respectivement le 23 septembre, dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, et le lendemain dans l'affaire d'escroquerie. Ils ont considéré tous deux que les motifs de détention subsistaient.

Ringeisen a exercé contre ces décisions deux recours distincts mais conçus en termes presque identiques, à savoir le 24 septembre pour l'affaire de banqueroute frauduleuse et le 27 septembre pour l'affaire d'escroquerie; il les a complétés les 3 octobre et 2 novembre. Il qualifiait d'imaginaires et artificiels les motifs avancés pour le garder en détention. D'après lui, les autorités voulaient le dépouiller de ses biens et droits et l'empêcher d'agir pour la protection des intérêts des acheteurs de lots. S'il recouvrait sa liberté, prétendait-il, il serait à même de se défendre contre ces mesures, de prouver que le parquet couvrait les vrais escrocs et de consulter les dossiers judiciaires alors que des inconnus avaient, pendant sa détention, subtilisé des pièces accablantes pour des témoins et le parquet. Il se plaignait en outre de subir un grave préjudice, faute de pouvoir travailler sur ses terres et à son agence d'assurances, et affirmait que son fils âgé de seize ans avait dû arrêter ses études pour occuper un emploi de simple manoeuvre.

Dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, la Chambre du conseil a rejeté le recours le 10 novembre 1965 en se référant à sa décision du 26 mai 1965, confirmée par la Cour d'appel le 16 juin 1965: d'après elle, les circonstances qui avaient à l'époque justifié le maintien en détention de Ringeisen conservaient tout leur poids. Le 9 décembre 1965, la Cour d'appel de Linz a écarté un recours ultérieur, estimant convaincants les attendus de la Chambre du conseil.

Quant au recours exercé le 27 septembre 1965 dans l'affaire d'escroquerie, il ne semble pas avoir donné lieu à une décision séparée.

65. Au cours du procès d'escroquerie, Ringeisen a réclamé le 17 décembre 1965, dans les deux affaires, sa libération pour Noël; le président de la juridiction de jugement a repoussé la demande le 28 décembre 1965.

66. Le 14 décembre 1965, Ringeisen avait présenté une nouvelle demande d'élargissement dans l'affaire de banqueroute frauduleuse. Il alléguait qu'il n'y avait pas danger de répétition car son patrimoine faisait l'objet d'une procédure de faillite et ne se trouvait plus à sa disposition. Le magistrat instructeur avait rejeté la demande le 20 décembre en se fondant sur la persistance d'un tel danger.

Sur recours, la Chambre du conseil a confirmé cette décision le 29 décembre 1965 en renvoyant aux décisions antérieures relatives à la détention provisoire de Ringeisen (Chambre du conseil, 26 mai et 10 novembre 1965; Cour d'appel, 16 juin et 9 décembre 1965).

Le 9 février 1966, la Cour d'appel a repoussé un recours ultérieur de Ringeisen. Elle a jugé que le requérant n'invoquait aucun fait plaçant pour l'absence de danger de répétition et que l'ouverture d'une procédure de faillite n'éliminait pas ce danger; elle s'est référée à ses décisions des 16 juin et 9 décembre 1965.

67. Le 14 janvier 1966, aussitôt après le prononcé du verdict de condamnation pour escroquerie (paragraphe 41 ci-dessus), l'avocat de Ringeisen avait invité le Tribunal régional à libérer celui-ci en attendant l'examen du pourvoi en cassation et de l'appel. Il soulignait que son client n'avait jamais subi de condamnation jusque-là, qu'après un an de détention une tentative de fuite n'aurait pour lui aucun sens et que le danger de répétition avait disparu avec la vente du terrain. Le parquet avait combattu la demande: à ses yeux, les motifs de détention demeuraient valables et Ringeisen ne tirerait aucun avantage de son élargissement dans cette affaire puisqu'il se trouvait détenu dans le cadre des autres poursuites.

Le Tribunal régional avait décidé que Ringeisen recouvrerait sa liberté dans ladite affaire pourvu qu'il prît l'engagement solennel prévu à l'article 191 du Code de procédure pénale; il avait estimé que les raisons de le détenir n'existaient plus.

Le parquet avait attaqué cette décision en s'appuyant sur les arguments que voici: on ne savait pas au juste ce qu'il était advenu des sommes encaissées par Ringeisen, et il pourrait les utiliser pour s'enfuir; le danger de fuite se trouvait même accru par sa condamnation à trois ans de réclusion, dont deux restaient à purger; il se pouvait que la Cour Suprême augmentât la peine; la fréquence des actes d'escroquerie de Ringeisen laissait penser qu'il y avait danger de répétition; bien que Ringeisen ne disposât plus d'aucune propriété foncière, d'autres moyens s'offraient sans doute à lui pour contracter frauduleusement des emprunts. Le recours ayant un effet suspensif (article 197 du Code de procédure pénale), Ringeisen est resté en détention provisoire.

Le 2 mars 1966, la Cour d'appel de Linz a fait droit audit recours. Elle a estimé que depuis sa décision du 19 mai 1965, la situation n'avait nullement évolué en faveur de Ringeisen. Bien au contraire, la peine infligée à ce dernier, et qu'il pouvait s'attendre à voir aggraver à la suite des recours exercés par le parquet, risquait de l'inciter à prendre le large, d'autant que ses biens-fonds d'Autriche étaient à l'excès grevés de sûretés et qu'il ne subirait pas de véritable perte s'il les abandonnait. En outre, la fréquence de ses actes délictueux et son comportement obstiné justifiaient la crainte qu'il ne répât les infractions. Ce danger n'était pas écarté par l'impossibilité de nouvelles opérations concernant les terrains d'Alkoven: Ringeisen avait aussi à répondre de faits sans rapport avec ces terrains.

68. Le 3 mars 1966, à l'occasion du dépôt de son pourvoi et de son appel contre le verdict prononcé le 14 janvier 1966 dans l'affaire d'escroquerie (paragraphe 42 ci-dessus), Ringeisen a réclamé son élargissement immédiat en relevant qu'il avait déjà passé deux années en détention. D'abord transmis à la Cour Suprême, qui a rejeté le 27 juin 1966 diverses requêtes procédurales de Ringeisen, le dossier a été retourné au Tribunal régional de Linz pour examen de la demande de libération. L'avocat de Ringeisen a retiré ladite demande le 30 juin 1966 afin que le dossier fût aussitôt communiqué derechef à la Cour Suprême en vue de l'audience relative aux pourvois et aux appels, fixée au 14 juillet 1966.

69. Dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, Ringeisen avait présenté le 18 février 1966 une nouvelle demande d'élargissement assortie, une fois de plus, d'une demande de renvoi. Il se référait à trois décisions antérieures (16 juin 1965, 9 décembre 1965 et 9 février 1966), d'après lesquelles le danger de répétition subsistait malgré l'ouverture d'une procédure de faillite; selon lui, l'adoption de ce motif "imaginaire" s'expliquait sans doute par la circonstance que la Cour d'appel ignorait la situation véritable, ou par les pressions d'un membre du parquet qu'il suspectait de tremper dans les intrigues d'Alkoven. A ce propos, il alléguait notamment que des considérations politiques étaient en jeu: à l'en croire, la réalisation de ses projets de lotissement eût entraîné l'arrivée de nombreux acheteurs de condition modeste dont les votes auraient consolidé la majorité socialiste du conseil municipal, perspective contraire aux intérêts du gouvernement provincial et de certains fonctionnaires. Il affirmait que les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Linz étaient prévenus contre lui, car beaucoup d'entre eux siégeaient dans les commissions des transactions immobilières et les autres subissaient l'influence de leurs collègues ainsi que de la publicité tapageuse donnée à l'affaire. Se plaignant en détail de la partialité avec laquelle on avait mené et

menait les diverses procédures engagées contre lui, dont celle de faillite, il protestait de son innocence et soulignait que sa détention durait depuis seize mois. Il menaçait d'entamer le 1er mars une grève de la faim et exigeait que sa demande fût portée devant la Cour Suprême pour que celle-ci en confiât l'examen à un tribunal régional situé en dehors du ressort de la Cour d'appel de Linz.

Le 22 avril 1966, Ringeisen avait réitéré ladite demande en complétant son recours contre l'acte d'accusation. Dans un mémoire ultérieur, déposé le 15 mai 1966, il signalait que le juge d'instruction avait estimé impossible de combiner la première avec le second.

En repoussant, le 6 juillet 1966, le recours contre l'acte d'accusation (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour d'appel de Linz a décidé aussi que Ringeisen resterait détenu en raison de la persistance du danger de répétition; elle a relevé que les données de fait et de droit n'avaient pas changé depuis son arrêt du 9 février 1966.

70. Le 15 juillet 1966, soit le lendemain de l'audience relative aux pourvois et appels introduits dans l'affaire d'escroquerie (paragraphe 43 ci-dessus), Ringeisen a réclamé sa libération dans les deux procédures pénales.

Dans l'affaire d'escroquerie, il soulignait que le parquet général (Generalprokuratur) avait requis, devant la Cour Suprême, la cassation intégrale du verdict de condamnation; il en déduisait que les reproches énoncés dans l'acte d'accusation manquaient désormais de base et qu'il n'existait plus de soupçons de nature à justifier sa détention. Il se plaignait d'avoir subi vingt-deux mois de détention en dépit de son innocence. Entre le 23 décembre 1963 et le 15 mars 1965, ajoutait-il, il n'avait pas profité de sa liberté pour essayer de s'enfuir; partant, rien ne montrait qu'il le ferait à présent. D'après lui, il n'y avait pas davantage danger de répétition: le morcellement des terrains d'Alkoven constituait une opération unique et non renouvelable; en outre, une procédure de faillite s'était ouverte contre les époux Roth dont les biens se trouvaient à la disposition du syndic.

Quant à la demande concernant l'affaire de banqueroute frauduleuse, elle se référait à celle qui avait trait à l'affaire d'escroquerie.

71. Dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, le magistrat instructeur a rejeté la demande le 22 juillet 1966.

Ringeisen a exercé un recours le 8 août 1966. Affirmant ne pas maîtriser assez la langue allemande pour pouvoir formuler par écrit ses griefs avec exactitude et en détail, il qualifiait d'imaginaires les motifs adoptés par la Cour d'appel dans sa décision du 9 février 1966 et exprimait le désir qu'on l'entendît afin de lui permettre d'en compléter oralement la réfutation. Il se plaignait d'avoir passé vingt-deux mois en détention malgré son innocence; pour prouver qu'on refusait de lui rendre justice, il renvoyait à des articles de presse et à des pièces du dossier. Il prétendait avoir aidé de son mieux les acheteurs, de condition modeste, à faire reconnaître leurs droits. Il produisait un document destiné à établir qu'il n'avait jamais été insolvable, et alléguait que sa détention et la procédure de faillite l'empêchaient de veiller au règlement de ses dettes. Il niait avoir déjoué l'exécution de jugements par des paiements préférentiels: indépendamment des terrains d'Alkoven, il avait les moyens de garantir la restitution des montants perçus et de les rembourser par la suite. En le libérant dès que possible, concluait-il, on épargnerait aux acheteurs de nouvelles pertes.

La Chambre du conseil a repoussé le recours le 24 août 1966. D'après elle, la situation de fait et de droit n'avait pas évolué depuis les décisions que la Cour d'appel de Linz avait rendues les 16 juin 1965, 9 décembre 1965 et 9 février 1966, et les circonstances décrites à l'époque continuaient à justifier le maintien de la détention en raison du danger de répétition.

72. Dans l'affaire d'escroquerie, le parquet a combattu le 9 septembre 1966 la demande d'élargissement de Ringeisen: eu égard notamment à l'arrêt de la Cour Suprême (paragraphe 43 ci-dessus), les motifs de détention lui paraissaient subsister.

Le Tribunal régional de Linz a rejeté ladite demande le 21 septembre 1966. Il a estimé qu'il y avait danger de fuite car Ringeisen, définitivement jugé coupable d'actes d'escroquerie ayant causé un préjudice supérieur à 1.300.000 schillings, devait s'attendre à une lourde peine; qu'il existait aussi un danger de répétition, ainsi que la Cour d'appel l'avait constaté le 2 mars 1966; et que d'ailleurs la détention provisoire s'achèverait sous peu puisque le procès devait reprendre devant le Tribunal régional le 18 octobre 1966.

Ringeisen a attaqué cette décision le lendemain. Concernant le danger de fuite, il avançait que sa peine n'excéderait pas celle qu'on lui avait infligée le 14 janvier 1966: sa condamnation avait été cassée sur un point (Widmann) et une série de circonstances atténuantes plaidaient en sa faveur; il fallait considérer aussi qu'il se trouvait détenu depuis près de deux ans et que sa vie privée et professionnelle avait l'Autriche pour centre. Quant au danger de répétition, le temps écoulé, l'état avancé de la procédure de faillite et, ici encore, les deux ans passés en détention provisoire en montraient l'absence. Enfin, Ringeisen voyait dans la reprise imminente du procès une raison spéciale de le libérer aussitôt si l'on ne voulait pas le gêner gravement dans sa défense.

La Cour d'appel de Linz a repoussé le recours le 28 septembre 1966. Danger de fuite et danger de répétition demeuraient d'après elle. Sur le premier point, elle approuvait la décision entreprise; sur le second, elle se référait à son arrêt du 2 mars 1966.

73. Dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, Ringeisen avait présenté le 15 septembre 1966 une nouvelle demande d'élargissement contestant qu'il y eût danger de répétition. Il rappelait d'abord que les actes incriminés remontaient à deux ans et demi déjà, et qu'on l'accusait d'avoir mis de côté 140.000 schillings pour son propre compte. Or, il avait produit des pièces établissant qu'il avait en 1964 dépensé des sommes supérieures; pourtant, et en dépit de ses instances réitérées, le magistrat instructeur n'avait jamais étudié la question, ce qui retardait sa libération. Il soulignait enfin que la procédure de faillite bloquait ses avoirs et que tous ses revenus allaient au syndic.

Le juge d'instruction ayant rejeté la demande le 27 septembre 1966, Ringeisen a attaqué cette décision qui constituait à ses yeux un abus de pouvoir; la Chambre du conseil a écarté le recours le 27 octobre 1966 par des motifs identiques à ceux qu'elle avait énoncés le 24 août 1966 (paragraphe 71 ci-dessus).

Le 30 novembre 1966, la Cour d'appel de Linz a repoussé un recours ultérieur où Ringeisen qualifiait une fois de plus d'imaginaires les raisons invoquées pour le détenir; elle a marqué son accord avec les attendus de la Chambre du conseil. A seule fin d'être complète, elle a ajouté que Ringeisen ne gagnerait pas grand-chose à une décision d'élargissement dans la présente affaire: il se trouvait aussi en détention provisoire au titre des poursuites pour escroquerie, dans lesquelles le Tribunal régional de Linz lui avait infligé le 18 octobre 1966 cinq ans de réclusion rigoureuse, et la Cour Suprême n'avait pas encore statué sur son pourvoi et son appel.

74. Ringeisen a réclamé derechef sa libération, le 27 janvier 1967, dans chacune des deux affaires. Il faisait valoir, dans l'une et l'autre demande, que son mauvais état de santé le rendait inapte à rester incarcéré. Il affirmait en outre, dans l'affaire d'escroquerie, que les dangers de fuite et de répétition étaient "tirés par les cheveux"; dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, que la thèse d'après laquelle il avait mis à l'abri 140.000 schillings pour son propre compte se révélerait fautive si l'on vérifiait ses déclarations, mais que le tribunal s'y refusait.

75. Le 8 février 1967, la Chambre du conseil du Tribunal régional de Linz a rejeté la demande relative à l'affaire de banqueroute frauduleuse, par des motifs semblables à ceux qu'elle avait énoncés les 24 août et 27 octobre 1966 (paragraphe 71 et 73 ci-dessus).

76. Combattue par le parquet le 9 février, la demande concernant l'affaire d'escroquerie a été rejetée le 15 par le Tribunal régional de Linz en ces termes:

"Vu le verdict de culpabilité prononcé pour de nombreux actes d'escroquerie qui ont causé un fort préjudice, et vu la peine [de cinq ans] frappant l'accusé (...), il faut conclure à la persistance des deux motifs de détention. La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici n'a aucun rapport avec le danger de répétition. Eu égard à la peine infligée, cette longue détention ne permet pas davantage de considérer comme conjuré le danger de fuite. A propos de ces deux motifs de détention, il est renvoyé pour le surplus à la décision de la Cour d'appel de Linz du 2 mars 1966 (...)."

Quant à la mauvaise santé invoquée, le tribunal a noté qu'elle ne pourrait justifier une levée d'écrou, mais au maximum une mesure de transfèrement dans une section close d'hôpital; le 1er février 1967, le médecin de la prison avait de reste jugé bon l'état général de Ringeisen.

Ringeisen a exercé contre cette décision un recours auquel la Cour d'appel de Linz a fait droit de 15 mars 1967: elle a ordonné qu'il fût libéré à condition de prendre un engagement solennel. La cour a considéré que depuis son arrêt du 2 mars 1966, la situation de l'intéressé avait beaucoup changé. Après environ deux ans et demi de détention provisoire, on ne pouvait plus raisonnablement présumer qu'il s'enfuirait afin d'échapper aux poursuites, même si l'on avait égard à la peine prononcée le 18 octobre 1966. Concernant le danger de répétition, la cour a relevé que deux chefs d'accusation étrangers à la propriété d'Alkoven - escroquerie au détriment de F. Widmann et gestion infidèle - avaient été abandonnés le 14 septembre 1966: seul demeurait celui qui avait trait à l'escroquerie commise au détriment des soixante-dix-huit acheteurs de lots à Alkoven. Or, l'arrêt du 2 mars 1966 avait déjà constaté que Ringeisen ne pouvait plus disposer des terrains. En outre, on pouvait penser que la durée de sa détention suffirait à le dissuader d'accomplir d'autres infractions, d'autant qu'il n'avait auparavant subi aucune condamnation.

77. Invoquant cette décision, Ringeisen a réclamé à nouveau, le 20 mars 1967, son élargissement dans l'affaire de banqueroute frauduleuse. Sa demande a cette fois donné lieu à un avis favorable du parquet et à une décision positive du juge d'instruction; en conséquence, il a recouvré sa liberté le jour même après avoir pris un engagement solennel. Sa seconde détention avait duré deux ans et cinq jours.

* *

*

78. Dans sa requête à la Commission (n° 2614/65), Ringeisen présentait une série de griefs dont les uns avaient trait aux procédures pénales engagées contre lui et les autres aux procédures administratives et civiles qu'il avait intentées devant les juridictions autrichiennes. Il alléguait la violation des articles 5, 6, 7, 10, 11 et 14 (art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 14) de la Convention et des articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel (P1-1, P1-2, P1-3).

79. Après avoir déclaré irrecevables, le 2 juin 1967, certaines parties de la requête, la Commission a retenu, le 18 juillet 1968, les griefs formulés au titre de

- l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, quant à la durée de la détention provisoire subie par Ringeisen dans les affaires d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse;

- l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ce qui concerne la longueur des procédures suivies dans ces mêmes affaires pénales;

- l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant au refus de la Cour constitutionnelle d'examiner les allégations relatives à la partialité de membres de la Commission régionale.

80. Après l'échec de la tentative de règlement amiable à laquelle la sous-commission compétente avait procédé, la Commission plénière a rédigé le rapport prévu à l'article 31 (art. 31) de la Convention. Adopté le 19 mars 1970, ce document a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 29 avril 1970. La Commission y exprime en substance l'avis que voici:

- par onze voix contre une: la détention du requérant a duré au-delà d'un "délai raisonnable", de sorte qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3);

- ni dans l'affaire d'escroquerie (unanimité), ni dans l'affaire de banqueroute frauduleuse (onze voix contre une), la longueur des procédures pénales ouvertes contre Ringeisen n'a dépassé un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);

- par sept voix contre cinq: l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'a pas non plus été enfreint dans la procédure d'approbation des contrats de vente car il ne s'agissait pas de trancher une contestation portant sur des "droits et obligations de caractère civil".

Le rapport contient plusieurs opinions individuelles, les unes concordantes, les autres dissidentes.

EN DROIT

81. La Cour est appelée à se prononcer sur les trois points suivants:

I. Ringeisen a-t-il été victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans les procédures qu'il poursuit devant les autorités compétentes afin d'obtenir l'approbation d'une mutation de propriété de terrains agricoles?

II. La détention de Ringeisen a-t-elle dépassé les limites d'un délai raisonnable, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)?

III. La durée des procédures pénales dirigées contre Ringeisen a-t-elle dépassé les limites du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)?

I. Quant au point de savoir si Ringeisen a été victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans les procédures qu'il poursuit pour obtenir l'approbation d'une mutation de propriété de terrains agricoles

82. Le Gouvernement a opposé à ce grief un moyen d'irrecevabilité tiré du fait que la requête ne remplirait pas sur ce point les conditions de l'article 26 (art. 26). La Commission a contesté la compétence de la Cour pour statuer sur ce moyen, s'estimant seule habilitée par la Convention à décider de la recevabilité des requêtes.

Le Gouvernement a plaidé en outre l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, car il ne s'agirait pas en l'espèce d'une "contestation sur (des) droits et obligations de caractère civil" ("determination of... civil rights and obligations"). La Commission a exprimé la même opinion à la majorité des voix, ce qui l'a dispensée de rechercher si les procédures litigieuses avaient répondu aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1); une minorité de cinq membres a considéré que la contestation portait bien sur des droits de caractère civil.

83. Ainsi, dans le cadre de ce grief, la Cour est ou peut être appelée à trancher quatre questions:

- a) la question de sa compétence pour connaître de la recevabilité;
- b) en cas de réponse affirmative à la première question, la recevabilité du grief au regard de l'article 26 (art. 26);
- c) en cas de réponse affirmative à la deuxième question, l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux procédures visées;
- d) en cas de réponse affirmative à la troisième question, le bien-fondé du grief dont il s'agit.

a) Quant à la compétence

84. Par les motifs indiqués aux paragraphes 47 à 51 de l'arrêt que la Cour plénière a rendu le 18 juin 1971 dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour ne peut accueillir la conclusion principale de la Commission; elle se déclare donc compétente.

b) Quant au bien-fondé du moyen de non-épuisement des voies de recours internes

85. Le Gouvernement relève que la requête a été introduite devant la Commission dès le 3 juillet 1965, tandis que la Cour constitutionnelle n'a rendu son arrêt final que le 27 septembre 1965. Il en infère que les voies de recours internes ne se trouvaient pas épuisées lors du dépôt de la requête et que la Commission ne pouvait donc connaître du grief.

86. A ce sujet, les représentants du Gouvernement et les délégués de la Commission ont longuement débattu de l'interprétation à donner à la première partie de l'article 26 (art. 26).

87. S'appuyant sur le texte français de l'article 26 (art. 26), les représentants du Gouvernement ont exposé que la Commission est "saisie" d'une requête au moment de la réception de celle-ci par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et que l'épuisement des voies de recours internes doit précéder la saisine de la Commission, en sorte qu'aucune requête ne peut valablement être présentée s'il n'a pas été satisfait au préalable à la première condition de l'article 26 (art. 26).

La seconde condition prescrite par ledit article (art. 26) confirmerait du reste la nécessité de s'en tenir à une interprétation stricte des mots "la Commission ne peut être saisie". En effet, le "délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive" fixerait de toute évidence une limite au temps pendant lequel une requête peut être valablement présentée, et non à celui pendant lequel la Commission peut connaître des affaires portées devant elle.

88. En sens contraire, les délégués de la Commission ont soutenu que dans le texte anglais, qui fait foi à l'égal du texte français, l'expression "the Commission may only deal with" montre que le non-épuisement des voies de recours internes ne constitue pas un obstacle à la présentation d'une requête, mais uniquement à son examen par la Commission.

Les travaux préparatoires fourniraient une raison supplémentaire d'accorder au texte anglais une importance particulière: le texte original de l'article 26 (art. 26) ayant été établi en français, les experts anglophones d'un sous-comité de rédaction le traduisirent d'abord par la phrase "The Commission may only be petitioned after all domestic legal remedies have been exhausted...", qui correspondait exactement au sens littéral du texte français, après quoi ils y ont substitué le texte anglais actuel: "The Commission may only deal with the matter...".

Même sans recours au texte anglais, le bon sens indiquerait au demeurant qu'à tout le moins la condition d'épuisement des voies de recours, inscrite à l'article 26 (art. 26), ne peut imposer au requérant plus que l'utilisation de toutes les voies de recours s'offrant à lui; on concevrait mal qu'il soit tenu d'attendre, avant de saisir les organes internationaux, que la décision interne définitive ait été rendue à l'issue d'une procédure dont la durée ne dépend pas exclusivement de lui. Cette interprétation cadrerait seule avec la ratio legis de la règle de l'épuisement: protéger les Etats contre toute décision leur imputant la violation d'une obligation internationale sans que les autorités nationales compétentes aient été saisies du grief pour le redresser le cas échéant. Pareille préoccupation implique sans doute qu'aucune autorité internationale ne peut se prononcer avant que le dernier recours introduit devant les juridictions nationales ait fait l'objet d'une décision définitive, mais non que cette décision définitive doit précéder le dépôt de la requête.

Enfin, on aurait tort d'invoquer, contre cette interprétation large, la règle des six mois contenue dans la dernière partie de l'article 26 (art. 26). L'unique objet de cette clause consisterait à fixer clairement une date limite au-delà de laquelle ce que les juridictions internes ont définitivement jugé ne pourra plus être contesté devant la Commission.

89. La Cour ne croit devoir adopter aucune de ces positions extrêmes.

D'une part, il serait à coup sûr excessif, et contraire à l'esprit de la règle de l'épuisement, d'admettre qu'une personne puisse valablement adresser une requête à la Commission avant tout exercice d'une voie de recours interne.

D'autre part, les juridictions internationales ont différentes fois constaté que le droit international ne peut être appliqué avec le même formalisme que celui qui s'impose parfois dans l'application du droit interne. Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention se réfère expressément aux principes de droit international généralement reconnus. C'est donc à bon droit que la Commission a proclamé, en diverses circonstances, la nécessité d'une certaine souplesse dans l'application de la règle (cf. p. ex. la décision du 30 août 1958 sur la recevabilité de la requête n° 332/57, *Lawless contre Irlande*, *Annuaire de la Convention*, volume 2, pp. 324 et 326).

90. Il y a lieu de remarquer au surplus que les requêtes introductives envoyées à la Commission sont fréquemment suivies, dans un délai rapproché, d'écrits complémentaires dont l'objet consiste souvent à combler les lacunes ou parer aux obscurités que le secrétaire de la Commission indique au requérant au cours de l'instruction préliminaire à laquelle il procède. Il n'y a pas de raison pour que ce parachèvement de la requête initiale ne puisse porter notamment sur la preuve que le demandeur a satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26), fût-ce après le dépôt de ladite requête. Quand la Commission décide s'il y a ou non irrecevabilité, son examen porte nécessairement sur l'ensemble de la requête et des pièces ultérieures.

91. Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Commission, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité.

92. La Cour relève en outre que les requêtes individuelles émanent souvent de profanes qui, plus de neuf fois sur dix, écrivent à la Commission sans l'assistance d'un juriste. Une application formaliste de l'article 26 (art. 26) conduirait dès lors à des conséquences inéquitables.

93. En l'espèce, il est constant que Ringeisen a exercé, avant d'introduire sa requête devant la Commission, chacun des recours internes dont il disposait; il n'est pas davantage contesté qu'une décision interne définitive a été rendue. Certes, la Cour constitutionnelle n'a prononcé son arrêt qu'après la saisine de la Commission, mais les actes pertinents des procédures interne et internationale se sont succédé dans l'ordre ci-après:

- le recours constitutionnel remonte au 2 avril 1965;
- le dépôt de la requête à la Commission a eu lieu le 3 juillet 1965 et son enregistrement le 24 septembre 1965;
- la Cour constitutionnelle a statué le 27 septembre 1965;
- le 13 mai 1966, le requérant en a informé la Commission en reprochant à la Cour constitutionnelle d'avoir rejeté le recours introduit par lui contre la décision de la Commission régionale du 3 février 1965;
- la Commission a rendu le 2 juin 1967 une décision partielle sur la recevabilité puis, le 18 juillet 1968, une décision finale après avoir recueilli les observations du Gouvernement.

Le rappel de ces faits suffit à démontrer qu'aucun intérêt légitime de l'Etat défendeur n'a pu être lésé par la circonstance que l'introduction et l'enregistrement de la requête ont quelque peu précédé l'arrêt final de la Cour constitutionnelle.

En conséquence, la Cour rejette comme non fondé le moyen d'irrecevabilité tiré de la méconnaissance de l'article 26 (art. 26).

c) Quant au point de savoir si le présent grief a trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil

94. Pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à une contestation, il n'est pas nécessaire que, comme l'ont admis la majorité de la Commission et le Gouvernement, les deux parties au litige soient des personnes privées. Le libellé de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est beaucoup plus large; les termes français "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé. Le texte anglais, qui vise "the determination of (...) civil rights and obligations", confirme cette interprétation.

Peu important dès lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative, etc.) et celle de l'autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe administratif, etc.).

En l'espèce Ringeisen, ayant acheté des biens appartenant aux époux Roth, avait droit à l'approbation du contrat de vente que ceux-ci avaient conclu avec lui, si comme il le prétendait il satisfaisait aux conditions de la loi. La décision de la Commission régionale, bien que faisant application de règles de droit administratif, devait être déterminante pour les rapports de caractère civil entre Ringeisen et les époux Roth. Ceci suffit pour que la Cour soit tenue d'apprécier si les procédures suivies dans cette cause ont répondu ou non aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

d) Quant au bien-fondé du grief d'inobservation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

95. La Cour n'a pas relevé d'éléments prouvant que la cause de Ringeisen n'aurait pas été entendue "équitablement". Elle note, d'autre part, que la Commission régionale est un "tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car elle est indépendante de l'exécutif comme des parties en cause, ses membres sont nommés pour cinq ans et la procédure qui se déroule devant elle offre les garanties nécessaires (cf., *mutatis mutandis*, l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A, p. 44, par. 24, et l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, par. 78).

96. Le requérant a cependant taxé de partialité six membres de ladite Commission; saisie de ses griefs, la Cour constitutionnelle n'a pas estimé nécessaire d'en apprécier le bien fondé, la question de partialité n'ayant, d'après son arrêt du 27 septembre 1965, aucune incidence sur la compétence de la Commission régionale, seul point soumis à son contrôle (paragraphe 23 ci-dessus).

97. La Cour européenne n'a pas à se prononcer sur l'interprétation du droit autrichien sur laquelle s'appuie l'arrêt dont il s'agit, ni à exprimer un avis sur la manière dont il a été motivé; il lui incombe, en revanche, d'examiner les raisons invoquées par Ringeisen et de déterminer si la Commission régionale a respecté ou non la règle d'impartialité inscrite à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

La Cour constate que même si les allégations du requérant correspondent à la réalité, elles ne permettent pas de conclure à la partialité de la Commission régionale. En effet, dans le cas d'un tel collège de composition mixte comprenant, sous la présidence d'un magistrat, des fonctionnaires publics et des représentants de groupements d'intérêts, le reproche formulé contre un membre en raison de sa simple désignation par la chambre d'agriculture de Haut-Autriche ne peut être retenu comme étayant une accusation de partialité. Il en va de même du grief dirigé contre un membre auquel Ringeisen attribuait des déclarations, dont la Commission régionale a du reste pris soin de rétablir la teneur exacte (paragraphe 22 ci-dessus). Quant au double fait que le président avait représenté la Commission régionale devant la Cour constitutionnelle en 1964 et qu'un autre membre avait comparu en qualité de témoin, ils manquent manifestement de pertinence. Enfin, on ne peut davantage voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que deux membres avaient pris part à la première décision de la Commission régionale, car on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité.

98. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se borne cependant pas à imposer que toute contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil soit tranchée équitablement et dans un délai raisonnable: il exige aussi, du moins en règle générale, la publicité des audiences et du prononcé du jugement.

La Cour aurait pu vérifier même d'office - sauf à rouvrir les débats à ce sujet - si la Commission de district et la Commission régionale ont respecté ce principe ou s'il leur était loisible d'y déroger.

La Cour n'a pas procédé à cet examen, en raison du fait que l'adhésion de l'Autriche à la Convention s'est assortie d'une réserve ainsi libellée:

"(...).

Les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention seront appliquées dans la mesure où elles ne portent atteinte, en aucune façon, aux principes relatifs à la publicité de la procédure juridique (im gerichtlichen Verfahren) énoncés à l'article 90 de la Loi fédérale constitutionnelle dans sa version de 1929.

"(...)."

Ledit article 90 est à son tour rédigé comme suit:

"Les débats devant les tribunaux en matière civile et pénale (in Zivil- und Strafrechtssachen) sont oraux et publics, sauf les exceptions prévues par la loi.

"(...)."

Cette réserve ne vise pas expressément les procédures administratives, mais seulement les affaires civiles et pénales, c'est-à-dire sans doute les affaires traitées devant des juridictions civiles ou pénales. On doit pourtant admettre qu'elle couvre a fortiori les procédures engagées devant des autorités administratives quand elles ont pour objet des contestations de caractère civil et que, dès lors, lesdites autorités sont assimilées à des tribunaux au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Tel est le cas des procédures auxquelles a donné lieu la demande d'approbation introduite par Ringeisen le 30 mars 1962.

99. Par ces motifs, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans les procédures relatives à cette demande.

II. Quant au point de savoir si la détention de Ringeisen a dépassé les limites d'un délai raisonnable, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)

100. Ringeisen a été détenu dans le cadre de deux poursuites distinctes intentées la première pour escroquerie et gestion infidèle (paragraphe 24 à 48 ci-dessus), la seconde pour banqueroute frauduleuse consistant, pour l'essentiel, dans la dissimulation de biens au détriment de créanciers (paragraphe 49 à 56 ci-dessus).

Chacune de ces poursuites s'accompagna d'un mandat d'arrêt. Le premier mandat, délivré le 30 juillet 1963 dans l'affaire d'escroquerie, provoqua une première détention qui se termina le 23 décembre 1963 (paragraphe 57 et 59 ci-dessus). Le second, décerné le 15 mars 1965 dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, fut doublé le 12 mai 1965 d'une décision de remise en détention dans la poursuite pour escroquerie; l'une et l'autre détentions s'achevèrent par des décisions d'élargissement datées respectivement des 15 et 20 mars 1967 (paragraphe 61, 63, 76 et 77 ci-dessus).

Les détentions subies par Ringeisen au titre des deux poursuites ont atteint au total près de deux ans et cinq mois.

101. Considérée isolément, la première période de détention (5 août 1963 - 23 décembre 1963) échappe à l'examen de la Cour: la dernière décision rendue en degré d'appel et rejetant une demande de liberté remonte au 23 septembre 1963, soit beaucoup plus de six mois avant l'introduction de la requête à la Commission (3 juillet 1965). Néanmoins, ces quatre mois et demi de première détention doivent être ajoutés à ceux qui suivirent s'il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable de la durée globale de la détention provisoire pour escroquerie (cf. l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A, p. 37, par. 6).

102. Quant à la seconde période de détention (15 mars 1965 - 20 mars 1967), elle se situe en entier dans le cadre de la poursuite pour banqueroute frauduleuse, tandis que la nouvelle détention ordonnée au titre de la poursuite pour escroquerie n'a occupé qu'une partie de ce laps de temps (12 mai 1965 - 15 mars 1967). Il paraît indiqué, dès lors, d'examiner d'abord dans le contexte de la poursuite pour banqueroute frauduleuse le caractère raisonnable de la durée de la détention. Cela s'impose d'autant plus que les représentants du Gouvernement n'ont tenté de justifier devant la Cour ni la décision de remise en détention prise le 12 mai 1965 par le juge qui instruisait

l'affaire d'escroquerie, ni les décisions ultérieures des juridictions compétentes rejetant les demandes d'élargissement de Ringeisen dans la même affaire.

103. Le mandat décerné le 15 mars 1965 du chef des poursuites pour banqueroute frauduleuse avait en soi de quoi surprendre: le premier juge d'instruction, saisi des plaintes pour escroquerie, avait déjà amplement scruté la manière dont Ringeisen avait utilisé les fonds recueillis au moyen de la vente des lots. Sans doute le parquet avait-il après le 23 décembre 1963 reçu de nombreuses plaintes nouvelles émanant d'acheteurs qui avaient payé au moins une fraction du prix convenu, n'avaient pu entrer en possession de leurs lots à cause du refus d'approbation des contrats et n'avaient pas obtenu la restitution de leurs versements, mais toutes ces opérations étaient la suite de celles sur lesquelles avait porté l'instruction relative aux actes d'escroquerie et il eût donc été naturel de les instruire dans le cadre de la première affaire. La Cour constate en outre qu'en dehors des interrogatoires de Ringeisen, aucune mesure d'instruction ne fut prise pendant trois ans dans le cadre de la deuxième poursuite.

Du moment toutefois qu'il y avait des "raisons plausibles" de soupçonner le requérant d'infractions autres que celles qui formaient l'objet des premières poursuites, son arrestation de leur chef se trouve couverte par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et, partant, échappe au contrôle de la Cour.

104. La Cour doit pourtant rechercher encore si la durée du maintien en détention de Ringeisen, au titre de ces deuxièmes poursuites, a dépassé les limites du "délai raisonnable" dont parle l'article 5 par. 3 (art. 5-3); il convient à cet égard d'apprécier les motifs par lesquels les juridictions autrichiennes ont justifié le rejet des demandes d'élargissement de l'intéressé (cf. p. ex. l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A, p. 37, par. 5).

105. On notera, tout d'abord, que contrairement aux autorités saisies de recours semblables dans le cadre des premières poursuites, celles chargées de statuer dans le cadre des secondes n'alléguèrent à aucun moment l'existence d'un danger de fuite; les raisons invoquées furent, d'une part, le danger de collusion et, d'autre part, le danger de répétition des infractions.

106. La première raison ne résiste pas à l'examen. En effet, l'enquête de police ordonnée par le juge d'instruction au sujet des actes de banqueroute frauduleuse avait commencé le 31 août 1964 et Ringeisen avait été interrogé dès le 3 septembre, puis le 20 octobre 1964 (paragraphe 49 ci-dessus). Or, il demeura en liberté presque cinq mois après cette dernière date. S'il avait voulu corrompre les témoins - à supposer que le juge d'instruction projetât d'en entendre - il en aurait eu pleine possibilité dans l'intervalle.

107. Quant au danger de répétition, le principal grief qui avait entraîné l'ouverture de nouvelles poursuites à charge de Ringeisen consistait dans le reproche d'avoir négocié des actes fictifs avec une compagnie d'assurances, afin de soustraire à ses propres créanciers des sommes qu'elle lui devait à titre de commission (paragraphe 53 et 61 ci-dessus).

Les faits ainsi incriminés remontaient cependant au premier semestre de 1964. Depuis lors, le 23 mars 1965, un administrateur provisoire avait été nommé à la requête de certains créanciers (paragraphe 51 ci-dessus). Bien plus, Ringeisen fut mis en faillite le 14 mai 1965, en sorte que dès ce jour non seulement l'administration de ses biens lui échappa, mais aucune dette ne pouvait plus être valablement payée entre ses mains si tant est qu'il eût d'autres débiteurs que la compagnie d'assurances (paragraphe 52 ci-dessus).

En conséquence, la Cour considère que la détention du chef de banqueroute frauduleuse a dépassé la limite raisonnable au moins à partir du 14 mai 1965.

108. Il en va de même de la détention subie par Ringeisen du chef d'escroquerie pendant la plus grande partie de cette période.

Les décisions de remise et de maintien en détention prises après le 12 mai 1965 dans le cadre de ces poursuites invoquaient les dangers de fuite et de répétition (paragraphe 61 à 76 ci-dessus). Aucune indication précise n'est toutefois donnée quant à des circonstances postérieures au 12 mai 1965 et d'où résulterait la naissance ou la renaissance de pareils dangers.

Cette remarque vaut en particulier pour le danger de répétition. Comme la Cour d'appel de Linz l'avait constaté le 19 décembre 1963 en décidant d'élargir Ringeisen, l'affaire avait reçu une large publicité et il était donc peu vraisemblable que l'intéressé pût chercher et découvrir d'autres acheteurs (paragraphe 58 ci-dessus). Une fois définitif, le retrait des procurations avait du reste rendu juridiquement impossible toute nouvelle négociation de vente de lots; aussi n'y en avait-il plus eu depuis la mi-1963 (paragraphe 17, 18 et 58 ci-dessus).

De toute évidence, la décision du 12 mai 1965 s'explique par le fait que Ringeisen se trouvait, depuis le 15 mars 1965, sous les liens d'un mandat d'arrêt délivré par le juge qui instruisait les plaintes pour banqueroute frauduleuse; aussi bien l'un des conseils du Gouvernement a-t-il laissé entendre qu'elle n'était en elle-même guère défendable en droit autrichien. Le rôle prépondérant ainsi joué à l'origine par la détention provisoire du chef de banqueroute frauduleuse fut encore démontré quelques mois plus tard: les 24 et 27 septembre 1965, Ringeisen avait attaqué les deux décisions des juges d'instruction qui, dans les deux poursuites, avaient repoussé ses demandes de mise en liberté, mais le dossier contient une seule décision de rejet de la Chambre du conseil, celle rendue le 10 novembre 1965 dans le cadre de la poursuite pour banqueroute frauduleuse (paragraphe 64 ci-dessus; cf. en outre le paragraphe 65).

109. Le Gouvernement a rappelé toutefois que Ringeisen a été condamné pour escroquerie le 14 janvier 1966; il en a déduit que la détention litigieuse, dénommée par lui "Überhaft", a eu à partir de cette date un autre titre qui la fait échapper à l'application de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), car elle est inconditionnellement couverte par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a). Il s'est appuyé à ce sujet sur le dictum figurant dans l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968 (série A, pp. 23-24, par. 9).

Par contre, la Commission a demandé à la Cour de réexaminer la jurisprudence sur ce point, ou du moins de l'interpréter de telle manière que la détention après condamnation soit considérée comme demeurant soumise à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) jusqu'à ce que la condamnation devienne définitive, dans les cas où le droit interne de l'Etat défendeur conserve jusqu'à ce moment à la détention son caractère provisoire (détention on remand), la subordonne aux mêmes conditions et ouvre au détenu les mêmes voies de recours.

La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les arguments développés à cet égard par le Gouvernement et la Commission. En effet, la nouvelle détention (Überhaft) ordonnée le 12 mai 1965, et qui se prolongea jusqu'au 15 mars 1967, au titre de la poursuite pour

escroquerie, s'est inscrite tout entière dans les limites de la détention provisoire pour banqueroute frauduleuse, décidée le 15 mars 1965 et terminée seulement le 20 mars 1967. Elle ne s'explique en fait que par cette autre détention. Le verdict prononcé contre Ringeisen le 14 janvier 1966 n'a pas changé cette situation.

Il est significatif à ce sujet que quand le ministère public combattit la demande d'élargissement présentée par Ringeisen, le 14 janvier 1966, au tribunal qui venait de le condamner pour escroquerie, il plaida notamment que cette libération, si elle était accordée, n'offrirait aucune utilité pour l'intéressé puisque celui-ci se trouvait aussi sous les liens d'un autre mandat d'arrêt délivré dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse (paragraphe 67 ci-dessus).

Sans doute la Cour d'appel de Linz a-t-elle observé de son côté, le 30 novembre 1966, que Ringeisen ne pourrait profiter d'une décision d'élargissement rendue dans la procédure de banqueroute frauduleuse car il était également détenu au titre de l'autre procédure (paragraphe 73 ci-dessus), mais ceci ne fait que confirmer l'interdépendance qui n'a cessé d'exister entre les deux détentions (paragraphe 108 ci-dessus). Ayant déjà constaté que dans l'affaire de banqueroute frauduleuse la détention a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (paragraphe 107 ci-dessus), la Cour estime que cette conclusion s'applique à l'intégralité de la détention subie par Ringeisen jusqu'au 20 mars 1967, date de son élargissement.

III. Quant au point de savoir si la durée des procédures pénales dirigées contre Ringeisen a excédé les limites du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

110. La Cour partage l'avis de la Commission selon lequel la longueur des poursuites pour escroquerie - l'ouverture des enquêtes préliminaires a eu lieu le 21 février 1963, la décision finale le 24 avril 1968 - résultait à la fois de la complexité de l'affaire et des innombrables demandes et recours de Ringeisen, qui tendaient non seulement à son élargissement mais encore à la récusation de la plupart des magistrats compétents et au renvoi de l'affaire à d'autres juridictions.

Cela vaut aussi, dans une large mesure, pour la procédure du chef de banqueroute frauduleuse, du moins en ce qui concerne l'instruction antérieure au dépôt de l'acte d'accusation du 24 mars 1966. Même pour la période ultérieure, on peut concevoir que le ministère public ait cru bon, en raison de la connexité manifeste des faits visés dans cette procédure avec ceux qui formaient l'objet des poursuites pour escroquerie, de se réserver de retirer l'accusation en vertu de l'article 34 par. 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lorsqu'une condamnation définitive serait intervenue dans le cadre desdites poursuites. D'où la stagnation que connut la procédure pour banqueroute frauduleuse.

La Cour conclut donc à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

I. Quant au point de savoir si Ringeisen a été victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans les procédures qu'il poursuivit pour obtenir l'approbation d'une mutation de propriété de terrains agricoles

1. Dit, à l'unanimité, qu'elle a compétence pour connaître du moyen de non-épuisement des voies de recours internes soulevé à cet égard;

2. Dit, par six voix contre une, que ledit moyen n'est pas fondé;

3. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) était d'application quant aux procédures en question;

4. Dit, à l'unanimité, que dans lesdites procédures il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);

II. Quant au point de savoir si la détention de Ringeisen a dépassé les limites d'un délai raisonnable, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)

5. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans le fait de la détention du requérant du 14 mai 1965 au 14 janvier 1966;

6. Dit, par quatre voix contre trois, qu'aussi après le 14 janvier 1966 et jusqu'au 20 mars 1967, la détention a été poursuivie en violation de la même disposition de la Convention;

7. Réserve le droit éventuel, pour le requérant, de demander une satisfaction équitable du chef de ces violations;

III. Quant au point de savoir si la durée des procédures pénales dirigées contre Ringeisen a excédé les limites du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

8. Dit, à l'unanimité, que dans les procédures dont il s'agit il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le seize juillet mil neuf cent soixante et onze.

Le Président

Signé: Henri ROLIN

Pour le Greffier Signé: J.F. SMYTH, Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l'article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l'article 50 par. 2 du Règlement de la Cour, l'exposé des opinions séparées suivantes:

- opinion de MM. les Juges Wold et Sigurjónsson;

- opinion de M. le Juge Verdross;

- opinion de M. le Juge Holmbäck;

- opinion de M. le Juge Zekia.

Paraphé: H. R.

Paraphé: J. F. S.

OPINION SEPARÉE COMMUNE A MM. LES JUGES WOLD ET SIGURJONSSON

(Traduction)

En ce qui concerne la compétence (paragraphe 84 de l'arrêt), nous renvoyons à nos opinions dissidentes respectives dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp, mais nous estimons obligés de nous incliner devant l'avis de la majorité de la Cour sur ce point.

OPINION SEPARÉE DE M. LE JUGE VERDROSS

Je regrette de ne pas être d'accord avec l'arrêt de la Chambre sur deux questions principales.

1. D'abord, je ne puis accepter son interprétation de l'article 26 (art. 26) de la Convention pour les raisons suivantes:

D'après la version française de l'article 26 (art. 26), la Commission ne peut être "saisie" qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tandis que la version anglaise dispose que la Commission "may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted". En présence de ces deux textes également authentiques, la Commission ne peut choisir le texte qui lui semble le plus pratique, mais doit rechercher une interprétation qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, "concilie" le mieux ces textes (article 33 par. 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

Il n'est pas douteux que le terme "saisir" a un sens clair et précis mais que l'expression anglaise "deal with" a un sens plus large, car toute activité d'une autorité au sujet d'une affaire portée devant elle, consiste à "deal with". Cette phrase englobe donc également l'enregistrement d'une affaire par la Commission; il en découle clairement que seule la version française est conciliable avec les deux textes.

Cette interprétation nous est même imposée par le fait que le verbe "saisir" (deal with) se réfère aux deux phrases de l'article 26 (art. 26), à savoir l'épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois. Or si l'on acceptait l'interprétation donnée par la Commission, selon laquelle le terme saisir (deal with) signifie "s'occuper d'une affaire", on arriverait à la conclusion absurde que la Commission ne pourrait s'occuper d'une affaire que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Mon interprétation est confirmée par la disposition de l'article 27 par. 3 (art. 27-3), qui oblige la Commission à rejeter toute requête en contradiction avec l'article 26 (art. 26). La Commission ne peut donc pas décider si les conditions de recevabilité d'une requête sont remplies ex nunc, à savoir au moment où elle commence à examiner l'affaire: elle doit décider si la requête en tant que telle remplit ex tunc les conditions de l'article 26 (art. 26).

La Commission et la Chambre invoquent à l'encontre de cette interprétation la pratique de la jurisprudence internationale. Il est vrai que l'article 26 (art. 26) renvoie aux "principes de droit international généralement reconnus". Toutefois, il y renvoie dans le cadre des dispositions spéciales de l'article 26 (art. 26) et il peut le faire, car les règles du droit international général concernant l'épuisement des voies de recours internes ne font pas partie du jus cogens. Les normes spéciales de l'article 26 (art. 26) prévalent donc sur les règles générales du droit international. Pour cette raison, il me semble superflu d'entrer dans une analyse de la pratique internationale en la matière.

L'interprétation ici donnée de l'article 26 (art. 26) n'est pas non plus ébranlée par le but de celui-ci, car toutes les dispositions qui tracent des limites à la compétence d'un organe international dans le domaine indiqué ont pour but de protéger les Etats contre le fait de se voir accusés devant une instance internationale avant d'avoir eu la possibilité de corriger une violation éventuellement commise par un organe d'un degré inférieur. Par conséquent, toute disposition de cette catégorie doit être interprétée strictement.

Je ne méconnais pas qu'il serait peut-être plus convenable de modifier l'article 26 (art. 26) dans le sens qui lui est donné par la Chambre, mais la Commission et la Cour doivent appliquer la Convention telle qu'elle a été libellée par les Hautes Parties Contractantes. De même que la Cour internationale de Justice, notre Cour "est appelée à interpréter les traités, non à les réviser" (Avis consultatif du 18 juillet 1950 dans l'affaire de l'interprétation des traités de paix, Recueil 1950, p. 229).

2. Je ne peux pas non plus suivre la Chambre quand elle déclare que la détention du requérant, après sa condamnation du 14 janvier 1966 pour escroquerie, ne fut qu'un prolongement de la détention ordonnée dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse. Certes, en s'opposant à la demande d'élargissement présentée par le requérant le 14 janvier 1966, le parquet fit valoir que sa libération dans l'affaire d'escroquerie n'offrirait pour lui aucune utilité car il se trouvait aussi détenu dans le cadre de l'affaire de banqueroute frauduleuse. Toutefois, la Cour d'appel de Linz, qui donna suite le 2 mars 1966 au recours du parquet, a expressément relevé que la principale raison de maintenir la détention résidait dans la circonstance qu'après la condamnation pour escroquerie il existait un danger accru de fuite, le requérant devant s'attendre à une peine sévère.

De fait, on ne saurait contester qu'un danger de fuite peut naître au moment où une personne qui se considère comme innocente et, par conséquent, ne pense pas à fuir, se trouve devant la situation nouvelle d'une condamnation inattendue. Même si l'on nie un tel danger, on ne peut méconnaître que la Cour d'appel a formellement déclaré maintenir la détention supplémentaire dans l'affaire d'escroquerie, bien qu'il n'y eût aucune nécessité de la maintenir en vue d'empêcher la fuite éventuelle de Ringeisen, car celui-ci se trouvait également détenu au titre des poursuites pour banqueroute frauduleuse. Dès cette décision de la Cour d'appel, la détention du chef d'escroquerie est devenu prépondérante.

Les 6 juillet et 30 novembre 1966, en effet, la Cour d'appel de Linz, rejetant de nouvelles demandes de libération, a de nouveau conclu à l'existence d'un danger de fuite découlant surtout de la gravité de la peine prononcée pour escroquerie. Dans la seconde de ces décisions, elle a ajouté que le requérant ne tirerait aucun profit de sa mise en liberté dans l'affaire de banqueroute frauduleuse, car il

était également détenu dans le cadre des poursuites pour escroquerie, délit dont il avait été reconnu coupable et pour lequel il avait été condamné, le 18 octobre 1966, à cinq ans de réclusion rigoureuse.

Enfin, Ringeisen a été libéré sur une décision de la Cour d'appel en date du 15 mars 1967, étant donné que les circonstances concernant les dangers de fuite et de répétition dans l'affaire d'escroquerie avaient complètement changé, tandis que sa détention dans l'affaire de banqueroute frauduleuse n'a été levée qu'en conséquence de la première libération.

De ce qui précède, il ressort clairement qu'après la condamnation du 14 janvier 1966 pour escroquerie, la détention du requérant a été maintenue surtout à cause du danger de fuite résultant de cette condamnation et de la seconde condamnation prononcée le 18 octobre 1966 dans la même affaire. Par conséquent, cette détention n'était plus régie par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) mais par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), comme la Cour l'a reconnu dans l'affaire Wemhoff et comme l'opinion dissidente du Juge Zekia le démontre amplement en l'espèce.

Ces raisons valent a fortiori dans la présente affaire, où aucune des conditions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) ne se trouve remplie. En effet, le requérant n'a pas comparu dans la procédure de recours sur la question de sa culpabilité et le Tribunal régional a définitivement établi les faits et prononcé un verdict de culpabilité qui, pour l'essentiel, n'a pas été modifié par la Cour Suprême. Dès lors, on ne peut dire que même après ce verdict, Ringeisen était simplement soupçonné d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).

OPINION SEPARÉE DE M. LE JUGE HOLMBZCK

(Traduction)

A mon avis, les autorités autrichiennes (les juges d'instruction, la chambre du conseil du Tribunal régional de Linz, le Président de ce tribunal, le tribunal lui-même, la Cour d'appel de Linz) avaient des motifs suffisants de repousser les demandes d'élargissement de Ringeisen. En conséquence, je ne puis me rallier à la conclusion de la majorité de la Cour européenne, d'après laquelle la République d'Autriche a violé l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

OPINION SEPARÉE DE M. LE JUGE ZEKIA

(Traduction)

Deux problèmes principaux surgissent en l'espèce:

1. Ringeisen a-t-il été victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne

a) les procédures engagées par lui afin d'obtenir des autorités autrichiennes l'approbation du transfert à son nom de la propriété de terres agricoles;

b) le temps qu'il a fallu pour décider du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre lui?

2. La durée de ses détentions a-t-elle dépassé un délai raisonnable, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)?

Pour les faits de la cause, je me borne à renvoyer à l'arrêt. Au sujet du problème n° 1, je m'associe aux vues et conclusions de la Cour.

Quant au second problème, celui de savoir si Ringeisen est resté en détention provisoire au-delà d'un délai raisonnable, je ne crois pas pouvoir partager l'opinion de mes distingués collègues de la majorité. Je m'en explique donc à présent le plus brièvement possible.

La détention de Ringeisen peut se diviser en trois périodes:

la première a duré du 5 août 1963 au 23 décembre 1963;

la deuxième du 15 mars 1965 au 14 janvier 1966, date de sa condamnation;

la troisième du 14 janvier 1966 (date de sa condamnation) au 20 mars 1967 (date de son élargissement).

Si, en examinant la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), je pouvais valablement grouper ces trois périodes, je n'aurais aucune peine à me rallier à la majorité et à constater un manquement de la République d'Autriche aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Selon moi, cependant, nous ne saurions prendre en considération, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), la détention subie par Ringeisen après sa condamnation. Une telle détention, ordonnée ou prolongée à la suite d'une condamnation, ne peut être mise sur le même pied qu'une détention relevant de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), la seule à laquelle ait trait l'article 5 par. 3 (art. 5-3). D'autre part, on ne peut présumer qu'une détention ordonnée en vertu de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) puisse, même sans mainlevée expresse, continuer à compter comme détention aux fins de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) après condamnation du détenu par un tribunal compétent. En outre, une personne qui demeure détenue par suite d'une condamnation ne peut, en se plaignant de sa privation de liberté, invoquer l'article 5 par. 3 (art. 5-3) qui s'applique uniquement aux personnes détenues à titre provisoire dans l'attente de leur procès. Sur ce point, j'estime utile de me référer au paragraphe 9, page 23, de l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968.

Même en reconnaissant l'effet suspensif - qui semble exister dans certains systèmes juridiques continentaux - d'un appel et d'un pourvoi exercés par un individu contre sa condamnation à une peine d'emprisonnement, je ne suis de loin pas convaincu qu'une détention après condamnation tombe dans le domaine de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

Le principe fondamental sous-jacent à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) me paraît être celui qui figure à l'article 6 par. 2 (art. 6-2), aux termes duquel "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".

L'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) prévoit expressément qu'une personne peut à bon droit être privée de sa liberté après condamnation par un tribunal compétent. Du texte précité, on peut déduire à coup sûr qu'après condamnation par un tribunal compétent, la présomption d'innocence cède la place à une présomption de culpabilité. Celle-ci souffre la preuve contraire; elle devient définitive et irréfragable après la décision d'une juridiction supérieure, ou à l'expiration du délai de recours si pareille condamnation n'est pas attaquée.

Je voudrais ajouter quelques mots sur la nature de la détention du requérant après le verdict de culpabilité du 14 janvier 1966.

On a soutenu qu'après cette date, Ringeisen n'avait pas été détenu en vertu de sa condamnation, mais d'une simple ordonnance de mise en détention rendue contre lui le 15 mars 1965 - dans une affaire de banqueroute frauduleuse - et qui en réalité resta en vigueur même après ledit verdict et jusqu'à son élargissement dans cette affaire. On pourrait en inférer que la détention postérieure à la condamnation ne saurait passer pour couverte par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a). Si l'on se souvient de l'effet suspensif de l'appel et du pourvoi du requérant, et de ce que le parquet a déclaré à l'époque devant le tribunal, cette thèse a un certain poids. On pourrait néanmoins présenter les objections que voici. La détention à examiner sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est celle qui repose sur l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Pour déterminer la pertinence, au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), de la détention après condamnation, il faut donc pouvoir affirmer que la détention du requérant pendant cette période n'a point perdu son caractère antérieur. Or, cette manière de raisonner m'inspire les plus grands doutes et je penche plutôt pour l'opinion contraire.

Le jugement de janvier 1966, ordonnant l'emprisonnement de Ringeisen, existait et n'avait pas été cassé par une autorité judiciaire; bien plus, la Cour Suprême a confirmé le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie au détriment des 78 acheteurs, et a renvoyé au Tribunal régional la nouvelle fixation de la peine et certaines autres questions. Indépendamment de cela, le Tribunal régional de Linz avait dès le 12 mai 1965 ordonné la mise en détention de Ringeisen dans l'affaire d'escroquerie. Alors que les accusations de banqueroute frauduleuse n'ont peut-être pas été prouvées et ont en fait été abandonnées plus tard, la principale accusation d'escroquerie a abouti à un verdict de culpabilité que la juridiction supérieure a confirmé.

Tout au plus pourrait-on dire que la ou les raisons de détenir le requérant après sa condamnation n'apparaissent pas clairement. Cependant, si l'on peut raisonnablement attribuer pareille détention à plusieurs raisons et s'il existe une seule raison valable de prolonger la détention, ceci suffit pour soustraire la troisième période au domaine de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

Il ne faut pas oublier que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a pour objet principal d'empêcher de garder une personne en détention provisoire au-delà du délai requis normalement pour préparer l'affaire et pour traduire l'intéressé en justice en vue d'une décision judiciaire. En d'autres termes, il s'agit de ne pas garder des suspects en détention en l'absence de preuves suffisantes et de ne pas les punir sur la base de simples soupçons. Or, après les débats oraux et après le verdict prononcé par le tribunal compétent en janvier 1966, il est très difficile d'admettre que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) trouve à s'appliquer.

Par ces motifs, j'estime qu'en examinant la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) on ne peut ajouter aux deux autres périodes la détention subie par Ringeisen du 14 janvier 1966 au 20 mars 1967.

J'en viens à ces deux autres périodes.

La première n'a duré que quatre mois et dix-huit jours. En elle-même, elle n'a pas excédé le délai raisonnablement nécessaire à l'instruction des nombreux actes d'escroquerie dont on accusait le requérant.

Peut-on valablement examiner en bloc la première et la deuxième périodes? Je ne le crois pas non plus. L'accomplissement prétendu d'actes d'escroquerie concernant non moins de 78 acheteurs, ainsi que d'une série d'actes de gestion infidèle, a précédé les plaintes pour banqueroute frauduleuse dont l'instruction a débuté bien plus tard.

On pourrait raisonnablement s'attendre à voir les organes d'instruction s'occuper en même temps d'infractions semblables commises pendant une courte période. Un suspect placé en détention provisoire pourrait réclamer protection en vertu de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) pour toute l'affaire à la fois. Toutefois, quand des infractions distinctes sont commises ou découvertes beaucoup plus tard et que le même suspect est arrêté derechef et gardé en détention provisoire pour un groupe ultérieur d'infractions, une nouvelle instruction commence et une nouvelle période de détention prend son cours. En pareil cas, les organes d'instruction sont pleinement fondés à s'efforcer que l'on ne tienne pas compte de périodes antérieures de détention régies par l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

La proximité dans le temps et l'espace est à cet égard un élément important. Dans de telles affaires, des périodes différentes de détention devraient être examinées séparément, et non point conjointement, même si les infractions les plus récentes se rattachent de quelque manière aux anciennes.

Il me reste à rechercher si la deuxième période, envisagée isolément, constitue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Je n'en suis pas convaincu dans les circonstances de la cause.

La deuxième période a duré dix mois. Les autorités, y compris les magistrats instructeurs, avaient à examiner de multiples infractions prétendument commises par Ringeisen. Le requérant n'a cessé d'inonder les tribunaux et autres autorités de demandes et recours de toute sorte, taxant de partialité les juges et autres autorités, contestant l'intégrité des juges et attaquant la composition des tribunaux. Ses griefs se sont révélés entièrement indéfendables et mal fondés. En d'autres termes, il a constamment abusé de la procédure judiciaire, ce qui a eu pour résultat de prolonger sans nécessité l'instruction et de retarder la fin de l'affaire en empêchant de le traduire devant la juridiction de jugement. Par sa conduite, le requérant a manifestement contribué dans une large mesure à la longueur de sa détention. Dans ces conditions, je ne crois pas qu'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) par les autorités autrichiennes se trouve établie.

VERSION OFICIAL EN INGLÉS

SENTENCIA

In the Ringeisen case,

The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 (art. 43) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as "the Convention") and with Rules 21 and 22 of the Rules of Court, as a Chamber composed of the following Judges:

MM. H. ROLIN, President, Å. HOLMBZCK A. VERDROSS T. WOLD M. ZEKIA A. FAVRE S. SIGURJONSSON
and also MM. M.-A. EISSEN, Registrar, and J.F. SMYTH, Deputy Registrar,

Decides as follows:

PROCEDURE

1. The Ringeisen case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights (hereinafter called "the Commission"). The case has its origin in an application against the Republic of Austria submitted to the Commission on 3rd July 1965 under Article 25 (art. 25) of the Convention by an Austrian national, Michael Ringeisen.

2. The Commission's request, to which was attached the report provided for in Article 31 (art. 31) of the Convention, was lodged with the Registry of the Court on 24th July 1970, within the period of three months laid down in Articles 32 (1) and 47 (art. 32-1, art. 47). Reference was made in the request to Articles 44 and 48 (art. 44, art. 48) and to the declaration made by the Republic of Austria recognising the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46) (art. 46). The purpose of the Commission's request is to obtain a decision from the Court as to whether the facts of the case do or do not disclose, on the part of the Republic of Austria, a violation of the obligations binding on it under Articles 5, paragraph (3) and 6, paragraph (1) (art. 5-3, art. 6-1), of the Convention.

3. On 22nd August 1970, the President of the Court drew by lot, in the presence of the Registrar, the names of six of the seven Judges called upon to sit as members of the Chamber, Mr. Alfred Verdross, the elected Judge of Austrian nationality, being an ex officio member under Article 43 (art. 43) of the Convention; the President also drew by lot the names of three substitute Judges.

4. The President of the Chamber, after ascertaining the views of the Agent of the Austrian Government (hereinafter called "the Government") and the Delegates of the Commission regarding the procedure to be followed (Rule 35 (1)) and taking note of their agreement, decided on 2nd October 1970 that it was not necessary at that stage for memorials to be lodged.

On the instructions of the President, the Registrar requested, on 30th October 1970, the Agent of the Government to produce certain documents which were filed on December 3rd.

5. The Court held a preparatory meeting in Strasbourg on 23rd and 24th November 1970, following which a request for further information and for the production of supplementary documents was addressed to the Government and the Commission. The Commission's reply was received on 5th December 1970 and the Government made its reply and filed further documents on 10th and 17th February and on 4th and 6th March 1971.

6. After having consulted, through the Registrar, the Agent of the Government and the Delegates of the Commission, the President decided, by an Order of 17th December 1970, that the oral hearings should open on 8th March 1971.

7. The Court authorised the Agent and Counsel of the Government to address the Court in German at the oral hearings, the Government undertaking inter alia, responsibility for the interpretation into French or English of their pleadings and statements (Rule 27 (2)).

8. The oral hearings were held in public at the Human Rights Building at Strasbourg on 8th, 9th and 10th March 1971.

There appeared before the Court:

- for the Commission:

Mr. J.E.S. FAWCETT, Principal Delegate,

Mr. F. ERMACORA and Mr. G. SPERDUTI, Delegates;

- for the Government:

Mr. E. NETTEL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Agent;

Mr. W. PAHR, Head of the International Division in the Constitutional Department of the Federal Chancellery, and

Mr. C. MAYERHOFER, Ministerialsekretär at the Federal Ministry of Justice, Counsel.

The Court heard the addresses and submissions of these representatives and also their replies to a number of questions put to them. Furthermore, the Government produced some complementary documents.

The hearings were closed provisionally on 10th March 1971.

9. Two further documents were filed by the Commission on 22nd March 1971 and observations on them were received by the Registry from the Government on April 16th.

10. After having made final the closure of the proceedings and deliberated in private, the Court gives the present judgment.

THE FACTS

11. The facts of the case, as they appear from the report of the Commission, the documents produced and the addresses of the representatives made before the Court, may be summarised as follows:

I. Ringeisen's dealings

12. Mr. Michael Ringeisen is an Austrian citizen, born in Hungary in 1921. During the years 1958 to 1963, he was in business as an insurance agent in Linz, Austria; he also negotiated loans and dealt in real estate.

13. Sometime in 1958, Mr. Franz Widmann, a shopkeeper at Linz, answered a newspaper advertisement seeking a loan of 100,000 Austrian Schillings (AS). In this way he came into contact with Ringeisen to whom he advanced, in November 1958 and January 1959, 150,000 AS in several instalments. At the time of this transaction, Ringeisen mentioned to Widmann that he needed this money for a Mr. Wenger but Widmann did not meet him. At Ringeisen's instigation, a contract was signed in 1959 naming the couple Widmann as creditors and the couple Wenger, amongst others, as debtors. Subsequently, Ringeisen repaid 72,000 AS to Widmann. Also in 1959 and 1960, Ringeisen negotiated in the name of Mrs. Gertrud Wenger a loan of 11,000 AS from one Rudolf Schamberger.

14. On 9th May and 6th November 1961, Ringeisen obtained general powers of attorney from the Roth couple with whom he had previously had business relations. These powers of attorney were granted in consideration of a loan made by Ringeisen to the Roth couple and enabled him to act in their name in dividing up and selling, leasing and encumbering land which they owned at Alkoven and was entered in the Annaberg Land Register, Upper Austria. As part of the same transaction Ringeisen was given an option to purchase the property; at the same time the Roth couple undertook that, in the event of Ringeisen exercising the option and of approval of the transfer of ownership to him being refused by the competent administrative body, they would not sell the property to anyone else, would refrain from acting as owners, and would grant Ringeisen the right of exclusive occupation (letters of 3rd, 14th and 16th November 1961).

15. On 6th February 1962, Ringeisen made a contract with Mr. and Mrs. Roth for the purchase of the property; the purchase price was 400,000 AS. The contract for sale was submitted on 30th March 1962 to the Eferding District Real Property Transactions Commission (Bezirksgrundverkehrskommission, hereinafter referred to as the "District Commission") for approval.

The Upper Austrian Real Property Transactions Act (Grundverkehrsgesetz) provides as follows:

"Section 1 - (1) Every transfer of ownership and granting of usufructuary rights by legal act inter vivos in respect of a piece of land wholly or partly given over to agriculture or forestry is subject to approval according to the provisions of this Act.

.....

(2) Refusal of such approval renders the transaction null and void.

.....

Section 4 - (1) Legal transactions must correspond to the public interests in creating and maintaining agricultural or forest areas and in maintaining and reinforcing a productive farming community or in maintaining and creating economic small or medium-sized agricultural properties.

.....

(5) Transactions which do not satisfy the requirements of sub-sections (1), (2) or (3) above, shall not be approved.

.....

Section 6 - In particular, the requirements for approval of a transaction (Section 4) shall not be satisfied where there is reason to fear

(a) that the purpose of the purchaser is to resell the land as a whole or in lots for profit;

(b) that peasant farm holdings or small agricultural businesses or economically substantial parts thereof are being acquired to create or enlarge great estates;

.....

(d) that estates are to be... diverted from their use as farmland or forest for no adequate reason;

(e) that only a speculative capital investment is envisaged;

.....

Section 7 - If a legal transaction requires approval under the provisions of this Act, the contracting parties shall apply for approval to the District... Commission within four weeks of concluding the transaction."

16. The District Commission refused, on 28th September 1962, to approve the contract for sale. It found that the property could provide a farming family with a livelihood and that Ringeisen was an insurance agent and not a farmer. Referring to applications which Ringeisen had made for the approval of the purchase by him from the Roth couple of other properties and which had been refused, the District Commission considered that the files revealed clearly a picture of speculation in land. It also observed that Ringeisen had already marked out thirty-four plots for building. In conclusion, the District Commission remarked that, while fear of certain intentions on the part of a purchaser was sufficient under Section 6 of the Act for refusal of approval, the fact that in this case there was clear evidence that such intentions existed must carry even more weight.

17. In January 1962, Ringeisen had begun to sell part of the property in building sites; he continued to do this throughout 1962 and up to April 1963. After having obtained an expert opinion from the Provincial Planning Office (Landesplanungsstelle) on the basis of which he had the property surveyed and marked out, he was granted permission to build on the property by the Eferding District Administration (Bezirkshauptmannschaft) on 17th November 1962. These two bodies operate independently of the District Commission and their opinion or permission has no bearing on its decision: on the contrary, it is given expressly subject to the decision of the District Commission.

18. Ringeisen, it appears, has failed to inform prospective purchasers that he was acting under a power of attorney he held from the Roth couple and if any of them remarked that Ringeisen was not himself the vendor it was explained that the transaction was being effected in this way for taxation purposes. The purchasers were informed at the time by Ringeisen that permission had been obtained for building and were assured that work could begin at once. The purchase contracts drawn up by Ringeisen's lawyer included a clause stating that the Real Property Transactions Commission's approval was necessary to implement them, but Ringeisen had informed the

purchasers that this was a mere formality. The last twenty or so purchase contracts were not concluded through the same lawyer and did not contain that particular clause. In all cases the purchase price was payable immediately.

In June 1962, the Roth couple purported to withdraw the powers of attorney from Ringeisen. He disputed their claim and a final decision ordering him to deposit the powers of attorney with the court was taken on 13th September 1963.

19. Ringeisen appealed to the Regional Real Property Transactions Commission (Landesgrundverkehrskommission, hereinafter referred to as the "Regional Commission") against the District Commission's refusal to approve the contract for sale he had made with Mr. and Mrs. Roth.

The relevant provisions of the Upper Austrian Real Property Transactions Act are:

"Section 18

.....

(2) A Regional... Commission shall be set up in the office of the Provincial Government for decisions in last instance. Its members shall not be bound by any instructions in the exercise of their duties and their decisions shall not be subject to repeal or alteration by the administration.

.....

(4) The Regional... Commission shall consist of eight members, namely

(a) a judge appointed by the Provincial Government as president;

(b) one member appointed by the Head of the Provincial Government in his capacity as President of the Regional Agrarian Senate (Landesagrarsenat);

(c) two members appointed by the Provincial Government from the persons representing the interests of townspeople and residents in housing estates;

(d) one member appointed by the Provincial Government from the representatives of industry and commerce;

(e) one agricultural expert appointed by the Provincial Government;

(f) two members appointed by the Chamber of Agriculture (Landwirtschaftskammer) for Upper Austria.

.....

(8) Members are appointed for a term of five years...

.....

Section 20

.....

(2) Appeal against the decision of the District... Commission may be made to the Regional... Commission.

.....

Section 21

.....

(2) The Real Property Transactions Commissions shall take their decisions by majority votes and in private.... No information about the contents of deliberations, and in particular the voting, shall be divulged to a third party.

....."

20. The Regional Commission met on 12th February 1963 and decided to inspect the property which it did on 2nd April, on which date it also held an oral hearing. On 13th May 1963, the Regional Commission dismissed Ringeisen's appeal; it found that Ringeisen had made contradictory statements concerning his intended use of the property, that he had divided up and had sold - in all about fifty building plots - land which was farmland of good quality. For this and various other reasons, it was to be feared that he would withdraw land from agricultural use on a large scale without adequate reason and that he intended to make a speculative capital investment (Section 6 (d) and (e) of the Upper Austrian Real Property Transactions Act).

21. On 5th July 1963, Ringeisen made an appeal (Verfassungsbeschwerde) to the Constitutional Court (Verfassungsgerichtshof) against the decision of the Regional Commission; he alleged violation of the rights of all citizens to equality before the law and to have proceedings held before the judge established by law (gesetzlicher Richter - Articles 7, No. 1 and 83, No. 2 of the Constitution). In the appeal it was alleged, inter alia, that at the meeting of the Regional Commission on 13th May 1963, two members took part and voted who had not been present at one or both of the previous meetings at which the Regional Commission had examined the appeal.

The Constitutional Court gave its decision on 20th June 1964. Following its own precedents dealing with the question of the proper legal composition of a board (Kollegialbehörde) within the meaning of Article 133, No. 4, of the Constitution, it found that the circumstances complained of by the appellant had led to a violation of the right to have proceedings held before a judge established by law. It accordingly set aside the decision of the Regional Commission.

22. As a result of this judgment, the Regional Commission had to make a new decision on Ringeisen's appeal against the District Commission's decision of 28th September 1962.

At the opening of the new proceedings, Ringeisen challenged several members of the Regional Commission on the grounds of bias: he pointed out that the president had represented the Regional Commission in 1964 before the Constitutional Court; two members had

been heard as witnesses in those proceedings and one of them, Mr. T., was alleged to have stated that a different contract for the sale of the same property had already been approved; a third member, appointed by the Upper Austrian Chamber of Agriculture, was said to have already pronounced himself against the approval of the contract for sale of 6th February 1962; lastly, a fourth and a fifth member had taken part in the decision of 13th May 1963 which the Constitutional Court had set aside on 20th June 1964. In support of his challenge, Ringeisen relied on Section 7 of the 1950 General Administrative Procedure Act (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) which provides in sub-section 1 as follows:

"(1) Administrative officials (Verwaltungsorgane) shall refrain from performing their duties and shall delegate their functions:

.....

(iii) In cases in which they have been or are appointed as the agents of a party;

(iv) When there are other serious grounds giving rise to doubt as to their complete impartiality;

....."

The Regional Commission took its decision on 3rd February 1965.

It first observed that although Ringeisen was not entitled in law to a right of challenge under the aforementioned Act, his allegations of bias should nevertheless be examined ex officio. These allegations proved, however, to be unfounded. In its decision, which dealt at length with the allegations made, the Regional Commission found, in particular, that the approval which Mr. T. had mentioned concerned in fact the sale of different property owned by the Roth couple.

Ringeisen's appeal was also refused by the Regional Commission. In the light of enquiries it had caused to be made, it found that, in all, two hundred and nine building sites had been marked out on the properties in question; that Ringeisen had already concluded contracts for the sale of seventy-eight building plots and that approval of thirty-three of these contracts had been definitively refused by the Real Property Transactions authorities; that Ringeisen had encumbered the different properties with charges for substantial amounts of money and that he had made contradictory statements in his different applications for approval. The Regional Commission held that Ringeisen's plans were incompatible with the principles enunciated in Section 4 (1) of the Upper Austrian Real Property Transactions Act as it was to be feared that more than half of the various properties in question were to be sold for building. The contract for sale of 6th February 1962 was therefore found to be designed to destroy and break up a farm which had up till then been a workable unit, to bring about the abandonment of farm buildings and to effect a resale of valuable agricultural land for profit (Section 6 of the Upper Austrian Real Property Transactions Act).

23. Ringeisen made an appeal on 2nd April 1965 to the Constitutional Court against this decision. Among other grounds, he reiterated the charges of bias he had made against six members, including the president, of the Regional Commission (paragraph 22 above).

The Constitutional Court rejected the ground of appeal on 27th September 1965:

"It has not been necessary for the Court to deal with the allegations in the appeal to the extent that they attempt to show that the challenged members of the Commission were biased within the meaning of Article 7 of the General Administrative Procedure Act and ought therefore to have refrained from acting since, even if these allegations were correct on this point, the applicant was not affected in his right to be judged by the judge established by law by the refusal of his challenges. For a party has no right to challenge a body competent to decide or take part in the making of the decision on the grounds of bias. A board does not cease to be competent because a biased member takes part in the proceedings. Nor does the participation of a biased member - unless a special law expressly provides otherwise - affect the proper composition of a board any more than the competence or proper composition of an authority consisting of a single person (monokratische Behörde) is called in question through the bias of the regularly appointed office holder (Organwalter). It was therefore not necessary to go into the question whether bias actually existed as alleged (see to the same effect earlier decisions of the Constitutional Court of 9th October 1958, Slg. Nr. 3408, 6th October 1959, Slg. Nr. 3588, and 19th November 1960, Slg. Nr. 3829)."

The other grounds of appeal were also rejected in the same judgment.

II. The prosecutions of Ringeisen

A. The fraud case (19 Vr. 394/63)

24. On dates which the documents before the Court do not disclose, F. Widmann and R. Schamberger laid charges of fraud against Ringeisen.

25. On 13th February 1963, Mr. and Mrs. Roth laid charges with the public prosecutor's office at Linz against Ringeisen for abuse of the power of attorney given to him and for unlawfully encumbering and selling their property. On 21st February, the public prosecutor's office requested that preliminary inquiries (Vorerhebungen) be instituted against Ringeisen.

On 28th February, Ringeisen appeared for the first time before the investigating judge and was interrogated.

26. In March, June and July 1963, further complaints were made by Mr. and Mrs. Roth to the prosecuting authorities that Ringeisen continued to misuse the powers they had delegated to him. In the light of the Regional Commission's decision of 13th May 1963 (paragraph 20 above), the prosecuting authority at Linz made an application to the Linz Regional Court (Landesgericht) on 16th July 1963 that a preliminary investigation (Voruntersuchung) should be instituted against Ringeisen on the ground that he was suspected of having committed offences under Articles 197 and 205c of the Criminal Code. On 19th July, the public prosecutor's office further requested that the documents authorising Ringeisen to act on behalf of the Roth couple should be taken away from him and kept in safe custody, or, if this should not prove possible, that Ringeisen should be detained on remand for danger of committing further offences (paragraph 57 below). On 25th July, the authorities were informed that the Roth couple had obtained a decision from the civil court that Ringeisen should return the said documents.

27. One day later, the prosecuting authorities were informed by Dr. Kehrer, a lawyer acting on behalf of ten purchasers of plots, that the applicant had converted to his own use the purchase monies they had paid without being in a position to transfer to them the title of the properties purchased.

Acting on this information, the public prosecutor's office applied for an extension of the preliminary investigation. On 6th August 1963, the day after his arrest (paragraph 57 below), Ringeisen appeared before the investigating judge and was heard on the charges made against him. On 16th August, Mr. and Mrs. Roth made a statement in which they denied that investments which Ringeisen claimed to have made in their property had increased its value; they also alleged that Ringeisen had harvested and sold the fruit and crops for his own benefit.

28. Criminal charges were made by Dr. Kehrer on 27th August 1963 on behalf of nine further complainants: it was alleged that Ringeisen had published a new advertisement for the sale of building plots on 20th July and one of the complainants intimated that a copy made by Ringeisen of the Roths' power of attorney was being produced. The police drew up a report which was submitted to the Linz Regional Court on 30th August. Ringeisen was released from custody on 23rd December 1963 (paragraph 58 below).

29. Between 18th September 1963 and 6th April 1964, twenty-eight further charges and supplementary informations were laid by other purchasers of building plots and by the Roth couple. In the same period, the investigating judge held twenty-three hearings at which Ringeisen or witnesses were examined, directed that comprehensive enquiries be made and ordered the extension of the preliminary investigation to cover the new complaints. The investigating judge closed the preliminary investigation on 8th April 1964.

30. On 5th May 1964, Ringeisen lodged with the Federal Ministry of Justice a disciplinary complaint (Aufsichtsbeschwerde) against the authorities and courts at Linz who were dealing with his case. Upon his request, the applicant's counsel was given the case-files from 6th to 12th May. The case-files were also unavailable between 25th June and 6th July 1964 because of proceedings in the Civil Division of the Linz Regional Court.

31. The public prosecutor dealing with the case was absent on leave from 27th July to 24th August 1964. On 1st August, Ringeisen lodged with the public prosecutor's office an application for transfer of his case to another court area and challenging judges (Delegierungs- und Ablehnungsantrag). On 25th August, the public prosecutor's office transmitted this application to the court with unfavourable comment.

The case-files were transmitted on 1st September 1964 for decision on the application to the Supreme Court (Oberster Gerichtshof) which refused it on September 16th.

In the meantime, an investigating judge at the Linz Regional Court had made an order on 31st August 1964 that these fraud proceedings (19 Vr. 394/63) were to be conducted separately from other investigations of charges of fraudulent bankruptcy (19 Vr. 1566/64, paragraph 49 below), which had been made on 24th August 1964.

32. In accordance with Article 112 of the Code of Criminal Procedure, the case-files were forwarded to the public prosecutor's office on 12th October 1964. Under that provision, the public prosecutor's office should, within a period of two weeks, file the indictment or inform the investigating judge that it does not intend to pursue the prosecution; it may also apply to have the preliminary investigation extended. On 4th January 1965, the public prosecution applied for an extension of the preliminary investigation to cover a new complaint laid on 31st December 1964 by Dr. Kehrer on behalf of another purchaser. On the same day, the files were sent, in connection with other proceedings, to the Vienna District Court (Bezirksgericht) and then, on January 19th, to the Wels Labour Court (Arbeitsgericht); they were returned to Linz on 3rd February. Two days later the investigating judge examined six witnesses.

33. Ringeisen was summoned to appear before the investigating judge on 8th February 1965 but arrived late and excused himself; his examination then took place on 16th February.

On 18th February, he was allowed to inspect the case-files and make photostat copies.

34. On 20th February 1965, a supplementary complaint was made by the lawyer, Dr. Kehrer, and the public prosecutor's office applied, on February 25th, for an extension of the preliminary investigation to include this complaint. The investigating judge decided, on 2nd March 1965, to extend the preliminary investigation to include the supplementary complaints made since 31st December 1964.

35. On 15th March 1965, Ringeisen deposited with the Linz Regional Court a decision of the Linz District Court dated 23rd February and relating to the entry of a charge on his property (paragraph 60 below); while he was at the court he was, however, arrested in connection with the fraudulent bankruptcy proceedings, No. 19 Vr. 1566/64 (paragraph 61 below).

36. The indictment (Anklageschrift) was filed with the Linz Regional Court on 27th April 1965 and notified to Ringeisen on April 30th. It charged him with the offences of aggravated fraud (Betrug, Articles 197, 200, 201 (d) and 203 of the Criminal Code) and of aggravated fraudulent conversion (Untreue, Article 205c of the same Code).

He was accused of:

I. Having falsely pretended, between 3rd November 1958 and 5th April 1963, to be an honest real estate seller, borrower and agent with a view to induce:

A. 78 persons to acts detrimental to them, namely to make payments of some 1,400,000 AS. It was alleged that Ringeisen had concealed from them the fact that the contracts for sale which he made with them could be implemented only with the approval of the Real Property Transactions Commission; Ringeisen had only submitted thirteen of these contracts to the Real Property Transactions Commission a year after making them and a further twenty-one after more than one year; in the end, his contracts for sale no longer included a clause stating that such approval was required for their implementation. It was also alleged that Ringeisen had received 1,359,000 AS from his business of "killing" real estates (gewerbsmässige Güterschlächtereie) and that he refused to repay the money;

B. two other persons, (1) Franz Widmann and (2) Rudolf Schamberger, to grant loans of which a large part had not been repaid (paragraph 13 above);

II. Having misused, with intent to profit, the power of attorney which had been given to him by the Roth couple on 9th May 1961 and revoked by them as of 22nd August 1962, by encumbering their land at Alkoven with various charges after this last date.

37. On 3rd May 1965, Ringeisen lodged an objection (Einspruch) with the Court of Appeal (Oberlandesgericht) against the indictment. He alleged in particular that he had no intention of causing loss to the purchasers of sites and that he had invested more than 2,000,000 AS in the property. In the same document, he also requested the transfer of all civil and criminal proceedings to courts outside the jurisdiction of the Linz Court of Appeal: he alleged that it was absolutely impossible to find at Linz a really impartial and objective judge who was not prejudiced against him on account of either having taken part in the work of the Real Property Transactions Commissions or having been concerned with litigation arising out of his dealings with the property.

The public prosecutor's office opposed these applications the following day.

38. On 19th May 1965, the Linz Court of Appeal dismissed Ringeisen's objection against the indictment for the reason that the results of the investigation sufficed to ground the suspicion that he had committed the offences of which he was charged.

The case-files were transmitted to the Linz Regional Court on 25th May. On 8th June, Ringeisen appeared in court and was heard; he withdrew various complaints he had made and maintained only his application for transfer. In consequence, the case-files were submitted on 11th June to the Supreme Court which refused the application on July 8th.

39. On 3rd August 1965, Ringeisen made a challenge before the Court of Appeal against all the judges at the Linz Regional Court. The Court of Appeal ordered him to specify the grounds for the challenge which, however, he withdrew on 6th September 1965 except as regards the investigating judge who had ordered his arrest in the fraudulent bankruptcy proceedings on 15th March 1965; he also entered a further general application for transfer. The challenge was rejected by the President of the Linz Regional Court on 13th September and the Court of Appeal ruled, on 27th September, that there was no jurisdiction to hear an appeal on this point.

The application for transfer was transmitted on 24th September to the Supreme Court which refused it on October 27th.

40. Ringeisen was notified on 3rd November 1965 that the trial would open on December 13th. On 4th December, he made various applications for transfer and to have the trial cancelled. On 6th December, the presiding judge at the Linz Regional Court informed him that, as the Supreme Court had already refused two earlier applications for transfer, his further applications of 4th December would not be entertained and there was no reason to cancel the trial.

The trial opened on 13th December and, on 16th December, was adjourned to 13th January 1966 on the application of both the prosecution and the defence in order to have further evidence taken. Two experts were nominated by the court on 20th December to evaluate the amount of money which Ringeisen had invested in the property.

On 7th January 1966, Ringeisen made an application to the effect that a plea of nullity for safeguarding the law (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes) should be entered on his behalf by the Attorney General (Generalprokurator). However, on 10th January he was informed by the presiding judge that, in view of the hearing beginning on 13th January, the files could only be submitted thereafter to the Attorney General's office; similarly, new applications for a transfer which the applicant had intended to make could not be submitted to the competent authority for the time being as this would delay proceedings.

41. The trial was resumed on 13th January 1966 and ended the following day.

Ringeisen was found guilty of aggravated fraud on the counts concerning the 78 purchasers and Franz Widmann (IA and IB (1) of the indictment). He was acquitted of the other charges (IB (2), R. Schamberger and II, the Roth couple). He was sentenced to three years' severe imprisonment (schwerer Kerker) with the additional punishment of fasting and "sleeping hard" (hartes Lager) once every three months. In fixing sentence, the Regional Court took account of aggravating and of extenuating factors: on the one hand, the purchasers of the building plots were poor persons who had lost their savings or borrowed money to pay Ringeisen, the criminal conduct of Ringeisen had continued over a long period, the damage caused greatly exceeded the amount of 15,000 AS fixed in Article 203 of the Criminal Code; on the other hand, Ringeisen's previous record was unblemished, some purchasers had not sustained loss and the damage would be made good in part from payment out of the Roth couple's bankruptcy. The court found, in Ringeisen's favour, that there were circumstances for "special mitigation" (ausserordentliches Milderungsrecht) as provided for in Article 265a of the Code of Criminal Procedure. In accordance with Article 55a of the Criminal Code, the court reckoned as part of the sentence the time which Ringeisen had spent in custody on remand (from 5th August to 23rd December 1963 and from 15th March 1965 to 14th January 1966, paragraphs 59 and 77 below).

Immediately after the delivery of judgment, Ringeisen gave notice of his intention to enter a plea of nullity (Nichtigkeitsbeschwerde) and an appeal (Berufung) against his conviction and sentence; the public prosecutor gave notice that he would enter a plea of nullity in respect of the acquittal and an appeal against the sentence as being too lenient.

42. The public prosecution lodged, on 25th February 1966, a plea of nullity and an appeal. Ringeisen's plea of nullity and appeal were lodged on March 3rd.

The case-files were forwarded on 9th March to the Supreme Court which fixed a hearing for 14th July 1966. On 27th June 1966, the Supreme Court dismissed an application by Ringeisen to have witnesses examined and for leave to be present at the hearing.

43. The pleas of nullity and the appeals were heard on 14th July 1966 by the Supreme Court which gave judgment on July 27th.

The Supreme Court set aside the decision of 14th January 1966 and referred the case back to the Regional Court for rehearing as regards the conviction for fraud under IB (1) (F. Widmann), the acquittal on the charge of fraudulent conversion under II (the Roth

couple) and the sentence. The Regional Court's decision was upheld as regards the conviction for fraud under count IA (78 purchasers) and the acquittal on the charge of fraud under count IB (2) (R. Schamberger).

The judgment was drawn up and transmitted to the Linz Regional Court on 29th August 1966. On September 2nd, the case was referred to a different chamber of the Regional Court.

44. On application made by the prosecution on 9th September 1966 (Article 34, paragraph 2, first sub-paragraph, of the Code of Criminal Procedure), the Linz Regional Court decided, on September 14th, that the proceedings on the charges of fraud under count IB (1) (F. Widmann) and of fraudulent conversion under count II (the Roth couple) should be discontinued. Consequently, the only matter left outstanding was a decision on the sentence for the conviction of fraud under count IA (78 purchasers). Ringeisen was given notice that the further hearing before the Regional Court would be held on October 18th.

45. On 29th September 1966 and the days which followed, Ringeisen made numerous applications for transfer, joinder of the case to other criminal proceedings, review (Wiederaufnahme des Strafverfahrens) etc., which were all rejected by the Regional Court on 12th October and by the Court of Appeal on 16th November.

46. The rehearing of the case took place before the Linz Regional Court on 18th October 1966.

In its judgment of the same day, the court first noted that, since the prosecution had also appealed against the sentence imposed on 14th January 1966, the prohibition against passing a more severe sentence (*reformatio in pejus*) did not apply.

The court took into account certain extenuating circumstances: Ringeisen had no previous convictions, he had made restitution - although to a very small extent - for the loss caused and he affirmed he would do so for the remainder, though the court expressed a reservation about his sworn statement of assets (*Offenbarungseid*). On the other hand, the court pointed out that there were aggravating factors: the people who had suffered loss were not affluent and this had caused particular hardship, the offences had continued over a considerable period and the damage had been particularly high. Weighing the extenuating and aggravating circumstances against each other, the court concluded that it could not be said that the extenuating circumstances predominated within the meaning of Article 265a of the Code of Criminal Procedure with the result that the punishment had to remain within the limits fixed by Article 203 of the Criminal Code - five to ten years' severe imprisonment - though it could be fixed at the minimum.

The sentence was therefore fixed at five years' severe imprisonment with the additional punishment of fasting and "sleeping hard" once every three months. The court reckoned as part of the sentence the time (5th August to 23rd December 1963 and 15th March 1965 to 18th October 1966) Ringeisen had spent in custody on remand. Ringeisen gave notice that he would lodge a plea of nullity and an appeal; he also made an application for transfer.

Ringeisen lodged the plea of nullity and an appeal on 3rd November 1966. The case-files were submitted to the Supreme Court on 24th November but were returned to Linz from 21st February to 23rd March 1967 for the consideration of an application made by Ringeisen for provisional release (paragraph 76 below).

47. Subsequently, Ringeisen laid criminal charges for perversion of justice (*Missbrauch der Amtsgewalt*) against a presiding judge at the Supreme Court. On 26th June 1967, the Supreme Court was informed by the Vienna public prosecutor's office that this matter would not be dealt with for the time being and on 30th June the Supreme Court fixed 5th October 1967 as the date for a hearing on the applicant's appeal and plea of nullity.

On 29th September 1967, Ringeisen made an application to the Supreme Court challenging the president and other judges of the chamber which was to decide on his appeal and plea of nullity; Ringeisen maintained that a preliminary investigation had been opened against the president before the Regional Court in Vienna for perversion of justice. By decision of 3rd October 1967, the Supreme Court cancelled the hearing fixed for 5th October and referred Ringeisen's challenge to the competent chamber. Before that chamber could take a decision, the Regional Court of Vienna requested the case-files, on 20th October, in order to take a decision on an application made by Ringeisen that preliminary investigations should be opened against the president of the chamber of the Supreme Court dealing with the case.

On 4th December 1967, the files were returned to the Supreme Court which, on December 19th, rejected the challenge of the judges. Subsequently, a new date for the hearing was fixed for 15th February 1968.

On 8th February 1968, Ringeisen once more challenged the judges of the Supreme Court on the ground that a civil action for damages in the amount of about 50,000,000 AS was pending against the president of the chamber before the Regional Court in Vienna. The Supreme Court refused the challenge on 13th February.

48. On 15th February 1968, the Supreme Court dismissed an application made by Ringeisen to adjourn the hearing fixed for that day on the ground that certain files should be consulted in connection with these proceedings. On the same day, the Supreme Court, in a final judgment, dismissed the plea of nullity but reduced the sentence. In computing the sentence, the Supreme Court held that the reasons for mitigation predominated in substance if not in number and that it was therefore possible to apply Article 265a of the Code of Criminal Procedure; the sentence originally imposed in January 1966 had been appropriate to Ringeisen's convictions at that time but account should be taken of the fact that the charge of defrauding F. Widmann had been abandoned later on; the sentence was therefore reduced to two years and nine months' severe imprisonment with the additional punishments ordered by the court of first instance.

On 24th April 1968, the Regional Court decided that the entire time Ringeisen had spent in detention on remand should be reckoned as part of the sentence.

B. The fraudulent bankruptcy case (19 Vr. 1566/64)

49. In August 1964, creditors laid criminal charges against Ringeisen; they accused him of unlawfully attempting to prevent them from obtaining execution of judgments awarded in their favour against him after it had become known that the sales of building sites

could not be completed (paragraphs 16 and 20 above) and ordering him to refund the purchase money. On the application of the public prosecutor's office at Linz, the investigating judge decided, on 31st August 1964, that preliminary investigations should be opened and conducted separately from those relating to the charges of fraud (19 Vr. 394/63) which were for the time being closed pursuant to Article 112 of the Code of Criminal Procedure (paragraph 32 above).

Ringeisen was examined on 3rd September and then on 20th October by the investigating judge who later extended the preliminary investigation to cover further similar complaints made in the latter part of 1964 and early in 1965.

50. On 16th March 1965, the day after Ringeisen's detention on remand was ordered in these proceedings (paragraph 61 below), he was brought before the investigating judge; he challenged that judge and all the other judges in the jurisdiction of the Linz Court of Appeal. The case-files were transmitted to the Supreme Court which dismissed the challenges on 1st April 1965. Further challenges of judges were refused in May 1965.

51. On the application of two creditors, the Linz District Court appointed, on 23rd March 1965, a receiver (Zwangsverwalter) over property owned by Ringeisen at Linz.

52. On 14th May 1965, Ringeisen was adjudged bankrupt (Eröffnung des Konkurses) by the Linz Regional Court. The principal effects of such a decision are set out in Section 1, sub-sections (1) and (2), of the Bankruptcy Act (Konkursordnung):

"(1) The effect of the commencement of bankruptcy is to remove all assets liable to execution which belong to the bankrupt at the time or which accrue to him during the bankruptcy (the bankrupt's estate) from his free disposition....

(2) The bankrupt's estate shall be taken in charge and administered in accordance with this Act and shall be employed for the joint satisfaction of those personal creditors who had pecuniary claims against the bankrupt at the commencement of bankruptcy (the bankruptcy creditors).

....."

In application of Sections 75 to 77 of the same Act, notice of the adjudication was given to a series of authorities at Linz, including various courts, the revenue office, the social security office, the central railway station, the freight station, the Danube navigation company, the post and telegraph office, the Bar association, the chamber of commerce, etc. A notice was put in the local official gazette (Amtliche Linzer-Zeitung). The assignee was appointed by the court on the same day.

53. The indictment was filed on 24th March 1966 with the Regional Court at Linz and notified to Ringeisen on the following day. Ringeisen was accused of having committed fraudulent bankruptcy, defined in Article 205a of the Criminal Code as follows:

"whoever intentionally defeats or curtails the satisfaction of his creditors or some of them by concealing, disposing of, alienating or damaging a part of his assets, by alleging or acknowledging a non-existent liability or in any other way diminishing his assets, shall be punished...".

It was alleged that Ringeisen, in order to frustrate execution of judgments given against him, had negotiated, in April 1964, a fictitious loan of 200,000 AS from an insurance company for whom he worked as an agent and then consented to a court settlement in favour of the insurance company for the same amount. It was further alleged that before he had been adjudged bankrupt he had used 60,000 AS to satisfy seven creditors who had obtained writs of seizure and had kept the remaining sum of 140,000 AS for himself.

54. Ringeisen was, at his own request, brought before the Linz Regional Court on 4th April 1966; he lodged an objection to the indictment and asked that the Supreme Court or the Vienna Court of Appeal should rule on it on the ground that the courts at Linz were prejudiced against him. By a document dated 22nd April, Ringeisen put forward further grounds in support of the objection.

On 27th June 1966, the Supreme Court rejected, for lack of jurisdiction, Ringeisen's application that it should rule on the objection to the indictment and as ill-founded the application for transfer. The Linz Court of Appeal dismissed the objection to the indictment on July 6th for the reason that the results of the preliminary investigation grounded the suspicion that Ringeisen had committed the offence of which he was accused.

55. On 15th August 1966 and 8th February 1967, the Linz Regional Court rejected as inadmissible two applications made by Ringeisen for review of the proceedings. A further application for transfer was dismissed by the Supreme Court on 4th February 1967.

56. On 17th September 1968, the prosecution gave notice, under Article 34, paragraph 2, first sub-paragraph, of the Code of Criminal Procedure, of the withdrawal of the charges of fraudulent bankruptcy in view of Ringeisen's final conviction and the sentence imposed on 15th February 1968 in the fraud case. The Linz Regional Court ordered the discontinuance of the prosecution for fraudulent bankruptcy and Ringeisen was so notified on 27th September 1968.

III. The detention of Ringeisen on remand

A. The first period of detention (5th August to 23rd December 1963)

57. On 30th July 1963, the investigating judge at Linz in charge of the preliminary investigation in the fraud case (paragraphs 24 et seqq. above) issued a warrant for Ringeisen's arrest on the ground of danger of his committing further offences (Wiederholungsgefahr) under Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure; the judge stated that Ringeisen continued, although aware of the Regional Commission's refusal to approve the contract for sale he had made with the Roth couple, to commit punishable acts by having further advertisements for the sale of sites inserted in newspapers. Ringeisen was arrested on 5th August 1963 and brought the next day before the investigating judge who remanded him in custody on the ground that there was a danger of his committing further offences.

In August and September 1963, Ringeisen applied for release. The application was dismissed by the Judges' Chamber (Ratskammer) of the Linz Regional Court on 4th September 1963; the court considered that there was both a danger of Ringeisen committing further

offences and a danger of suppression of evidence (Verdunkelungsgefahr, Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure). The Linz Court of Appeal dismissed Ringeisen's appeal on 23rd September 1963 on the grounds that it could be assumed from Ringeisen's conduct that he would commit further offences and that there was a danger of suppression of evidence.

58. Another application for release pending trial was made by Ringeisen on 28th October 1963. This was refused by the investigating judge on November 7th and, on appeal, by the Judges' Chamber on November 19th for the same two reasons.

On further appeal, the application was allowed by the Linz Court of Appeal on 19th December 1963 subject to Ringeisen giving a solemn undertaking (Gelöbnis) in accordance with Article 191 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Appeal pointed out, inter alia, that:

"(...)

The orders made in chambers (Beschlüsse auf Erlassung von einstweiligen Verfügungen) by the Linz Regional Court granting an injunction have now come into force; the accused is thereby instructed to deposit with the court the powers of attorney he holds from Mr. and Mrs. Roth, and is prohibited from selling or encumbering the properties in Annaberg... When it is further taken into consideration that the accused's transactions with regard to the above-named properties and the criminal charges and civil actions relating to these transactions have been given very wide publicity, then it cannot be supposed that the accused will still be able to advertise and to find purchasers for building plots. Furthermore, the investigations so far have failed to yield any conclusive indications that the accused might commit criminal offences in other ways, particularly since the complaints against him are essentially concerned with his conduct in connection with the purchase and resale of Mr. and Mrs. Roth's property. Moreover, any further fears that the accused might frustrate the safeguarding of building plot purchasers' claims can be dismissed as a result of his offer to deposit with the court the decision of the Linz District Court dated 2nd October 1963 on the entry of the priority notice of a contemplated charge (Anmerkung der Rangordnung über die beabsichtigte Verpfändung) for 2,000,000 AS on his property in Linz. There are thus no special grounds to justify the fear that the accused might repeat the criminal offences that he is suspected of having previously committed. There is thus no longer any ground for detention under Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 4, of the 1960 Code of Criminal Procedure.

In the same way, there are no longer grounds for maintaining detention on remand under Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 3, and Article 180, paragraph 1, of the 1960 Code of Criminal Procedure. According to Article 190, paragraph 2, of this Code, detention on remand in cases where the accused is held merely on the ground set out in Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 3, must not be extended beyond two months, or beyond three months if the extension is approved by the Regional Court of Appeal. These time-limits have already expired. It is true that several fresh complaints have been made out against the accused, but these relate mainly to the same series of facts, namely the accused's actions in connection with the purchase of Mr. and Mrs. Roth's property and the resale of building plots. Moreover, the persons named in these fresh complaints... have already been heard on the major issues by the investigating judge, so for this reason too there is no longer any danger of collusion or suppression of evidence (Verabredungs- und Verdunkelungsgefahr).

(...)

As regards the deposit, offered by the accused, of the decision on the entry of a priority notice, or the prolongation of this decision when it expires, the investigating judge will have to take the necessary measures, particularly since the accused has expressly offered to deposit this decision if he is released."

The offer thus accepted by the Court of Appeal had been made by Ringeisen when he had applied to be released on 28th October 1963; the Judges' Chamber of the Regional Court had refused it on 19th November as being insufficient to dispel the danger of his committing further offences.

59. Ringeisen was then released on 23rd December 1963 on his giving the solemn undertaking and depositing with the court the decision for the entry of a priority notice of a contemplated charge. His first detention had lasted four months and eighteen days.

60. On being convened by the investigating judge, Ringeisen stated on 30th September 1964 that he wished to consult a lawyer about a new entry of a priority notice (the first one was due to expire the following day). The judge allowed him until 7th October to deposit such security. In a letter of 17th October, Ringeisen made an offer of an entry of a priority notice on the proceeds of a contemplated sale (Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Veräußerung) of his property at Linz for the sum of 1,500,000 AS. He renewed this offer when he appeared before the investigating judge on 16th February 1965; the judge accepted the offer while remarking that the priority notice offered could not be considered as a substitute (Ersatz) for the former one. On 23rd February, Ringeisen obtained from the Linz District Court a decision, valid until 22nd February 1966, for the entry of the new security he had offered and he deposited it with the investigating judge on 15th March 1965.

B. The second period of detention (15th March 1965 to 20th March 1967)

61. On 15th March 1965, the public prosecutor's office applied to the investigating judge, in the fraudulent bankruptcy proceedings (19 Vr. 1566/64), for, inter alia, an order for the arrest and detention of Ringeisen on remand pursuant to Article 175, paragraph 1, sub-paragraphs 3 (danger of collusion) and 4 (danger of committing further offences) of the Code of Criminal Procedure.

The investigating judge granted the application. Ringeisen who happened to be at the court in connection with the other criminal proceedings, was arrested immediately and informed of the reasons for his remand in custody.

The warrant of arrest recited the offences of which Ringeisen was suspected in the two criminal proceedings and in conclusion stated:

"The accused has... in full knowledge of his very considerable financial liabilities arising from his unsuccessful land speculations, diminished the assets available for the satisfaction of claims in damages by contracting a large loan, accepting advance payments of rent, transferring property, etc.; he has prejudiced the interests of creditors not belonging to the priority classes and frustrated execution of judgments.

The present warrant is issued as requested by the prosecution in order to counter the danger of collusion between the accused and parties contracting with him and to prevent the danger that he continues activities which could lead to a further diminution of his assets or the frustration of execution."

62. The following day, 16th March 1965, Ringeisen appeared before the investigating judge where he declared he was appealing against the order for his arrest and detention on remand.

On 26th March 1965, Ringeisen appealed in writing to be provisionally released; he took up in some detail the various considerations set forth in the warrant. He emphasised that it was absolutely impossible for him to cause damage to his creditors because of a sworn statement of assets he had made on 15th December 1964 and the fact that his personal property and all debts due to him were under seizure. He added that he needed to work on the land at this season. In support, he appended some documents, including a civil court order of 5th March 1965 refusing him free legal aid for the reason that he was still the owner of property which an expert valued at 4,000,000 AS.

In a supplementary document submitted on 17th May 1965, Ringeisen filed an account showing that he had made a claim for over 2,000,000 AS against the Roth couple in their bankruptcy proceedings. He stated that his detention in April and May was going to cause him a loss of sales of agricultural produce, in July and August, amounting to about 100,000 AS. He also asked to be released in order to be able to provide for his son.

The appeal was refused by the Judges' Chamber of the Linz Regional Court on 26th May 1965. The court held that the ground of danger of collusion had ceased to be operative by reason of the expiry of the time-limit (Article 190, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure) but that Ringeisen's continued detention on the ground of a danger of his committing further offences

"is however necessary and expedient in view of the factual and legal position, which is described in detail in the warrant of 15th March 1965, taken together with the appellant's attitude obstinately denying all guilt... in spite of the partial results of the preliminary investigation, which clearly incriminate him. For the accused's attitude of mind as already known to the court gives rise to the fear that he would use his freedom to renew the criminal conduct with which he is charged".

On further appeal, in which Ringeisen referred to the fact that he had been adjudged bankrupt on May 14th, the Linz Court of Appeal nevertheless confirmed, on 16th June 1965, the Judges' Chamber's decision for the reasons set out therein.

63. In the meanwhile and at the same time as the indictment was filed in the fraud case (27th April 1965), the public prosecutor's office had requested the Linz Regional Court to remand Ringeisen in custody in that case too for danger of absconding (Fluchtgefahr, Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure) and for danger of committing further offences. The request was based on the grounds that the decision for the entry of a priority notice for a contemplated charge, which Ringeisen had deposited in court on his release on 23rd December 1963, had expired on 1st October 1964 and had not been renewed; that by reason of Ringeisen's "abusive and hopeless" litigation his creditors had been unable to avail themselves of that security while it was still valid; that enquiries had revealed that Ringeisen kept concealed considerable sums of money which he might use to abscond in view of the indictment preferred against him; that, in addition, there was a risk that the damage caused would become irreparable and, in view of Ringeisen's particular pertinacity, there was a danger of his committing further offences.

The Linz Regional Court ordered, on 12th May 1965, that Ringeisen should again be held in detention in the fraud case. It began by stating in its reasons that his first detention had been terminated in December 1963

"... in particular because the accused, through his offer to deposit the decision of the Linz District Court dated 2nd October 1963... relating to the entry of a priority notice for a contemplated charge for a sum of 2,000,000 AS, was able to dispel the suspicion that he might frustrate the guaranteeing of the claims of the purchasers of building plots".

The court continued:

"Ringeisen who had stated that he was willing, in the expiration of this priority notice, to obtain a corresponding further guarantee for the purchasers of plots, was only able after the expiry of this priority notice (1st October 1964) to deposit on 15th March 1965 a decision of the Linz District Court dated 23rd February 1965... relating to the entry in the St. Peter register of a priority notice of a contemplated sale of the property No. 238. The purchasers had not been able to make any use of the priority notice up to 1st October 1964 because Michael Ringeisen through his persistent litigation made it impossible for the individual creditors to obtain execution orders. The chances of receiving reparation thus appear not merely doubtful but, as far as many creditors are concerned, quite out of the question, owing to the heavy prior encumbrances on the premises situated at No. 217, Wiener Reichstrasse.

.....

It cannot be assumed that the accused did in fact invest the whole one and a half million schillings received from the purchasers of plots in the incompleting building on the Alkoven property; moreover, enquiries addressed to all the financial institutions at Linz show that Ringeisen has no money deposited there. It is quite natural to conclude from this that the accused is keeping money hidden which, in his reaction to the charge now preferred, he could use in order to abscond.... A further consideration is that the accused's real property is so encumbered that to abandon it, should he abscond, would not involve any serious loss.

In its decision [19th December 1963] the Linz Court of Appeal has already explained that the numerous sales, which continued for almost a year after the refusal of approval by the District Commission, were evidence of conduct by the accused revealing particular pertinacity in attempting to obtain money by the sale of building sites. Although the accused is also in detention on remand on account of the separate proceedings before this court relating to frustration of execution (19 Vr. 1566/64) the ground of detention specified in Article 175, paragraph 1, sub-paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure is nonetheless established since it is to be feared that,

were the accused to be released in the other proceedings, he might cause the damage to purchasers of building plots to become final or, considering the large number of previous acts, might commit further similar offences."

This decision was confirmed on appeal by the Linz Court of Appeal on 19th May 1965 for the reasons of danger of absconding and danger of committing further offences. At the very end of May or early in June 1965, Ringeisen attempted to make a further appeal but withdrew this complaint when he appeared in court on June 8th (paragraph 38 above).

64. Ringeisen made further applications for provisional release in both criminal cases on 12th July, 29th July, 30th August and 20th September 1965. These applications were refused by the investigating judges, in the fraudulent bankruptcy case on September 23rd and in the fraud case on the following day. Both judges found that the reasons for his detention continued.

Against these decisions Ringeisen lodged appeals, which were separate but couched in almost identical terms, in the fraudulent bankruptcy case on 24th September and in the fraud case on 27th September; he filed supplementary documents on 3rd October and 2nd November. He alleged that the reasons given to continue his detention were fictitious and artificial and that the authorities wished to deprive him of his property and rights and to prevent him from protecting the interests of the purchasers of plots. He claimed that if he was at liberty he could defend himself against these measures, prove that the prosecution was covering up for the real villains and consult the court files whereas persons unknown had, during his detention, suppressed documents which were damning for the witnesses and the prosecution. He further complained that he was sustaining heavy losses as he could not work on his land or at his insurance agency and he asserted that his son of sixteen years had had to abandon his studies and take a job as an unskilled labourer.

The appeal in the fraudulent bankruptcy case was refused by the Judges' Chamber on 10th November 1965 by reference to its previous decision of 26th May 1965 confirmed by the Court of Appeal on 16th June 1965: it was stated that the circumstances which had then justified the continued detention of Ringeisen on remand still held good. On 9th December 1965, the Linz Court of Appeal dismissed a further appeal, approving the reasons stated in the decision of the Judges' Chamber.

No separate decision appears to have been taken on the appeal of 27th September 1965 in the fraud case.

65. In the course of the trial in the fraud case, Ringeisen applied, on 17th December 1965 and in both criminal proceedings, to be released for Christmas; the judge who was presiding at the trial refused the application on 28th December 1965.

66. On 14th December 1965, Ringeisen had made another application for provisional release in the fraudulent bankruptcy case in which he maintained that there was no danger of his committing further offences as his property was no longer at his disposal on account of his bankruptcy; the investigating judge refused the application on December 20th, on the ground that this danger continued.

On appeal, the Judges' Chamber confirmed this decision on 29th December 1965 referring to the earlier decisions relating to Ringeisen's detention on remand (Judges' Chamber on 26th May and 10th November 1965; Court of Appeal on 16th June and 9th December 1965).

A further appeal by Ringeisen was dismissed by the Court of Appeal on 9th February 1966; the Court of Appeal found that the appeal was unsupported by any facts to rebut the reasoning that there was still a danger of his committing further offences and that the adjudication in bankruptcy did not remove this danger; it referred to its decision of 16th June and 9th December 1965.

67. Immediately after Ringeisen's conviction for fraud on 14th January 1966 (paragraph 41 above), his counsel had requested the Regional Court to release him from detention pending the hearing of the plea of nullity and appeal. Counsel stated that his client had no previous convictions and that after spending a year in detention on remand it would not be worthwhile absconding; as the property had been sold there was no longer any danger of his committing further offences. The public prosecutor opposed this application on the grounds that the reasons for detention remained valid and, as Ringeisen was in detention on remand in the other criminal proceedings, he would gain nothing by an order for his release in this case.

The Regional Court decided that Ringeisen should be released in this case subject to his giving a solemn undertaking in accordance with Article 191 of the Code of Criminal Procedure; it found that the reasons for his detention on remand no longer obtained.

The public prosecution lodged an appeal against the decision on the grounds that: it was not completely clear what had become of the money received by Ringeisen and he might use it to abscond; the danger of his absconding was even enhanced by the fact that he had been sentenced to a term of three years' imprisonment of which he still had two years to serve; it was possible that the Supreme Court would increase the sentence; on account of his frequent repetition of fraudulent acts it could be concluded that there was a danger of Ringeisen's committing further offences; although Ringeisen did not have real estate available any longer, fraudulent contracting of loans could doubtless also be effected by other methods. As this appeal had suspensive effect (Article 197 of the Code of Criminal Procedure), Ringeisen stayed in custody on remand.

On 2nd March 1966, the Linz Court of Appeal allowed the public prosecution's appeal. It held that there had been no favourable change of circumstances since its decision of 19th May 1965; on the contrary, the sentence passed on Ringeisen and the fact that it might be increased as a result of the prosecution's appeals might prompt him to abscond, particularly as his property in Austria was encumbered beyond its value and to abandon it would be no real loss; moreover, the frequency of his punishable acts and his obstinate attitude justified the fear that he would repeat the offences. This danger was not removed by the fact that further dealings with the property at Alkoven were impossible, as Ringeisen was also charged with offences unconnected with that property.

68. At the same time as he lodged on 3rd March 1966 the plea of nullity and appeal against his conviction and sentence of 14th January 1966 in the fraud case (paragraph 42 above), Ringeisen requested his immediate release on the grounds that he had already spent two years in custody on remand. The case-files were first transmitted to the Supreme Court, which dismissed on 27th June 1966 various procedural applications made by Ringeisen, and then returned to the Linz Regional Court for consideration of the request for provisional

release. Ringeisen's lawyer withdrew that request on 30th June 1966 in order that the files should be transmitted again immediately to the Supreme Court for the hearing of the pleas of nullity and the appeals which had been fixed for 14th July 1966.

69. In the fraudulent bankruptcy case, Ringeisen had made a further application for provisional release on 18th February 1966, again combined with a request for transfer. He referred to the earlier decisions (16th June 1965, 9th December 1965 and 9th February 1966) refusing his release in which it had been held that the danger of his committing further offences continued in spite of his having been adjudged bankrupt and he said that this "fictitious" reason might have been given either because the Court of Appeal was not aware of the true facts or because of the intrigues of an official of the prosecution whom he suspected of scheming in the Alkoven business. In this connection, he alleged in particular that there were political considerations involved: his building schemes would have brought to the district numerous purchasers of modest means whose votes would have reinforced the socialist majority in the town council to which the Provincial Government and certain officials were opposed; the judges in the jurisdiction of the Linz Court of Appeal were prejudiced against him as many of them served on the Real Property Transactions Commissions and the others were influenced by their colleagues as well as by the wide publicity given to his affairs. He complained in detail of the unfair way in which the various proceedings against him, including his bankruptcy, had been handled, he protested his innocence and he emphasised that he had been held in detention for sixteen months. He threatened to go on hunger strike as from 1st March and he insisted that his application be referred to the Supreme Court for an order that it be decided upon by a regional court other than that within the jurisdiction of the Linz Court of Appeal.

He reiterated the application on 22nd April 1966 in a document supplementing his objection to the indictment, explaining in a further document filed on 15th May 1966 that the investigating judge had informed him that an application for release could not be combined with the objection to the indictment.

The Linz Court of Appeal, when rejecting the objection to the indictment on 6th July 1966 (paragraph 54 above), also decided that Ringeisen should remain in custody since the danger of his committing further offences continued; the court observed that there had been no change in the legal or factual circumstances since its decision of 9th February 1966.

70. On 15th July 1966, the day after the pleas of nullity and the appeals in the fraud case had been at hearing (paragraph 43 above), Ringeisen applied to be released from detention in each of the criminal proceedings.

In his application in the fraud case, he said that the representative of the Attorney General (Generalprokurator) had asked at the Supreme Court for his conviction to be set aside on all counts; Ringeisen inferred from this that there was no longer any basis for the charges made in the indictment and no suspicion to justify the detention on remand. He complained of having spent twenty-two months in detention in spite of being innocent. He added that when he had been at liberty from 23rd December 1963 to 15th March 1965 he had not attempted to abscond and there was therefore nothing to show he might do so now. As to the danger of his committing further offences, he stated that the dividing up of the land at Alkoven was a unique operation which could not be repeated and that, as the Roth couple has been made bankrupt, their assets were in the hands of the official assignee.

His application in the fraudulent bankruptcy case referred to that made in the fraud case.

71. The investigating judge refused the application for release in the fraudulent bankruptcy case on 22nd July 1966.

Ringeisen appealed on 8th August 1966; stating that his German was not fluent enough to enable him to explain in writing his appeal and circumstances correctly and in full detail, he said the reasons given in the Court of Appeal's decision of 9th February 1966 were fictitious and he applied to be allowed to prove this orally before the court; he complained of having spent twenty-two months in detention though innocent and referred to newspaper articles on his trial and to court documents to show he was being denied justice. He said he had done all he could to help the purchasers, who were of modest means, to obtain their rights. He exhibited a document to show he had never been insolvent and said his detention and his bankruptcy prevented him from arranging for the payment of his debts. He denied having frustrated execution of judgments by paying some debts preferentially; he said that, apart from the land at Alkoven, he had other means to secure and later refund the money which had been paid to him. If he was released as soon as possible, he stated, the purchasers would be spared further loss.

The Judges' Chamber dismissed the appeal on 24th August 1966 for the reason that the situation as regards the facts and the law had remained unchanged since the decisions of the Linz Court of Appeal of 16th June 1965, 9th December 1965 and 9th February 1966 and the circumstances therein set out still justified continuation of the detention for the danger of committing further offences.

72. The public prosecutor's office opposed Ringeisen's application for release in the fraud case on 9th September 1966 on the ground that the reasons for his detention continued to exist having regard, in particular, to the Supreme Court's decision (paragraph 43 above).

The application for release was refused by the Linz Regional Court on 21st September 1966. The court found that there was a danger of Ringeisen absconding as he had been finally convicted of fraud involving more than 1,300,000 AS and was faced with the prospect of a heavy sentence; there was also a danger of repetition of offences as found by the Court of Appeal on 2nd March 1966; as the case was to be reheard before the Regional Court on 18th October 1966 the detention on remand would in any event be terminated soon.

Ringeisen appealed against this decision the following day. As to the danger of absconding, he argued that his sentence would not be greater than that he had received on 14th January 1966 because his conviction on one count (Widmann) had been quashed and there were mitigating circumstances in his favour; furthermore, it had to be taken into consideration that he had spent almost two years in detention and that Austria was the centre of his private and business affairs. As to the danger of his committing further offences, he stated that the passage of time, the advanced stage reached in his bankruptcy and, once again, the two years spent in detention on remand showed that this danger did not exist. Finally, he invoked the imminent rehearing by the trial court as a special reason for his immediate release in order that his defence should not be seriously impeded.

The Linz Court of Appeal refused Ringeisen's appeal on 28th September 1966, finding that there was still a danger of absconding and a danger of his committing further offences. On the first point, it approved the decision of the lower court; on the second, it referred to its own decision of 2nd March 1966.

73. Ringeisen had made another application for release in the fraudulent bankruptcy case on 15th September 1966 in which he disputed there was any danger of further offences. First, he recalled that the facts on which he was charged dated back for two and a half years and that the prosecution alleged he had put 140,000 AS aside for himself. Although he had submitted an account showing an expenditure on his part for the year 1964 which exceeded that sum and in spite of his repeated requests, the investigating judge had never made enquiries into the matter and this was delaying his release. Lastly, he emphasised that his property and assets were frozen in bankruptcy and all his income went to the official assignee.

The investigating judge refused the application on 27th September 1966 and, on an appeal in which Ringeisen declared that the decision was an abuse of the law, the Judges' Chamber confirmed on 27th October 1966 the decision for the same reasons which it had given in its decision of 24th August 1966 (paragraph 71 above).

A further appeal, in which Ringeisen again alleged that the reasons for his detention were fictitious, was dismissed by the Linz Court of Appeal on 30th November 1966 by reference with approval to the reasons given by the Judges' Chamber; the Court of Appeal went on, solely for the sake of completeness, to note that Ringeisen would not gain any substantial advantage by obtaining a decision releasing him from detention in these proceedings, since he was also provisionally detained in the proceedings against him for fraud in which he had been sentenced on 18th October 1966 by the Linz Regional Court to five years' severe imprisonment and his appeal for annulment and against sentence was still pending before the Supreme Court.

74. Ringeisen applied again for provisional release, in each of the criminal proceedings, on 27th January 1967. In both applications, Ringeisen pleaded that on account of bad health he was unfit to be kept in detention. He asserted, moreover, that the alleged dangers of absconding and committing further offences were artificial in the fraud case; in the fraudulent bankruptcy case, he stated that the allegation made against him of having set aside 140,000 AS for his own use, would be shown to be untrue if his statements were checked but the court refused to do this.

75. On 8th February 1967, the Judges' Chamber of the Linz Regional Court refused the application for provisional release in the fraudulent bankruptcy case for reasons similar to those it had given on 24th August and 27th October 1966 (paragraphs 71 and 73 above).

76. The application for release in the fraud case was opposed by the public prosecutor's office on 9th February. The Linz Regional Court rejected the application on 15th February 1967, stating:

"In view of the existing conviction for fraud on numerous counts, which caused heavy loss, and of the sentence (five years) pronounced against the accused..., both grounds for detention must still be assumed to be valid. The length of detention on remand up to now has no bearing on the danger of his committing further offences. Nor, in view of the sentence pronounced, can his lengthy detention be allowed to rule out the possibility of his absconding. As regards both these grounds for detention reference is made for the rest, to the Linz Court of Appeal's decision of 2nd March 1966...."

As regards his plea of ill-health, the court noted that this could not justify release but, at most, transfer to a closed section of a hospital and that in any case the prison doctor had found Ringeisen's general state of health to be good on 1st February 1967.

Ringeisen appealed against this decision to the Linz Court of Appeal which decided, on 15th March 1967, that the appeal should be allowed and ordered that he should be released from detention on remand on his giving a solemn undertaking. The Court of Appeal found that Ringeisen's situation had changed considerably since its decision of 2nd March 1966. After about two and a half years spent in detention on remand it could no longer be reasonably assumed that he would abscond in order to avoid prosecution, even having regard to the sentence pronounced on 18th October 1966. As to the danger of his committing further offences, the Court of Appeal observed that two charges unconnected with the Alkoven property (fraud on F. Widmann and fraudulent conversion) had been discontinued on 14th September 1966; the only count remaining was that which concerned the fraud perpetrated on the 78 purchasers of sites at Alkoven. The court had already pointed out in the decision of 2nd March 1966 that Ringeisen could no longer deal with that property. Moreover, it could be expected that the length of his detention on remand would suffice to deter Ringeisen from committing further offences, especially as he had had no previous convictions.

77. Invoking this decision, Ringeisen applied again, on 20th March 1967, for his provisional release in the fraudulent bankruptcy proceedings. On this occasion, the public prosecutor's office expressed a favourable opinion on the application which was granted by the investigating judge. Ringeisen was accordingly released from detention the same day on his giving a solemn undertaking. His second detention had lasted two years and five days.

* *

*

78. In his application to the Commission (no. 2614/65), Ringeisen submitted a series of complaints, some concerning the criminal proceedings brought against him and the others relating to administrative and civil cases which he had introduced before the Austrian authorities. He alleged the violation of Articles 5, 6, 7, 10, 11 and 14 (art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 14) of the Convention and of Articles 1, 2 and 3 of the First Protocol (P1-1, P1-2, P1-3).

79. After having declared inadmissible, on 2nd June 1967, certain parts of the application, the Commission, on 18th July 1968, accepted the applicant's complaints as regards:

- Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), of the Convention concerning the length of Ringeisen's detention on remand in the fraud and fraudulent bankruptcy cases;

- Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), concerning the length of the proceedings in the same criminal cases;
- Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), concerning the refusal of the Austrian Constitutional Court to examine the allegations of bias on the part of members of the Regional Commission.

80. After the failure of the attempt to arrange a friendly settlement made by the Sub-Commission, the plenary Commission drew up a report as required under Article 31 (art. 31) of the Convention. The report was adopted on 19th March 1970 and transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe on 29th April 1970. The Commission expressed therein the following opinion:

- by eleven votes to one: the applicant's detention lasted beyond "a reasonable time", with the result that, in the present case, there was a violation of Article 5 (3) (art. 5-3);

- neither in the fraud case (unanimously) nor in the fraudulent bankruptcy case (eleven votes to one) did the length of the criminal proceedings taken against Ringeisen exceed "a reasonable time" within the meaning of Article 6 (1) (art. 6-1);

- by seven votes to five: Article 6 (1) (art. 6-1) has not been violated in the proceedings for approval of the contracts for sale because these proceedings did not involve the determination of "civil rights and obligations".

The report contains several separate opinions, some concurring, others dissenting.

AS TO THE LAW

81. The Court is called upon to decide the following three points:

I. Was Ringeisen the victim of a violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), of the Convention in the proceedings he introduced before the competent authorities for approval of a transfer of real property consisting of farmland?

II. Did the detention of Ringeisen exceed the limits of a reasonable time in violation of Article 5, paragraph (3) (art. 5-3)?

III. Did the duration of the criminal proceedings against Ringeisen exceed the limits of a reasonable time as laid down in Article 6, paragraph (1) (art. 6-1)?

I. As to the question whether Ringeisen was the victim of a violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), in the proceedings he introduced to obtain approval of a transfer of real property consisting of farmland

82. Against this complaint, the Government raised a plea of inadmissibility on the grounds that on this point the application did not satisfy the conditions of Article 26 (art. 26). The Commission has contested the Court's jurisdiction to rule on this submission as it considers that it is the only body empowered by the Convention to decide on the admissibility of applications.

In addition, the Government contended that Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), invoked by the applicant was inapplicable as this was not a case of the "determination of... civil rights and obligations" ("contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil"). The Commission expressed the same opinion by a majority and hence did not find it necessary to examine whether the proceedings put in issue were in conformity with the requirements of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1); a minority of five members expressed the view that the case did in fact involve the determination of civil rights.

83. Thus, within the framework of this complaint, the Court is or may be called upon to decide four points as follows:

(a) whether it has jurisdiction to deal with the admissibility;

(b) if so, the admissibility of the complaint under Article 26 (art. 26);

(c) if the reply to the second question is in the affirmative, the applicability of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), to the proceedings in question;

(d) if the reply to the third question is in the affirmative, the question whether this complaint is well-founded.

(a) As to jurisdiction

84. For the reasons stated in paragraphs 47 to 51 of the judgment of the plenary Court of 18th June 1971 in the De Wilde, Ooms and Versyp cases, the Court cannot accept the principal submission of the Commission; it therefore rules that it has jurisdiction.

(b) As to the substance of the submission of inadmissibility on the ground of non-exhaustion of domestic remedies

85. The Government observes that the application to the Commission was lodged on 3rd July 1965 while the final judgment of the Constitutional Court was not delivered until 27th September 1965. From this the Government infers that all domestic remedies had not been exhausted at the time when the application was made and that, consequently, the Commission was not competent to deal with the complaint.

86. In this connection, the representatives of the Government and the delegates of the Commission made lengthy submissions on the interpretation to be given to the first part of Article 26 (art. 26).

87. The representatives of the Government, relying on the French text of Article 26 (art. 26), argued that the Commission was seized ("saisie") of an application at the moment of its receipt by the Secretary General of the Council of Europe and that all domestic remedies had to be exhausted before the Commission may deal (être saisie) with a case so that an application could not be submitted validly if the first condition of Article 26 (art. 26) had not been fulfilled beforehand.

In their view, the second condition laid down by this Article (art. 26) confirmed, moreover, the necessity to keep to a strict interpretation of the words "the Commission may only deal...". In effect, it was perfectly clear that "the period of six months from the date on which the final decision was taken" put a limit to the time within which an application may validly be lodged and not to that within which the Commission may deal with the cases submitted to it.

88. The Commission's delegates, on the contrary, maintained that in the English text, which is equally authentic with the French text, the phrase "the Commission may only deal with" showed that non-exhaustion of domestic remedies did not prevent the lodging of the application, but solely its examination by the Commission.

In their view, the preparatory work provided a further reason to pay special attention to the English text: the original text of Article 26 (art. 26) having been drafted in French, the English-speaking experts of a drafting sub-committee first translated the sentence by the words "The Commission may only be petitioned after all domestic legal remedies have been exhausted...", which corresponded exactly to the literal meaning of the French text, and then substituted therefor the present English text, "The Commission may only deal with the matter...".

Even without referring to the English text - they continued - common sense showed, in any case, that at the very least the condition of exhaustion of domestic remedies written into Article 26 (art. 26) cannot oblige the applicant to do more than exercise all the remedies available to him; it would be hard to imagine that, before petitioning the international organs, he was bound to await the final domestic decision given at the close of a procedure the length of which did not depend exclusively on him. This interpretation was - they stated - the only one in conformity with the ratio legis of the rule of exhaustion of domestic remedies, namely the protection of the States against any decision holding them responsible for a violation of an international obligation without the competent national authorities having been seized of the complaint in order to remedy the situation where necessary. This concern doubtless implied that no international verdict should be given before the final decision of the national courts but not that such a final decision must be prior in point of time to the lodging of the international application.

Lastly, in their submission, it was wrong to argue against this wide interpretation by relying on the six-months rule laid down in the last part of Article 26 (art. 26). The sole purpose of this provision was to fix clearly a time-limit beyond which matters finally decided by the domestic courts cannot again be put in issue before the Commission.

89. The Court does not consider that it can adopt either of these extreme positions.

On the one hand, it would certainly be going too far and contrary to the spirit of the rule of exhaustion of domestic remedies to allow that a person may properly lodge an application with the Commission before exercising any domestic remedies.

On the other hand, international courts have on various occasions held that international law cannot be applied with the same regard for matters of form as is sometimes necessary in the application of national law. Article 26 (art. 26) of the Convention refers expressly to the generally recognised rules of international law. The Commission was therefore quite right in declaring in various circumstances that there was a need for a certain flexibility in the application of the rule (see, for example, the decision of 30th August 1958 on the admissibility of application No. 332/57, *Lawless v. Ireland*, Yearbook of the Convention, Vol. 2, pp. 324-326).

90. It may furthermore be observed that the original applications addressed to the Commission are frequently followed, within a short time, by additional documents the purpose of which is often to fill the gaps or clarify obscure points which are indicated to the applicant by the Secretary of the Commission during the preliminary examination which he carries out. There is no reason why this supplement to the initial application should not relate in particular to the proof that the applicant has complied with the conditions of Article 26 (art. 26), even if he has done so after the lodging of the application. When the Commission decides whether or not a case is inadmissible, its examination is directed necessarily to the application and the supporting documents considered as a whole.

91. Thus, while it is fully upheld that the applicant is, as a rule, in duty bound to exercise the different domestic remedies before he applies to the Commission, it must be left open to the Commission to accept the fact that the last stage of such remedies may be reached shortly after the lodging of the application but before the Commission is called upon to pronounce itself on admissibility.

92. The Court further notes that individual applications often come from laymen who, in more than nine cases out of ten, address themselves to the Commission without legal assistance. A formalistic interpretation of Article 26 (art. 26) would therefore lead to unfair consequences.

93. In the present case, it is clear that Ringeisen exercised, before he lodged his application with the Commission, every domestic remedy which was available to him; nor is it contested that a final domestic decision was taken. It is true that the Constitutional Court delivered its judgment only after the application had been made to the Commission but the relevant acts in the domestic and international proceedings occurred in the following order:

- the constitutional appeal was lodged on 2nd April 1965;
- the application to the Commission was lodged on 3rd July 1965 and registered on 24th September 1965;
- the judgment of the Constitutional Court was delivered on 27th September 1965;
- the applicant informed the Commission of this on 13th May 1966 and complained that the Constitutional Court had rejected the appeal made by him against the Regional Commission's decision of 3rd February 1965;
- the Commission gave, on 2nd June 1967, a partial decision on admissibility and then a final decision, after receiving the Government's observations, on 18th July 1968.

Reference to these facts suffices to show that no legitimate interest of the respondent State could have been prejudicial in the present case through the fact that the application was lodged and registered a short while before the final decision of the Constitutional Court.

The Court therefore rejects as unfounded the submission of inadmissibility grounded on the inobservance of Article 26 (art. 26).

(c) As to the question whether the present complaint involves the determination of civil rights and obligations

94. For Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), to be applicable to a case ("contestation") it is not necessary that both parties to the proceedings should be private persons, which is the view of the majority of the Commission and of the Government. The wording of

Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), is far wider; the French expression "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" covers all proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations. The English text "determination of... civil rights and obligations", confirms this interpretation.

The character of the legislation which governs how the matter is to be determined (civil, commercial, administrative law, etc.) and that of the authority which is invested with jurisdiction in the matter (ordinary court, administrative body, etc.) are therefore of little consequence.

In the present case, when Ringeisen purchased property from the Roth couple, he had a right to have the contract for sale which they had made with him approved if he fulfilled, as he claimed to do, the conditions laid down in the Act. Although it was applying rules of administrative law, the Regional Commission's decision was to be decisive for the relations in civil law ("de caractère civil") between Ringeisen and the Roth couple. This is enough to make it necessary for the Court to decide whether or not the proceedings in this case complied with the requirements of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), of the Convention.

(d) As to whether the complaint that Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), was not observed is well-founded

95. The Court has not found any facts to prove that Ringeisen was not given a "fair hearing" of his case. Besides, the Court observes that the Regional Commission is a "tribunal" within the meaning of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), of the Convention as it is independent of the executive and also of the parties, its members are appointed for a term of five years and the proceedings before it afford the necessary guarantees (see, *mutatis mutandis*, the Neumeister judgment of 27th June 1968, Series A, p. 44, paragraph 24, and the De Wilde, Ooms and Versyp judgment of 18th June 1971, paragraph 78).

96. The applicant, however, accused six members of the Regional Commission of bias; when these complaints were brought before it, the Constitutional Court did not find it necessary to examine their substance for the reason that, as stated in its judgment of 27th September 1965, the question of bias had no bearing on the competence of the Regional Commission which was the only question submitted to its supervision (paragraph 23 above).

97. It is not the function of the European Court to pronounce itself on the interpretation of Austrian law on which the said judgment is based or to express an opinion on the manner in which it was substantiated; on the other hand, it is the Court's duty to examine the grounds relied upon by Ringeisen and to determine whether or not the Regional Commission respected the rule of impartiality laid down in Article 6, paragraph (1) (art. 6-1).

The Court finds that even if Ringeisen's assertions were in fact true they would not support the conclusion that there was bias on the part of the Regional Commission. In the case of such a board with mixed membership comprising, under the presidency of a judge, civil servants and representatives of interested bodies, the complaint made against one member for the single reason that he sat as nominee of the Upper Austrian Chamber of Agriculture cannot be said to bear out a charge of bias. The same holds true for the complaint made against a member who was alleged by Ringeisen to have made certain statements the precise tenor of which the Regional Commission was, moreover, at pains to restore (paragraph 22 above). As to the twofold fact that the president had represented the Regional Commission before the Constitutional Court in 1964 and that another member had been heard as a witness, this is obviously immaterial. Nor, finally, can any grounds of legitimate suspicion be found in the fact that two other members had participated in the first decision of the Regional Commission, for it cannot be stated as a general rule resulting from the obligation to be impartial that a superior court which sets aside an administrative or judicial decision is bound to send the case back to a different jurisdictional authority or to a differently composed branch of that authority.

98. Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), is not limited, however, to ensuring that in every determination of civil rights and obligations there must be a fair hearing within a reasonable time; it also requires, at least as a general rule, that the case be heard and the judgment pronounced in public.

The Court could have verified, even *proprio motu* - and subject to the reopening of the hearings on this point - whether the District and Regional Commissions had complied with this rule or whether they were entitled to depart from it.

The Court has not undertaken this examination because Austria's ratification of the Convention was made subject to the following reservation:

"...

The provisions of Article 6 (art. 6) of the Convention shall be so applied that there shall be no prejudice to the principles governing public court hearings (*im gerichtlichen Verfahren*) laid down in Article 90 of the 1929 version of the Federal Constitution Law.

..."

The said Article 90 is worded as follows:

"Hearings in civil and criminal cases (*in Zivil- und Strafrechtssachen*) by the trial court shall be oral and public. Exceptions may be prescribed by law.

..."

This reservation does not refer expressly to administrative proceedings but only to civil and criminal cases, that is, no doubt, the cases dealt with by the civil or criminal courts. Yet it must be accepted that the reservation covers a *fortiori* proceedings before administrative authorities where their subject matter is the determination of civil rights and where, therefore, the said authorities are considered to be tribunals within the meaning of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1). This is the case of the proceedings commenced by Ringeisen's request for approval on 30th March 1962.

99. For these reasons, the Court reaches the conclusion that there was no violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), in the proceedings relating to that request.

II. As to the question whether the detention of Ringeisen exceeded the limits of a reasonable time in violation of Article 5, paragraph (3) (art. 5-3)

100. Ringeisen was detained in connection with two separate prosecutions, the first for fraud and fraudulent conversion (paragraphs 24 to 48 above), the second for fraudulent bankruptcy consisting mainly in the concealment of assets to the prejudice of creditors (paragraphs 49 to 56 above).

Each of these prosecutions gave rise to a warrant of arrest. The first warrant was issued on 30th July 1963 in the fraud case and led to the first detention which ended on 23rd December 1963 (paragraphs 57 to 59 above). The second warrant was issued on 15th March 1965 in the fraudulent bankruptcy case and, in addition, a decision to detain Ringeisen again in the fraud case was taken on 12th May 1965; the detention in the two proceedings ended by decisions to release him made, respectively, on 15th and 20th March 1967 (paragraphs 61, 63, 76 and 77 above).

The detention of Ringeisen in the two cases lasted in all nearly two years and five months.

101. The first period of detention (5th August to 23rd December 1963) would, if considered alone, fall outside the scope of the Court's examination: the last decision given on appeal dismissing a request for release was made on 23rd September 1963, that is, far more than six months before the lodging of the application with the Commission (3rd July 1965). Nevertheless, these four and a half months of the first detention must be added to the periods which followed for the purpose of assessing the reasonableness of the whole period of detention on remand in the fraud case (see the Neumeister judgment of 27th June 1968, Series A, As to the Law, p. 37, paragraph 6).

102. As regards the second period of detention (15th March 1965 to 20th March 1967) it occurred entirely in the context of the proceedings for fraudulent bankruptcy, while the new detention ordered in the course of the prosecution for fraud lasted for only part of this time (12th May 1965 to 15th March 1967). It would therefore seem appropriate first to examine the reasonableness of the duration of the detention in the context of the fraudulent bankruptcy case; and all the more so as the representatives of the Government have not sought to justify before the Court either the decision taken on 12th May 1965 by the investigating judge to hold Ringeisen in detention again in the fraud case or the decisions taken later by the competent courts when they dismissed Ringeisen's requests for release in the same proceedings.

103. The warrant of arrest issued on 15th March 1965 in the fraudulent bankruptcy proceedings was in itself somewhat surprising; the first investigating judge, who dealt with the charges of fraud, had already thoroughly examined the way Ringeisen had used the money received from the sale of plots. There is no doubt that numerous further complaints were made to the public prosecutor's office after 23rd December 1963 by purchasers who had paid at least part of the agreed purchase price, had not been able to get title to their sites because of the refusal to approve the contracts and had not obtained a refund of their payments, but all these transactions resulted from those which had been investigated in the fraud proceedings and it would have been natural to investigate them in the framework of the first case. Furthermore, the Court finds that, apart from the interrogations of Ringeisen, no measures of investigation were taken for three years in regard to the second prosecution.

However, once there was "reasonable" suspicion that Ringeisen had committed offences other than those with which he was charged in the first prosecution, his arrest in connection with them is covered by Article 5, paragraph (1) (c) (art. 5-1-c), of the Convention and is thus not subject to supervision by the Court.

104. The Court, however, has still to consider whether the length of the detention of Ringeisen in connection with this second prosecution exceeded the limits of the "reasonable time" referred to in Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), and hence to assess the reasons given by the Austrian courts to justify the dismissal of the Applicant's requests for release (see, for example, the Neumeister judgment of 27th June 1968, Series A, p. 37, paragraph 5).

105. First of all, it is to be observed that, unlike those dealing with similar requests made in the first criminal proceedings, the authorities which had to take decisions in the second case never alleged that there was a danger of absconding; the reasons invoked were danger of collusion on the one hand and danger of committing further offences on the other.

106. The first reason does not stand up to examination. The police inquiries ordered by the investigating judge into the acts of fraudulent bankruptcy had in fact begun on 31st August 1964 and Ringeisen had been examined as early as 3rd September, and again on 20th October 1964 (paragraph 49 above). He remained at liberty however for almost five months after this latter date. If he had wished to tamper with witnesses - supposing that the investigating judge had proposed to hear some - he would have had every opportunity to do so in the interval.

107. As to the danger of committing further offences, the principal complaint which led to the bringing of the new prosecution of Ringeisen consisted of the allegation that he had negotiated fictitious transactions with an insurance company in order to conceal from his own creditors sums of money which were due to him by the company for commission (paragraphs 53 and 61 above).

The facts thus alleged against him dated, however, from the first half of 1964. In the interval, a provisional receiver had been appointed on 23rd March 1965 at the request of certain creditors (paragraph 51 above). What is even more, Ringeisen was adjudged bankrupt on 14th May 1965 with the consequence that from that date onwards not only was the administration of his property outside his power but no debt due could be paid validly to him in person if indeed he had any debtors other than the insurance company (paragraph 52 above).

The Court accordingly considers that the detention in the fraudulent bankruptcy case exceeded the reasonable limit at least as from 14th May 1965.

108. The same is true of Ringeisen's detention in the fraud case for the greater part of this period.

The decisions to detain him again and to keep him in custody, taken after 12th May 1965 in connection with this prosecution, invoked the dangers of his absconding and of his committing further offences (paragraphs 61 to 76 above). No precise information was given, however, as to any circumstances arising after 12th May 1965 which caused such dangers to appear or to reappear.

This observation is especially pertinent as regards the danger of his committing further offences. As the Linz Court of Appeal had pointed out on 19th December 1963 when deciding to release Ringeisen, the case had attracted a lot of publicity and it was therefore most unlikely that Ringeisen would be able to seek and find other purchasers (paragraph 58 above). Once it became absolute, the withdrawal of the powers of attorney had in any event made any new negotiation for the sale of plots legally impossible; and, moreover, there had not in fact been any such negotiation since the middle of 1963 (paragraphs 17, 18 and 58 above).

The explanation of the decision of 12th May 1965 clearly lies in the fact that, since 15th March 1965, Ringeisen was being held in detention under a warrant of arrest issued by the judge who was investigating the charges of fraudulent bankruptcy; and, indeed, one of the Government's counsel let it be understood that the decision itself was scarcely defensible in Austrian law. The predominant part played at the outset by the provisional detention in the fraudulent bankruptcy case was again made clear a few months later: on 24th and 27th September 1965, Ringeisen had attacked the two decisions of the investigating judges who, in both cases, had rejected his requests to be released but the file contains only one decision of the Judges' Chamber dismissing an appeal, that given on 10th November 1965 in the fraudulent bankruptcy case (paragraph 64 above; see also paragraph 65).

109. The Government, however, recalled that Ringeisen was convicted of fraud on 14th January 1966; the Government deduced therefrom that the detention put in issue, which it describes as "Überhaft", had taken on as from that date a different character which removed it from the application of Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), because it was covered unconditionally by Article 5, paragraph (1) (a) (art. 5-1-a). On this point, the Government relied on the dictum in the Wemhoff judgment of 27th June 1968 (Series A, pp. 23-24, paragraph 9).

As against this, the Commission requested the Court to review the decision it had taken on the point in the earlier case, or at least to interpret it in such way that detention after conviction may be considered as remaining subject to Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), until the conviction becomes final in cases where the national law of the respondent State maintains up to that time the provisional character of the detention (on remand), makes the detention subject to the same conditions and affords to the detained person the same remedies.

The Court does not consider it necessary to pronounce itself on the submissions made on this point by the Government and the Commission. Indeed, the new detention ("Überhaft"), which was ordered on 12th May 1965 and lasted until 15th March 1967 in the fraud case, fell entirely within the limits of the remand in custody in the fraudulent bankruptcy case which was ordered on 15th March 1965 and finished only on 20th March 1967. The new detention can be explained in fact only by the other detention. The conviction of Ringeisen on 14th January 1966 did not change this situation.

It is significant in this connection that, in opposing the request for release made on 14th January 1966 by Ringeisen to the court which had just convicted him of fraud, the public prosecution submitted, in particular, that a decision to release him, if made, would be of no use to Ringeisen because he was also being held in detention under another order remanding him in custody in the fraudulent bankruptcy case (paragraph 67 above).

It is true that on 30th November 1966 the Linz Court of Appeal observed for its part that Ringeisen could gain nothing from a decision to release him in the fraudulent bankruptcy case because he was also detained in the other case (paragraph 73 above), but this only serves to confirm the interconnecting link which at all times subsisted between the two detentions (paragraph 108 above). Having held that the detention in the fraudulent bankruptcy case exceeded the reasonable time provided for in Article 5, paragraph (3) (art. 5-3) (paragraph 107 above), the Court considers that this finding applies to the whole of Ringeisen's detention up to 20th March 1967, the date of his release.

III. As to the question whether the duration of the criminal proceedings against Ringeisen exceeded the limits of a reasonable time as laid down in Article 6, paragraph (1) (art. 6-1)

110. The Court shares the Commission's opinion that the length of the fraud proceedings - preliminary investigations were opened on 21st February 1963 and the final decision was taken on 24th April 1968 - resulted from both the complexity of the case and the innumerable requests and appeals made by Ringeisen not merely for his release, but also challenging most of the competent judges and for the transfer of the proceedings to different court areas.

This also applies, to a large extent, to the proceedings for fraudulent bankruptcy, at least as regards the investigation prior to the filing of the indictment on 24th March 1966. Even for the subsequent period, it is understandable that the public prosecutor thought it wise, by reason of the clear connection between the facts relevant in this case and the facts supporting the prosecution for fraud, to wait until there was a final conviction and sentence in the fraud case before withdrawing the prosecution in accordance with Article 34, paragraph 2, first sub-paragraph, of the Code of Criminal Procedure. This explains why the fraudulent bankruptcy proceedings were allowed to stagnate.

The Court therefore reaches the conclusion that there was no violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1).

FOR THESE REASONS, THE COURT,

I. As to the question whether Ringeisen was the victim of a violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), in the proceedings he introduced to obtain approval of a transfer of real property consisting of farmland

1. Holds unanimously that the Court has jurisdiction to examine the submission of non-exhaustion of domestic remedies made in this connection;

2. Holds by six votes to one that this submission is not well-founded;

3. Holds unanimously that Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), was applicable to the proceedings in question;
4. Holds unanimously that in the proceedings in question there has been no violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1);
II. As to the question whether the detention of Ringeisen exceeded the limits of a reasonable time in violation of Article 5, paragraph (3) (art. 5-3).

5. Holds by five votes to two that the detention of the applicant constituted a breach of Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), from 14th May 1965 to 14th January 1966;

6. Holds by four votes to three that likewise after 14th January 1966, and up to 20th March 1967, the detention was continued in breach of the same provision of the Convention;

7. Reserves for the Applicant the right, should the occasion arise, to apply for just satisfaction as regards these violations;

III. As to the question whether the duration of the criminal proceedings against Ringeisen exceeded the limits of a reasonable time as laid down in Article 6, paragraph (1) (art. 6-1)

8. Holds unanimously that in the proceedings in question there has been no violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1).

Done in French and English, the French text being authentic, at the Human Rights Building, Strasbourg, this sixteenth day of July one thousand nine hundred and seventy-one.

Signed: H. ROLIN President

Signed: J.F. SMYTH Deputy Registrar on behalf of the Registrar

The following separate opinions are annexed to the present judgment in accordance with Article 51 (2) (art. 51-2) of the Convention and Rule 50 (2) of the Rules of Court :

- opinion of Judges Wold and Sigurjónsson;
- opinion of Judge Verdross;
- opinion of Judge Holmbäck;
- opinion of Judge Zekia.

Initialled: H. R.

Initialled: J. F. S.

JOINT SEPARATE OPINION OF JUDGES WOLD AND SIGURJONSSON

As to the jurisdiction (paragraph 84 of the judgment), Judges Wold and Sigurjónsson refer to their respective dissenting opinions in the De Wilde, Ooms and Versyp cases, but feel themselves obliged to defer to the opinion of the majority of the Court on this point.

SEPARATE OPINION OF JUDGE VERDROSS

(Translation)

I find to my regret that I do not agree with the Chamber's judgment on two main points.

1. First, I am unable to accept the interpretation given in the judgment to Article 26 (art. 26) of the Convention for the following reasons:

According to the French text of Article 26 (art. 26), the Commission may only be "saisie" (seized of) after exhaustion of domestic remedies, while the English text provides that the Commission "may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted". Faced with these two equally authentic texts, the Commission may not select the text which seems to it to be the most practical but must endeavour to find an interpretation which, having regard to the object and purpose of the treaty, best "reconciles" these texts (Article 33, paragraph 4, of the Vienna Convention on the Law of Treaties).

There is no doubt that the French term "saisir" has a clear and specific meaning while the English expression "deal with" has a wider meaning, because every act of an authority in regard to a case brought before it is to "deal with". This expression therefore also covers the registration of a case by the Commission; from this it clearly results that only the French version can be reconciled with the two texts.

This interpretation is even forced upon us by the fact that the verb "deal with" ("saisir") refers to the two clauses in Article 26 (art. 26), namely, the exhaustion of domestic remedies and the six-month time-limit. If then one were to accept the interpretation adopted by the Commission whereby the term "deal with" ("saisir") means "concern itself with an application" ("s'occuper d'une affaire") one would reach the absurd conclusion that the Commission could concern itself with a case only within the time of six months from the date of the final domestic decision.

My interpretation finds confirmation in the provision contained in Article 27, paragraph (3) (art. 27-3), which obliges the Commission to reject any petition contrary to Article 26 (art. 26). The Commission cannot, therefore, decide whether the conditions for the admissibility of an application are fulfilled ex nunc, that is at the time it begins to examine the case : the Commission must decide whether the application as such fulfilled ex tunc the conditions of Article 26 (art. 26).

Against this interpretation the Commission and the Chamber invoke the practice in international judicial precedents. It is true that Article 26 (art. 26) refers to "the generally recognised rules of international law". However, the reference in that Article is made within the framework of the special provisions of Article 26 (art. 26) and this can be done because the rules of general international law on the exhaustion of domestic remedies do not form part of the jus cogens. The special conditions of Article 26 (art. 26) therefore prevail over the general rules of international law. For this reason, it seems to me superfluous to undertake an analysis of international practice in the matter.

Nor is the interpretation given here to Article 26 (art. 26) upset by the purpose of this Article, for all the provisions which mark out the limits of an international body's jurisdiction in the field in question are designed to protect the States from finding themselves arraigned at international level before they have had an opportunity to redress a violation which may possibly have been committed by an organ of lower rank. Consequently, every provision in this category must be interpreted strictly.

I am not unaware that it would perhaps be more appropriate to amend Article 26 (art. 26) in the way in which the Chamber has interpreted it, but the Commission and the Court must apply the Convention as it has been drafted by the High Contracting Parties. Like the International Court of Justice, "it is the duty" of our Court "to interpret the Treaties, not to revise them" (Advisory Opinion of July 18th, 1950 on the Interpretation of the Peace Treaties, 1950 Reports, p. 229).

2. Nor am I able to follow the Chamber when it declares that the detention of the Applicant, after his conviction on 14th January 1966 for fraud, was only a prolongation of the detention ordered in the fraudulent bankruptcy case. Admittedly, when opposing the request for release made by Ringeisen on 14th January 1966, the public prosecution pointed out that Ringeisen would gain nothing by being released in the fraud case because he was also being held in detention in the fraudulent bankruptcy case. The Linz Court of Appeal, however, which allowed the public prosecution's appeal on 2nd March 1966, observed explicitly that the main reason to keep Ringeisen in detention was the fact that after the conviction for fraud there was an enhanced danger of his absconding as he could expect a heavy sentence.

It cannot in fact be contested that a danger of absconding may arise the moment a person who considers himself to be innocent and consequently is not thinking of flight finds himself faced with the new situation of an unexpected conviction. Even if one denies the existence of such a danger, one cannot ignore the fact that the Court of Appeal declared formally that it was maintaining the additional detention in the fraud case, although there was no need to maintain it for the purpose of preventing Ringeisen from absconding as he was also being held in detention in the fraudulent bankruptcy case. From this decision of the Court of Appeal onwards, the detention in the fraud case became predominant.

On 6th July and 30th November 1966, the Linz Court of Appeal, in dismissing further requests for release, held again that there was a danger of absconding which resulted especially from the severity of the sentence imposed for fraud. In the second of these decisions, the Court of Appeal added that Ringeisen would not gain any advantage by being released in the fraudulent bankruptcy case since he was also being held in detention in the fraud case in which he had been convicted and then sentenced, on 18th October 1966, to five years' severe imprisonment.

Lastly, Ringeisen was released by decision of the Court of Appeal on 15th March 1967 for the reason that the circumstances concerning the dangers of flight and of his committing further offences in the fraud case had completely changed, while his detention in the fraudulent bankruptcy case was terminated only as a consequence of the first order for his release.

From what precedes it emerges clearly that, after the conviction and sentence on 14th January 1966 for fraud, Ringeisen's detention was maintained above all by reason of the danger of absconding which resulted from the conviction and sentence and from the second sentence pronounced in the same case on 18th October 1966. Consequently, this detention was no longer governed by Article 5, paragraph (1) (c) (art. 5-1-c), but by Article 5, paragraph (1) (a) (art. 5-1-a), as the Court has acknowledged in the Wemhoff case and as the dissenting opinion of Judge Zekia makes abundantly clear in the present case.

These reasons are valid a fortiori in the present case where none of the conditions of Article 5, paragraph (1) (c) (art. 5-1-c), is fulfilled. In effect, Ringeisen did not appear in the appeal proceedings on the matter of his guilt and the Regional Court definitively found the facts and reached a verdict of guilt which was not in substance modified by the Supreme Court. One cannot, therefore, say that even after this verdict Ringeisen was merely suspected of having committed an offence within the meaning of Article 5, paragraph (1) (c) (art. 5-1-c).

SEPARATE OPINION OF JUDGE HOLMBZCK

According to my opinion the Austrian authorities (the investigating judges, the Judges' Chamber of the Regional Court of Linz, the President of that court, the Regional Court itself, the Linz Court of Appeal) had sufficient reasons to refuse the requests of Ringeisen to be released pending trial. Consequently, I could not join the majority of the European Court in its conclusion that the Republic of Austria violated Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), of the Convention.

SEPARATE OPINION OF JUDGE ZEKIA

The main issues involved in this case are two:

1. Whether Ringeisen was a victim of a violation of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), of the Convention in respect of
 - (a) the proceedings introduced by him with a view to securing the approval of the Austrian authorities for a transfer of farmland in his name;
 - (b) the length of time taken in the determination of the criminal charges brought against him;
2. Whether the periods of Ringeisen's detention exceeded the reasonable time laid down in Article 5, paragraph (3) (art. 5-3), of the Convention.

For the factual aspect of the case I am content to refer to the judgment of the Court. For the issue No. 1, I respectfully associate myself with the views taken and conclusions arrived at by the Court.

As to the second issue, namely, whether Ringeisen was kept in detention pending his trial beyond a reasonable time, I feel unable to share the opinion of my learned colleagues constituting the majority of the Court. I proceed therefore to give, as briefly as possible, my reasons for doing so.

The time of the detention of Ringeisen can be divided into three periods:

1st period, lasted from 5th August 1963 to 23rd December 1963;

2nd period, lasted from 15th March 1965 to 14th January 1966 - the latter date being the date of his conviction;

3rd period, lasted from 14th January 1966 (date of his conviction) to 20th March 1967 (date of his release).

If, in considering the alleged violation of Article 5 (3) (art. 5-3), I could properly put together the three periods of detention given above, I would not have any difficulty in joining the majority and finding a contravention on the part of the Republic of Austria of Article 5 (3) (art. 5-3) of the Convention. In my view, however, we are not entitled to take into account, for the purpose of assessing the reasonableness of the length of the detention under Article 5 (3) (art. 5-3), the period of Ringeisen's detention after his conviction. Such detention having been effected or continued following the conviction cannot be considered on the same footing as a detention under Article 5 (1) (c) (art. 5-1-c) with which Article 5 (3) (art. 5-3) is solely concerned. On the other hand, we cannot assume that a detention ordered under Article 5 (1) (c) (art. 5-1-c), even if not expressly revoked, can continue to be reckoned as detention for the purpose of Article 5 (3) (art. 5-3) after the person detained is convicted by a competent court. Moreover, a person kept in detention consequent upon conviction cannot complain of deprivation of liberty under Article 5 (3) (art. 5-3) which applies only to persons in custody awaiting their trial. In this connection, I can usefully refer to paragraph 9 at page 23 in the Wemhoff judgment (27th June 1968).

Accepting the suspensive effect of an appeal and a plea of nullity entered by a convicted person against the conviction and the sentence of imprisonment - and this might be the case in certain systems of law prevailing on the Continent - I am yet far from being persuaded that a period of detention after conviction falls within the ambit of Article 5 (3) (art. 5-3).

The fundamental principle underlying Article 5 (3) (art. 5-3) in my view is what is contained in Article 6 (2) (art. 6-2) which reads "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law".

Article 5 (1) (a) (art. 5-1-a) expressly provides that a person may properly be deprived of his liberty after conviction by a competent court. From what is quoted it can safely be deduced that the presumption of innocence, after conviction by a competent court, is replaced by a presumption of guilt. The presumption of guilt is only a rebuttable one; it becomes final and conclusive after the decision of an appellate court or by lapse of the time allowed for appeal if no appeal is lodged against such conviction.

Furthermore, I would like to say a few words on the character of the detention of the applicant after his conviction on 14th January 1966.

It has been argued that Ringeisen was not detained after 14th January 1966 on the strength of his conviction but only by virtue of an order of detention issued against him on 15th March 1965 - on fraudulent bankruptcy charges - which in reality continued to be in force even after the date of conviction and up to the time he was released from detention in that case. From this it might be inferred that the continued detention after the date of conviction cannot be considered as one under Article 5 (1) (a) (art. 5-1-a). Bearing in mind the suspensive effect of the applicant entering an appeal and plea of nullity and of what has been stated on that occasion before the court by the counsel for the prosecution, this view carries a certain amount of weight. But against this one might advance the following points. For the purpose of Article 5 (3) (art. 5-3) the kind of detention we are concerned with is the one effected under Article 5 (1) (c) (art. 5-1-c). Therefore in order to rule on the relevancy of the post conviction period of detention for Article 5 (3) (art. 5-3), we must be able to say that the detention of the applicant during such period did not lose its previous character. I very much doubt this line of reasoning and I am inclined rather to the opposite view on this point.

The conviction of January 1966 ordering the imprisonment of Ringeisen was there without being set aside by any judicial authority and, indeed, the conviction for fraud on the 78 purchasers was upheld by the Supreme Court and the reassessment of sentence, together with other matters, was referred back to the trial court. Apart from this, as early as 12th May 1965 the Linz Regional Court had ordered the detention of Ringeisen in the fraud case. While the fraudulent bankruptcy proceedings may not have been substantiated by evidence and were in fact later withdrawn, the main charge of fraud, however, ended with a conviction which was upheld by the appellate court.

The utmost one might say is that the exact reason or reasons for the detention of the Applicant after his conviction is or are not clear. But if one can reasonably attribute more than one reason for such detention and if there is only one valid reason justifying the continuation of the detention, that is enough to take the third period out of consideration under Article 5 (3) (art. 5-3).

One must not lose sight of the fact that the predominant object of Article 5 (3) (art. 5-3) is to guard against keeping a person in custody beyond such time as is reasonably required to prepare his case and bring him before the court for a judicial decision. In other words, the aim is not to keep suspects in detention in the absence of adequate evidence and not to punish them only on the ground of suspicion. After the hearing of evidence and the conviction by the competent court in January 1966, it is very difficult to accept that there is room for the operation of Article 5 (3) (art. 5-3).

For these reasons, I am of the opinion that the period of detention of Ringeisen as from 14th January 1966 to 20th March 1967 cannot be added to the other periods of detention in considering the alleged violation of Article 5 (3) (art. 5-3).

I come now to the remaining two periods.

The first period of detention lasted only four months and eighteen days. Taken by itself this period is not unreasonably long for investigating a great number of frauds allegedly committed by the Applicant.

Can we consider periods 1 and 2 conjointly? I do not think we can properly do this either. The alleged commission of frauds involving not less than 78 purchasers and a number of fraudulent conversions preceded the fraudulent bankruptcy charges, the investigation of which started much later.

Similar offences committed within a short period of time might reasonably be expected to be dealt with together by investigating authorities. A suspected person in custody might claim protection under Article 5 (3) (art. 5-3) for the whole lot at one time. But when distinct offences are committed much later or are discovered much later and the same suspect rearrested and kept in custody for a subsequent group of offences, fresh investigations start and a new period of detention begins to run. In such a case, investigating authorities are amply justified in seeking to exclude from consideration earlier periods of detention under Article 5 (3) (art. 5-3).

Proximity of time and place is an important factor in this respect. In such cases, different periods of detention should be considered separately, but not conjointly, even if the latter group of offences are in some way or other related to the former.

It remains for me now to consider whether the second period of detention taken alone amounts to a violation of Article 5 (3) (art. 5-3). I am not convinced that in the circumstances of the case there is a violation.

The second period of detention lasted ten months. The authorities, including the investigating judges, had to examine multiple offences alleged to have been committed by Ringeisen. The Applicant uninterruptedly flooded the courts and other authorities with all sorts of applications and appeals, alleging bias on the part of the judges and other authorities, challenging the integrity of the judges and attacking the composition of the courts. His complaints turned out to be entirely untenable and unfounded. In other words, he was all the time abusing the process of the court with the result of prolonging unnecessarily the proceedings in the investigation and of delaying the completion of his case by preventing it from being brought before the court for trial. The conduct of the complainant evidently contributed to a great extent to the length of his detention. In the circumstances I do not think that violation of Article 5 (3) (art. 5-3) by the Austrian authorities has been established.